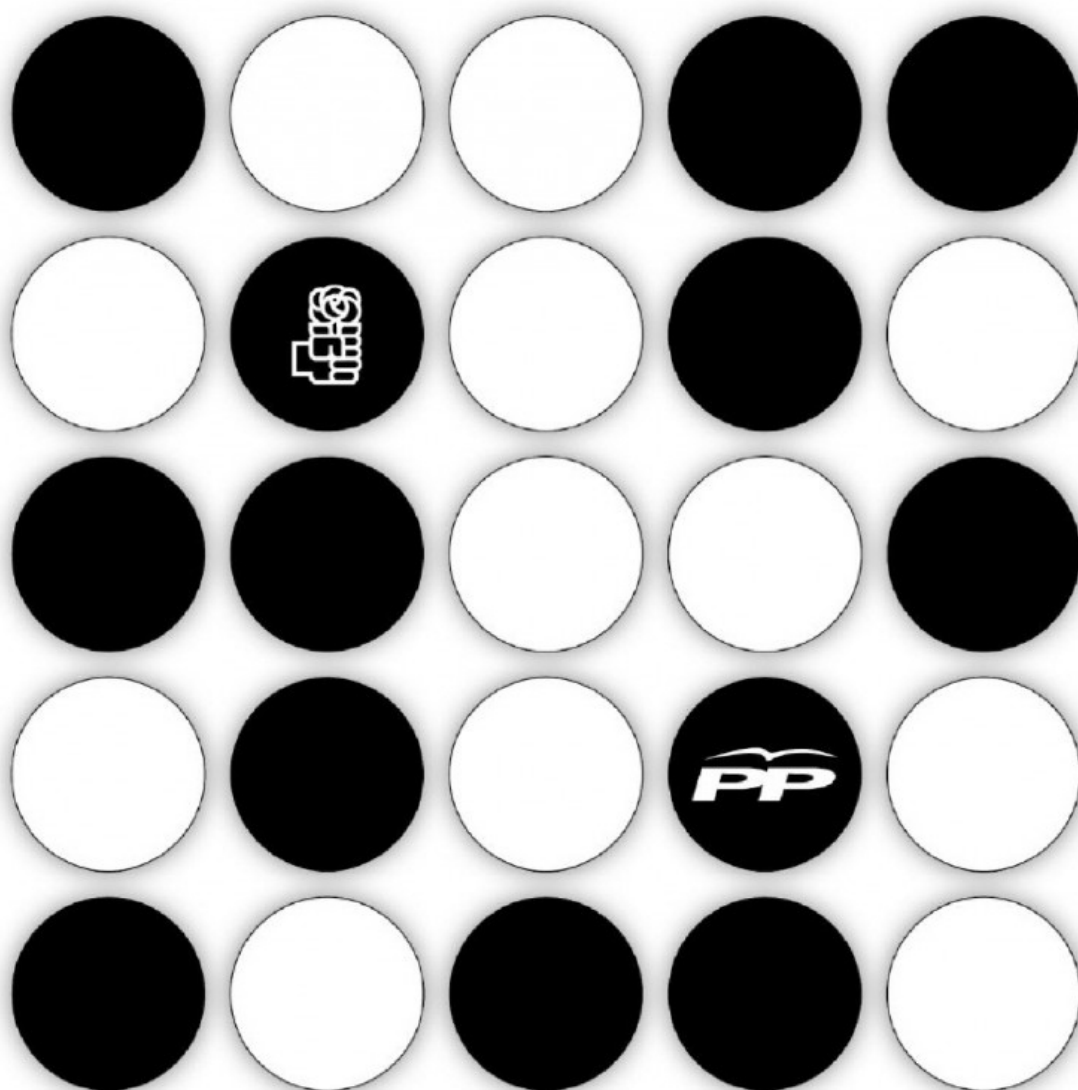


¿Por qué tantos políticos hablan tan mal del inmigrante?

Los discursos de PP y PSOE sobre los nuevos ciudadanos

David Page Polo



¿Por qué tantos políticos hablan tan mal del inmigrante?

Los discursos de PP y PSOE sobre los nuevos ciudadanos

David Page Polo

NOTA: Este libro analiza los discursos de PP y PSOE en torno a la inmigración entre 2005 y 2010. Son éstos los años en que la inmigración fue uno de los temas que más condicionaron las estrategias de comunicación de ambos partidos. En una próxima revisión del texto se ampliará el análisis a la posterior utilización (u ocultación) que de esta temática han hecho ambas formaciones en los años siguientes.

*A Elisa, inmigrante de mi casa.
A Claudia, que a todos nos ve iguales.*

¿Por qué tantos políticos hablan tan mal del inmigrante?

Los discursos de PP y PSOE sobre los nuevos ciudadanos

Índice

- **INTRODUCCIÓN. La inmigración en España y la tentación del político.....10**
- **PARTE I. ¿POR QUÉ UTILIZAN PSOE Y PP LA INMIGRACIÓN COMO TEMA DE CONFRONTACIÓN POLÍTICA?19**
 - ◆ **Capítulo 1. Cómo ven los españoles al inmigrante.....20**
 - 1.1 Los españoles y la inmigración como problema..... 20
 - 1.2 Inmigración, racismo y xenofobia..... 25
 - 1.3 El perfil del español reacio a la inmigración..... 33
 - ◆ **Capítulo 2. La inclusión de la inmigración en el debate político. Las razones de PP y PSOE..... 39**
 - 2.1 España y la crispación.....41
 - 2.2 El PP y la crispación..... 44
 - 2.3 PP, crispación e inmigración..... 51
 - 2.4 El PSOE y su crispación.....59
 - 2.5 El PSOE y la inmigración..... 66
- **PARTE II. ¿CÓMO UTILIZAN PP Y PSOE LA INMIGRACIÓN EN LA LUCHA PARTIDISTA? Evolución de los discursos.....72**
 - ◆ **Capítulo 3. Las formas de la confrontación. Discursos reactivos y proactivos.....73**
 - 3.1 Inmigración y ‘retóricas’.....74
 - 3.2 Las retóricas de PP y PSOE.....77
 - ◆ **Capítulo 4. La regularización ‘masiva’ de 2005: la inmigración como tema de confrontación entre partidos.....80**
 - 4.1 PP: ‘Regularización masiva’ y ‘efecto llamada’.....86
 - 4.2 Inmigración y servicios públicos..... 90
 - 4.3 PSOE: pedagogía y discurso proactivo..... 92
 - 4.4 Del racismo y la derecha.....95
 - 4.5 Los ataques del PP se responden con ataques al PP.....98

◆	Capítulo 5. Las elecciones generales de 2008: la inmigración entra en campaña.....	105
	5.1 Las propuestas de PP y PSOE.....	108
	5.2 El PP cruza la línea: la inmigración como problema.....	113
	5.3 El 'problema' a pie de calle: costumbres y servicios públicos.....	114
	5.4 El PSOE, al contraataque: la creación del adversario.....	113
	5.4.1. Derecha y racismo.....	117
	5.4.2. Derecha y costumbres.....	119
	5.4.3. Derecha y humanitarismo.....	119
	5.4.4. La gestión del PP.....	120
	5.5 La gestión del PSOE según el PSOE.....	121
	5.6 La inmigración y las estrategias electorales.....	123
	5.6.1. El PP y la abstención en caladeros del PSOE.....	124
	5.6.2. El PSOE explota la dicotomía derecha/izquierda.....	128
◆	Capítulo 6. El ministro Corbacho y el giro del PSOE.....	135
	6.1 Crisis e inmigración.....	139
	6.2 La reagrupación y el Estado del Bienestar.....	143
	6.3 Corbacho y el último en empadronarse.....	145
	6.4 Un PP confundido con el giro.....	147
◆	Capítulo 7. El padrón de Vic y las elecciones autonómicas catalanas de 2010.....	152
	7.1 Vic y la larga precampaña.....	155
	7.1.1. El PP, a río revuelto.....	156
	7.1.2. El PSOE y la vuelta al discurso proactivo.....	161
	7.2 Las elecciones catalanas y el regreso del discurso más duro....	165
	7.2.1. El PP retoma el 'no cabemos todos'.....	172
	7.2.2. El PSC, otra vez la misma estrategia (o casi).....	174
•	CONCLUSIONES. Discurso, electoralismo y crisis de convivencia...	181
•	BIBLIOGRAFÍA.....	198
•	ANEXO DOCUMENTAL.....	203

Los partidos políticos formulan políticas como un medio para detentar el poder, más que buscar el poder para llevar a cabo políticas preconcebidas

ANTHONY DOWNS

“La verdad es que a menudo no existen respuestas simples para problemas complicados. Pero las respuestas simples son las que mueven al electorado”

BILL CLINTON

“A los supervivientes de los nuevos naufragios, a los que pusieron pie en tierra y no fueron expulsados, les espera el eterno calvario de la explotación, de la intolerancia, del racismo, del odio a la piel, de la sospecha, del envilecimiento moral. Aquel que antes fue explotado y perdió la memoria de haberlo sido, acabará explotando a otro. Aquel que antes fue despreciado y finge haberlo olvidado, refinará su propia capacidad de despreciar. Aquel a quien ayer humillaron, humillará hoy con más rencor. Y helos aquí, todos juntos, tirándole piedras a quien llega hasta esta orilla del Bidasoa, como si ellos nunca hubieran emigrado, o los padres, o los abuelos, como si nunca hubieran sufrido de hambre y desesperación, de angustia y de miedo”.

JOSÉ SARAMAGO

“Puede que tengamos diferentes historias, pero tenemos esperanzas comunes; puede que no parezcamos iguales, y que no vengamos del mismo lugar, pero todos queremos avanzar en la misma dirección, hacia un futuro mejor para nuestros hijos y nuestros nietos... Es una historia que no ha hecho de mí el candidato más convencional, pero ha germinado en mi constitución genética la idea de que esta nación es algo más que la suma de sus partes, que siendo muchos, somos verdaderamente uno”.

BARACK OBAMA

“Nuestras leyes de Extranjería sólo se preocuparon de cómo impedir la entrada y de expulsar a los osados que hubieran podido conseguirlo. Jamás ambicionaron una correcta regulación de flujos ni la adecuada integración. Nos limitábamos a mirar hacia otro lado y repetir con voz beata: ‘Que vengan, sí pero con papeles, como fuimos nosotros a Europa’. Pero, ¿Con qué papeles iban a venir si no se los dábamos?”

MANUEL PIMENTEL

INTRODUCCIÓN

**LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA Y LA
TENTACIÓN DEL POLÍTICO**

No hace tanto que España era país de emigrantes. Motivaciones económicas y políticas llevaron a centenares de miles de españoles a emigrar durante todo el siglo XX. Toda una iconografía se ha asentado en el imaginario colectivo nacional sobre aquel proceso de huida hacia delante de tantos y tantos españoles. La maleta de cartón, los trenes repletos hacia Europa, las despedidas en los puertos de salida a América... Recuerdos que hacen aflorar la pena por tanta penuria y avivan el orgullo y el reconocimiento por tanta valentía. Son imágenes del pasado. La España de hoy vive (o vivía antes de la crisis) una realidad radicalmente distinta.

Desde mediados de la década de los noventa del siglo pasado las colas en la aduana de las fronteras españolas empezaron a ser de entrada, no de salida. Desde entonces España ha sido el centro de una verdadera revolución demográfica y social: de apenas medio millón de extranjeros en 1995 hasta superar los 5,7 millones en 2010. De país de emigrantes a tierra prometida de la inmigración de medio mundo en apenas quince años. Un fuerte y sostenido crecimiento económico durante ese periodo y un mercado laboral que parecía inagotable han llevado a España a convertirse en uno de los países con mayor proporción de población extranjera (del 12,2% del total en enero de 2011; véase datos del padrón del Instituto Nacional de Estadística).

Algunos políticos rememoran el pasado emigrante apelando a la empatía del ciudadano con el extranjero que llega, tratando de igualar ambos fenómenos. Otros políticos, en cambio, reivindicaban ese pasado en un intento de cargar, aparentemente,

de sentido común sus discursos antiinmigración, de dulcificar su agrio mensaje contraponiendo la valerosa emigración española y la sospechosa inmigración actual.

En cualquier caso, para muchos ciudadanos el pasado como país de emigrantes es demasiado lejano, incluso a pesar de que con la crisis se haya reavivado la salida al exterior de españoles, sobre todo jóvenes, en busca de un empleo que no encuentran en su país. La percepción generalizada sobre el inmigrante que viene en poco se parece a la idílica imagen del español que emigraba antaño o lo hace hoy. Según desvelan varios estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), un porcentaje significativo de españoles considera que hay demasiados inmigrantes en España; que los autóctonos deberían tener preferencia en el acceso a determinados servicios públicos; que existe una relación directa entre inmigración y delincuencia; que el extranjero debería aparcar los aspectos de su cultura que *molesten* a los españoles; y que la legislación de extranjería es demasiado laxa y debería endurecerse (Cea D'Ancona y Valles, 2009). La visión no es la misma cuando se emigra que cuando se convive con la inmigración. El coraje que se le reconoce al emigrante español se le niega al magrebí o sudamericano que residen hoy en España; las honradas aspiraciones que se le achacan a uno se convierten en puro recelo hacia los otros, sin concesión alguna a la empatía.

Desde los ochenta y hasta final de siglo, el crecimiento del contingente de inmigrantes en España fue gradual, constante pero sosegado, sin grandísimos aumentos de los flujos. Y aun así se llegó a 2000 con en torno a un millón de extranjeros en el país, el doble que cinco años antes. En cambio, durante casi toda la primera década del nuevo siglo las entradas se aceleraron, y las llegadas de inmigrantes mostraron de forma sostenida incrementos disparados. El padrón municipal muestra un aumento de la

población extranjera de más de 4,5 millones de personas en una década, hasta los 5,7 millones con que arranca 2011.

Llegaron muchos y llegaron muy rápidamente, el caldo de cultivo perfecto para que al menos en una parte de los españoles surja una percepción negativa de la inmigración. Y si la actitud de recelo (o directamente de rechazo) es compartida por un número suficiente de ciudadanos como para influir en los resultados electorales, la utilización de la inmigración con fines políticos se convierte en una tentación evidente para algunos políticos. Una tentación que en España, como ya venía sucediendo en otros países europeos, muchos políticos han decidido no soportar y caer en ella.

Esta investigación parte de una hipótesis inicial: que la utilización de la inmigración como tema para la confrontación partidista en España obedece al intento de los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, de alcanzar sus objetivos estratégicos antagónicos. De un lado, la necesidad del Partido Popular de introducir en la agenda pública temas transversales con los que superar su desventaja de posicionamiento ideológico, aprovechando que una buena parte de los españoles que compiten con el inmigrante por unas mismas prestaciones públicas forman parte (por clase social o por lugar de residencia) de tradicionales caladeros de votos socialistas. En el caso del Partido Socialista, la pretensión de presentar al PP como un partido radical y abiertamente escorado a la derecha; el intento de que toda la agenda pública se dirima en el eje ideológico izquierda-derecha; y la necesidad de mantener el apoyo de su electorado tradicional, tentado por el duro discurso del PP y tendente a la abstención.

Para la identificación de las motivaciones que conducen a Partido Popular y Partido Socialista a utilizar la inmigración en su discurso en el sentido en que cada uno lo hacen analizaremos al detalle los resultados de los barómetros mensuales del CIS y los informes de Oberaxe para determinar el peso de las visiones negativas en torno al

fenómeno entre la ciudadanía española y el perfil del votante que mantiene estas actitudes de rechazo. En paralelo, para abordar el contenido de los discursos de ambos partidos analizaremos las declaraciones de dirigentes de una y otra formación publicadas en los medios de comunicación como mejor expresión de los mensajes que llegan al público. Analizamos muy especialmente los discursos recogidos en El País y El Mundo, por ser los diarios de mayor difusión en España.

A lo largo de las últimas décadas la presencia de la inmigración en el debate político, singularmente en el parlamentario, ya venía mostrando un progresivo aumento, en lo que algunos autores han denominado la *politización de la inmigración* (Zapata-Barrero, González y Sánchez Montijano, 2008). Sin embargo, hasta hace relativamente poco, en España la inmigración parecía excluida del listado de temas de la cruda confrontación partidaria. Pese a que la tramitación parlamentaria de algunas leyes de Extranjería había sido relativamente bronca, los partidos parecían aceptar que la inmigración debía quedar al margen de la lucha política.

En 2005 esta regla no escrita quedó superada y es entonces cuando se produce realmente un antes y un después en la formulación del discurso político en torno a la inmigración en España. La regularización extraordinaria de extranjeros puesta en marcha ese año por el Gobierno socialista (la decimotercera en la historia de España, la primera fue aún durante el franquismo, en 1969 [Rius Sant, 2007]) ofreció al Partido Popular la oportunidad de convertir la política de inmigración en material para el ataque contra el Ejecutivo. Los populares fueron los primeros en olvidar el tabú de utilizarla en la batalla política y electoral. Y los socialistas no han rehuido el embate.

A lo largo de la investigación mostraremos que el PP ha sostenido desde entonces un mismo discurso de mano dura con la inmigración, de primacía de las costumbres y las tradiciones autóctonas, y de defensa de los derechos de los españoles frente a la

amenaza extranjera, sobre todo en tiempos de crisis económica. El PSOE, en cambio, ha combinado dos discursos en función de las necesidades estratégicas de cada momento: por un lado, una defensa cerrada de los derechos del extranjero y una crítica feroz de los mensajes de los populares, equiparándolos a los de la extrema derecha europea; y, por otro, un crudo mensaje de firmeza y rigor con el extranjero para combatir, por igualación, las posturas de los populares.

Para alcanzar sus objetivos, singularmente la consecución del poder, los partidos políticos deben obtener un respaldo popular suficiente en forma de voto. Por ello, más que buscar el poder para poner en práctica su ideario y su programa preconcebido, en ocasiones da la impresión de que formulan políticas como medio de alcanzar el poder (Downs, 1973). Idearios y programas se vuelven, en ciertos casos, volubles y abiertos a nuevas incorporaciones al albur de la opinión mayoritaria o al menos de la respaldada por suficientes votantes. Los partidos políticos permanentemente tratan de encontrar nuevos temas, nuevas *dimensiones políticas* (Riker, 1982), que les coloquen en buena posición para ganar las siguientes elecciones. Como veremos en esta investigación, tanto PP como PSOE manipulan y moldean su discurso en torno al fenómeno inmigratorio en un intento de imponer los enfoques sobre el tema que les resultan más rentables.

Los partidos políticos intentan de forma permanente que unos temas se impongan en las agendas por encima de otros. El juego político se dirime en los intentos de todos los actores de dar prioridad a unos asuntos (*priming*) y de aportarles un significado concreto -un encuadre o un marco conceptual-, acorde con los objetivos de cada partido (*framing*). El encuadre de un tema, el foco que se pone sólo sobre algunos de sus aspectos, busca dar una visión particular del mundo (Lakoff, 2007 y 2008). El partido que consiga imponer los temas que más le benefician y los encuadres de estos temas que más se ajustan a sus intereses se encontrará en ventaja en relación a su

contrincante. En este sentido, la inmigración se ha convertido en los últimos años en uno de los campos de batalla en los que los dos grandes partidos españoles se han batido el cobre para imponer su visión del fenómeno.

La labor de los políticos, desde el punto de vista de la comunicación, cada vez parece más centrada en determinar los temas de los que se informa y se opina en los medios de comunicación para controlar de lo que hablan y por lo que se interesan los ciudadanos (McCombs, 2006). El político tratará de introducir los temas que más le convienen en la agenda mediática, para que ésta, con su capacidad para moldear sobre qué se piensa y cómo se piensa acerca de ello, imponga una agenda pública acorde a sus intereses. La agenda pública (el conjunto de temas que preocupan a los ciudadanos), la agenda política (los asuntos que tratan de introducir y que manejan los políticos) y la agenda mediática (los grandes hechos noticiosos que se recogen en los medios de comunicación) se influyen entre sí, tratan de imponerse unas a otras, se convierten permanentemente en causa y consecuencia recíprocas. En la pugna por el establecimiento de la agenda, *agenda setting*, los medios de comunicación juegan con ventaja por su alcance masivo, su papel de intermediario entre políticos y público, y su influencia directa sobre unos y otro. Pero lo cierto es que los tres actores funcionan en ocasiones a modo de vasos comunicantes y la agenda de unos transforma de forma permanente la de los otros.

La inmigración apareció por primera vez en septiembre de 2000 en los barómetros del CIS como uno de los principales problemas que perciben los españoles. Y llegó para quedarse. Durante una década la inmigración se ha mantenido entre los cinco mayores problemas. Generalmente se entiende que un tema forma parte de la agenda pública si supera con cierta permanencia la cota del 10% en los sondeos que miden los asuntos que más preocupan a los ciudadanos (McCombs, 2006). Desde septiembre de 2000 en tan sólo nueve de los 113 barómetros elaborados hasta el

cierre de 2010 la inmigración se situó por debajo del 10% de los encuestados, y solamente en cinco la señalaron menos del 9%. Un escenario demasiado tentador para que los partidos políticos españoles lo obviaran y no convirtieran la inmigración en tema de campaña.

Y si la presencia protagónica de la inmigración en la agenda pública determina su trasvase a la agenda política, la utilización por parte de los políticos del fenómeno en su lucha partidista también tiene reflejo en la importancia que le conceden los ciudadanos. Como analizaremos más adelante, algunos de los momentos álgidos de la identificación de la inmigración como un problema por parte de los españoles (en 2006 incluso llegó a rozar la cota del 60% de encuestados, convirtiéndose en el mayor problema del país, según el CIS) coinciden con etapas de la estrategia de los partidos en que se decide dar prioridad a la política de extranjería en su agenda de temas de confrontación.

Las palabras crean imágenes, las imágenes crean ideas, y las ideas crean comportamientos. Y en un proceso recíproco e inverso los comportamientos pueden acabar creando palabras (Cattani, 2008). De este modo, los discursos políticos amparan y justifican las percepciones acerca de la realidad de los ciudadanos y también sus comportamientos. Y, al tiempo, la opinión de los ciudadanos empuja a los partidos políticos a construir discursos acordes. En el caso de los discursos políticos en torno a la inmigración esta interrelación se pone claramente de manifiesto, lo que hace especialmente pertinente el análisis de sus motivaciones y de la articulación de su contenido.

Un discurso, para ser político, debe poder legitimar acciones/percepciones. Algunos ciudadanos pueden ver justificada una interpretación negativa sobre la inmigración y, en su caso, también comportamientos correspondientes por los mensajes contruidos

por los políticos (Zapata-Barrero, 2008). La especial relevancia de los discursos políticos en torno a la inmigración se encuentra muy especialmente en su papel como justificadores o como detonantes de episodios de conflictividad social de carácter xenófobo. Y, en paralelo, las percepciones públicas que revelan las encuestas tienen un impacto directo en el fondo y en la forma que adoptan las políticas de los Gobiernos y las propuestas de los partidos en torno al fenómeno inmigratorio (Zapata-Barrero, 2009).

Los barómetros del CIS revelan que una parte sustancial de los ciudadanos españoles percibe la inmigración como un problema. Los partidos políticos, en principio, deben elegir entre dos formas de actuar ante este escenario: o se aprovecha este malestar para arremeter contra la inmigración y para justificar políticas más restrictivas en un intento de sacar réditos electorales; o se intenta corregir estas percepciones negativas sobre el extranjero y se opta por una función pedagógica del discurso. Interpretación reactiva o interpretación proactiva, respectivamente, según la terminología de Zapata-Barrero (2008 y 2009). El PP ha optado por la primera, por un discurso de mano dura por entender que le ofrecerá más posibilidades electorales. El Partido Socialista ha alternado y combinado ambas visiones (la pedagógica y la populista) en función de sus necesidades partidistas coyunturales. Los discursos de ambos partidos se alejan o convergen periódicamente a golpe de electoralismo.

PARTE I

**¿POR QUÉ UTILIZAN LOS PARTIDOS LA INMIGRACIÓN COMO
TEMA DE CONFRONTACIÓN POLÍTICA?**

Capítulo 1.

Cómo ven los españoles al inmigrante

1.1 Los españoles y la inmigración como ‘problema’

El fenómeno de la inmigración es un tema que preocupa, y mucho, a la ciudadanía española. Los barómetros mensuales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) recogen desde 1999 dos preguntas fijas sobre los principales problemas existentes en España y sobre los problemas que personalmente más afectan al encuestado. El paro, el terrorismo, la vivienda y, desde hace una década, también la inmigración son los problemas que tradicionalmente más citan los españoles en estos sondeos, con diferentes intensidades según el contexto del momento.

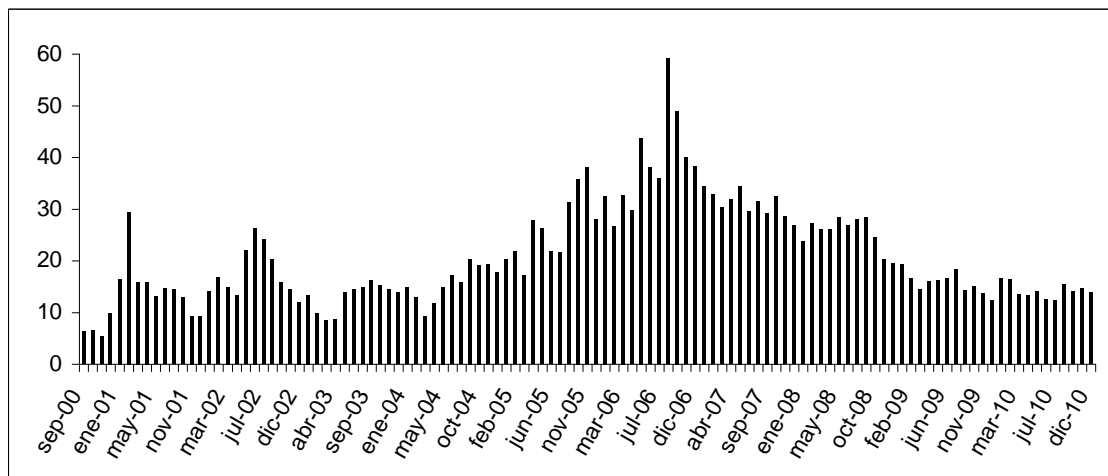
La inmigración entró en septiembre de 2000 en la lista de los principales problemas del país. Y llegó para quedarse. Desde entonces no ha abandonado el listado. Durante toda una década, la llegada de población extranjera ha figurado casi de manera permanente entre los cinco asuntos que más preocupan de los españoles; desde finales de 2004 y hasta el estallido de la actual crisis económica figuró persistentemente en la terna de principales problemas; e incluso en octubre de 2006 se colocó en la primera posición, en un momento en que seis de cada diez españoles identificaron la inmigración como uno de los tres principales problemas del país.

En paralelo, los datos recogidos en la evolución de la identificación de la inmigración por parte de los españoles como uno de sus mayores problemas personales son claramente inferiores a los de identificación de los problemas generales del país. Un desfase que se refleja igualmente en la mayoría de los países en que se miden ambos parámetros: la inmigración parece que se percibe como un problema general, pero no íntimo. Pero, aunque con cotas muy inferiores, las tendencias de mayor o menor preocupación son bastante similares en ambos gráficos (Zapata-Barrero, 2004 y 2009).

GRÁFICO 1.1

Evolución de la inmigración como problema para los españoles.

Respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son, a su juicio, los tres problemas principales que existen actualmente en España?



Fuente: Barómetros del CIS.

La inmigración se estrenó en el listado de problemas que citan los españoles (en el que figuran siempre en torno a una treintena de asuntos) pocos meses después de que se aprobara una nueva Ley de Extranjería. La Ley Orgánica 4/2000 se aprobó tras una más que tumultuosa tramitación parlamentaria en la que todos los grupos parlamentarios se unieron para rechazar las enmiendas de un PP que aún gobernaba en minoría y con las que trataba de endurecer un texto consensuado entre todos con anterioridad. La entrada en el ranking se producía en un momento en que, ya con José María Aznar gobernando con mayoría absoluta, las Cortes empezaban a abordar la que finalmente se convertiría en la nueva legislación. La entonces aún futura Ley Orgánica 8/2000, más restrictiva sobre todo en materia de derechos de los extranjeros en situación irregular, se aprobaba en diciembre y entraría en vigor en enero de 2001. Dos leyes nacidas con tan sólo unos meses de diferencia.

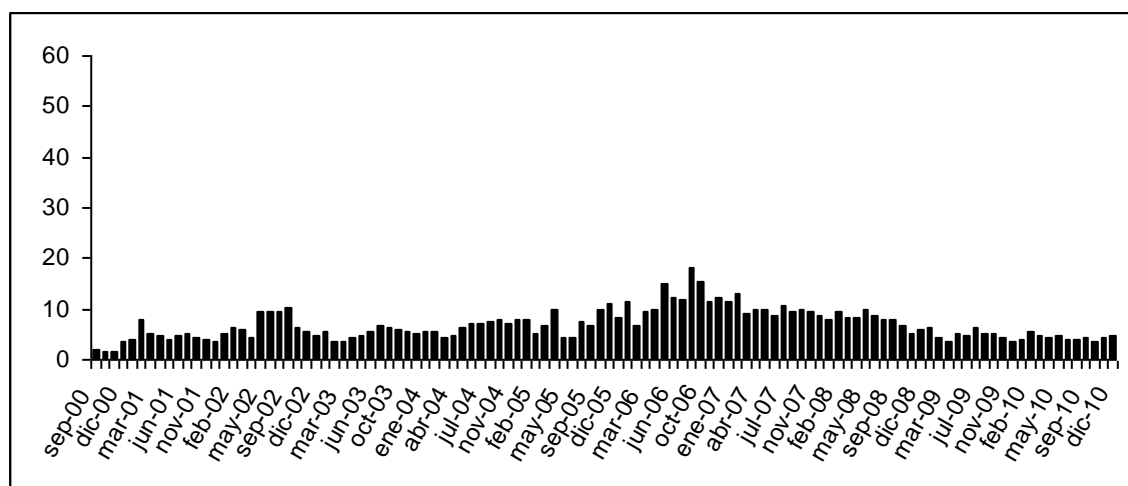
Desde su aparición en septiembre de 2000 como una de las preocupaciones de los españoles (entonces la citaron el 6,3% de los encuestados), la inmigración *como problema* presenta varios momentos álgidos, varios picos en el gráfico que recoge la

evolución del barómetro. En febrero de 2001, sólo cinco meses después de su debut en el ranking, un 31,1% de los españoles señala la llegada de inmigrantes como uno de los tres grandes problemas del país: ha pasado un mes desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Extranjería (LO 8/2000), aprobada tras un fuerte debate entre partidos dentro y fuera de las Cortes que ha concitado la atención de los medios de comunicación; y la nueva legislación, más restrictiva e impulsada por un Gobierno empeñado en dar una imagen de firmeza y dureza, ha provocado movimientos de protesta entre los inmigrantes, incluidas varios encierros y huelgas de hambre.

GRÁFICO 1.2

Evolución de la inmigración como problema personal para los españoles

Respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son los tres problemas que a usted, personalmente, le afectan más?



Fuente: Barómetros del CIS.

En junio de 2002, y tras varios meses constantemente al alza, la inmigración vive un nuevo pico en el barómetro, coincidiendo con la celebración de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que, por ocupar España la presidencia de turno, se celebrará en Sevilla. Una cumbre que el Ejecutivo español consigue que se centre en las políticas comunitarias del control de flujos de inmigrantes irregulares.

A lo largo de 2005, ya con el Gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, se producen dos fuertes escaladas de la preocupación ciudadana que concita el fenómeno de la inmigración. Se alcanzará el 29,5% de encuestados en el mes de abril, en pleno proceso de *normalización* (según la terminología gubernamental) o de *regularización masiva* (en palabras de los líderes del PP) de inmigrantes sin papeles. Hasta 578.375 extranjeros consiguieron entonces regularizar su residencia en España. Será entonces cuando la inmigración se convierta por primera vez en tema primordial de confrontación política entre los dos grandes partidos nacionales. El Partido Popular inserta la inmigración en su estrategia de duro combate dialéctico contra el Ejecutivo socialista. *Efecto llamada, papeles para todos...* Coincidiendo con las postrimerías de una fase de aumento de llegadas de irregulares a las costas españolas y con graves disturbios en la periferia de varias ciudades francesas protagonizados por los jóvenes de una segunda o tercera generación de inmigrantes, la preocupación por el fenómeno alcanza al 40% de los encuestados en noviembre de 2005.

Con la economía española y el empleo en una continua fase expansiva y tras la declaración de un alto el fuego permanente por parte la organización terrorista ETA (anunciado en marzo), la inmigración vive en 2006 su cénit en los barómetros del CIS. Ya en mayo de ese año alcanzó el que entonces era su máximo histórico, con una cota del 43,7%. Sin embargo, un verano con récord de llegadas de embarcaciones con inmigrantes irregulares, lo que vino a denominarse la *crisis de los cayucos*, disparó en octubre el dato hasta el 59,2% de los encuestados. Seis de cada diez españoles identificaron la inmigración como uno de los principales problemas existentes en España, hasta hoy el máximo nivel alcanzado, hasta hoy la única ocasión en que la inmigración figuró como principal preocupación del país.

En las elecciones generales de marzo de 2008 el Partido Popular colocó la inmigración como uno de los temas sobre los que bascularía su campaña. Mariano Rajoy, candidato por segunda vez del PP, ensayó un discurso duro sobre el fenómeno (“No cabemos todos”), atacó al Gobierno por su inoperancia en este asunto, y avanzó lo que se adivina puede llegar a ser la propuesta de un modelo alternativo de gestión de la inmigración, encarnado singularmente en un contrato de integración que firmarían los extranjeros para comprometerse con las costumbres y las leyes españolas. En la resaca postelectoral, los barómetros del CIS reflejan un nuevo pico, alcanzando el 28,5% en el mes de mayo.

Durante 2009 y 2010, el porcentaje de españoles que ven la inmigración como uno de los grandes problemas del país ha seguido una tendencia a la baja, situándose persistentemente por debajo del 20% y con los datos mensuales más bajos desde 2004. La preocupación por la inmigración aparentemente se ha desinflado, pero se trata de una caída relativa, dado el enorme protagonismo que han tomado en los barómetros el paro y los asuntos económicos, como consecuencia de la crisis, y también la clase política como problema, debido al ambiente político enormemente bronco de los últimos años.

Resulta comprensible que la llegada de unos cinco millones de extranjeros en apenas quince años, con los efectos que ha conllevado en tantos ámbitos, haya suscitado el interés de un porcentaje amplio (en algunos momentos mayoritario) de la población autóctona. “Si a la ciudadanía no le preocupara este tema, entonces podríamos considerarla como políticamente autista. Pero que la ciudadanía esté inquieta por este tema no debe suponer que tenga una actitud negativa. De ahí que tampoco debemos lamentarnos en exceso de que la ciudadanía española sitúe a la inmigración entre los tres principales temas que le importan (...). Lo que sí debe ser objeto de reflexión es que la preocupación suponga rechazo”, sostiene el profesor Zapata-Barrero (2009).

Efectivamente, el interés de los ciudadanos por fenómenos de tal magnitud, sea la inmigración o cualquier otro, no tendría por qué implicar necesariamente sentimientos de aversión. El interés y la atención generales están más que justificados. Sin embargo, hay que subrayar que las preguntas, tal y como están formuladas en los barómetros del CIS, no solicitan al encuestado que identifique sus principales temas de interés, ni siquiera los asuntos que considera de mayor preocupación; sino que se le pide que cite los principales *problemas* del país y los *problemas* que personalmente más le afectan, con la toda la carga negativa que conlleva el término elegido. La presencia sistemática de la inmigración en el ranking sí puede llegar a implicar, por este condicionante, un síntoma de un aparente rechazo ciudadano y colocar así el tema como susceptible de ser explotado con objetivos políticos o electorales a través de mensajes negativos.

1.2 Inmigración, racismo y xenofobia

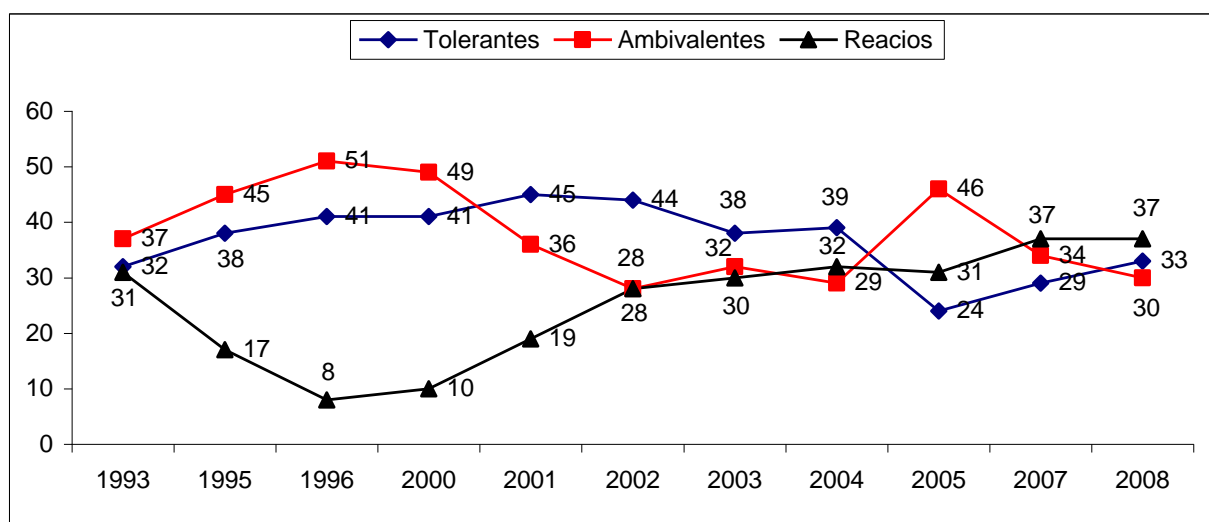
Las encuestas que tratan de evaluar las percepciones y opiniones en torno a la convivencia con extranjeros y detectar sentimientos de racismo y/o xenofobia se encuentran con el problema de su gran vulnerabilidad al sesgo de la *deseabilidad social* (Cea D'Ancona, 2009); esto es, la corrección política con que responde el encuestado a algunas de las preguntas para acomodarse a las opiniones y actitudes generalmente mejor valoradas.

Aun así, el estudio *Evolución del racismo y la xenofobia en España. Informe 2009* (Cea D'Ancona y Valles, 2009), elaborado por iniciativa del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) a partir de encuestas del CIS, concluye que el 37% de los españoles es reacio a la inmigración, frente a un 33% de tolerantes y un 30% de ambivalentes ante el fenómeno. El porcentaje de los que rechazan de un modo global la inmigración y la convivencia con inmigrantes y tienen una imagen negativa del

extranjero viene creciendo persistentemente en los últimos quince años [ver Gráfico 1.3]

GRÁFICO 1.3

Evolución de las actitudes ante la inmigración en España. En %.



Fuente: Evolución del racismo y la xenofobia en España. Informe 2009. CIS-Oberaxe.

El trabajo de Cea D'Ancona y Valles refleja un panorama, en algunos aspectos, preocupante para la convivencia de españoles y extranjeros. Aunque no pretendemos recoger en esta investigación con amplitud los datos que se desprenden de esta encuesta sobre la percepción que se tiene en España sobre la inmigración, sí apuntaremos los más significativos y su evolución en relación a estudios anteriores, como elementos fundamentales para determinar el discurso de los políticos sobre el tema.

Una mayoría de encuestados considera que hay demasiados inmigrantes. Un 46% ve el número de extranjeros excesivo y otro 31% lo cree elevado, frente al 19% que lo considera aceptable. Es cierto que con carácter general no existe una percepción de la cifra de inmigrantes que se ajuste a la real (de media, los encuestados calculaban en 2008 que casi un 23% de los residentes en España es de origen extranjero, en un

momento en que el peso real de los inmigrantes se situaba apenas en el 11%), pero en cualquier caso la impresión mayoritaria es que hay un exceso de extranjeros.

Aunque haya que tener presente el probable sesgo de la corrección política en una materia especialmente sensible como la de la inmigración, los encuestados respaldan de manera muy mayoritaria que se garantice la equiparación en derechos sociales y civiles a los extranjeros. Acceso a la educación y los servicios sanitarios, cobro de subsidio de desempleo, traer a su familia, creación de asociaciones e incluso el derecho al voto son materias en que los encuestados se muestran favorables a su asunción por el inmigrante. Pero, aún mayoritario, el respaldo ha ido decayendo de forma constante en los últimos años [Ver Tabla 1.1]

TABLA 1.1

Reconocimiento de derechos sociales y de ciudadanía a los extranjeros. En %.

¿Cree usted que los inmigrantes instalados en España de manera estable deberían tener el derecho de...?

	Traer a su familia				Cobrar el subsidio de desempleo			
	2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
Sí	80	86	86	85	87	89	95	91
No	14	9	9	8	8	7	4	6
NS/NC	6	5	5	7	5	4	1	3

	Votar en las elecciones municipales				Obtener la nacionalidad española			
	2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
Sí	62	69	80	80	69	71	86	86
No	29	23	14	12	19	18	8	7
NS/NC	9	8	6	8	12	11	6	7

Fuente: Evolución del racismo y la xenofobia en España. Informe 2009. CIS-Oberaxe.

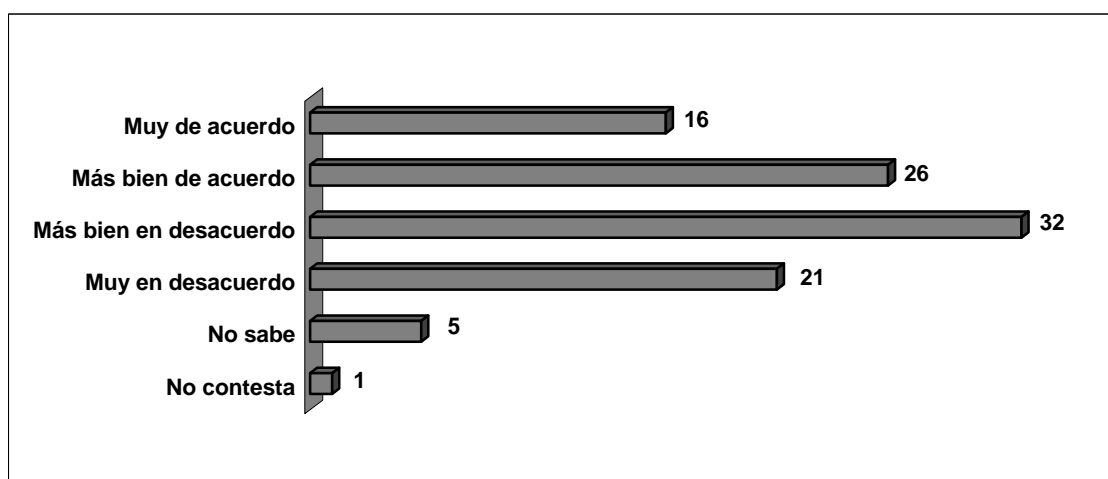
Sin embargo, y pese a contar con tanto respaldo el reconocimiento de derechos al inmigrante, muchos encuestados apoyan abiertamente que el español tenga preferencia en determinados ámbitos. Un 55% considera que los españoles deberían tener prioridad en la elección de colegio para sus hijos y un 42% lo aplicaría en el acceso a la atención sanitaria [Ver Gráfico 1.4]. E incluso un 60% está muy o bastante

de acuerdo en qué se dé preferencia a los autóctonos en la contratación en un empleo [Ver Gráfico 1.5].

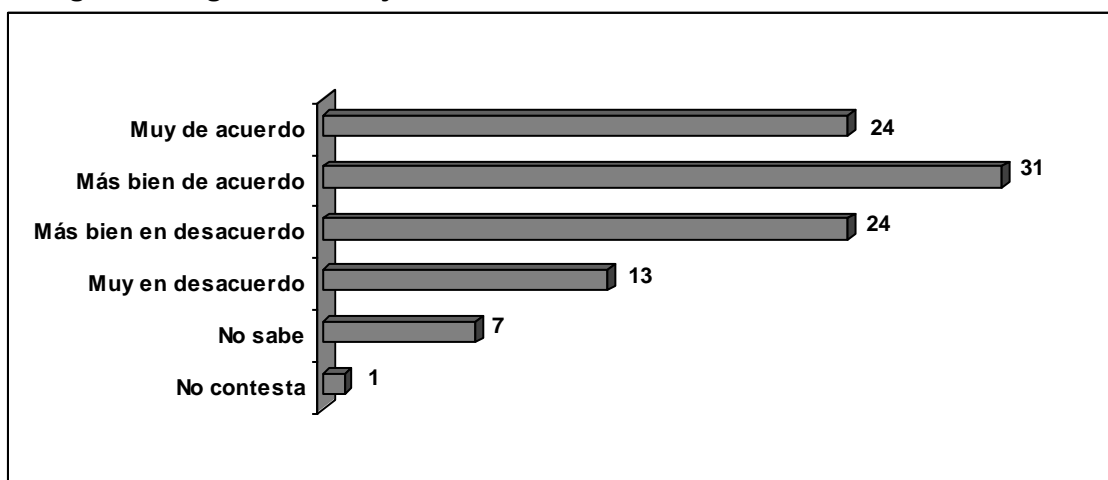
GRÁFICO 1.4

Preferencia de la población autóctona en servicios. En %.
Los españoles deberían tener preferencia a la hora de...

...acceder a la atención sanitaria



...elegir el colegio de sus hijos



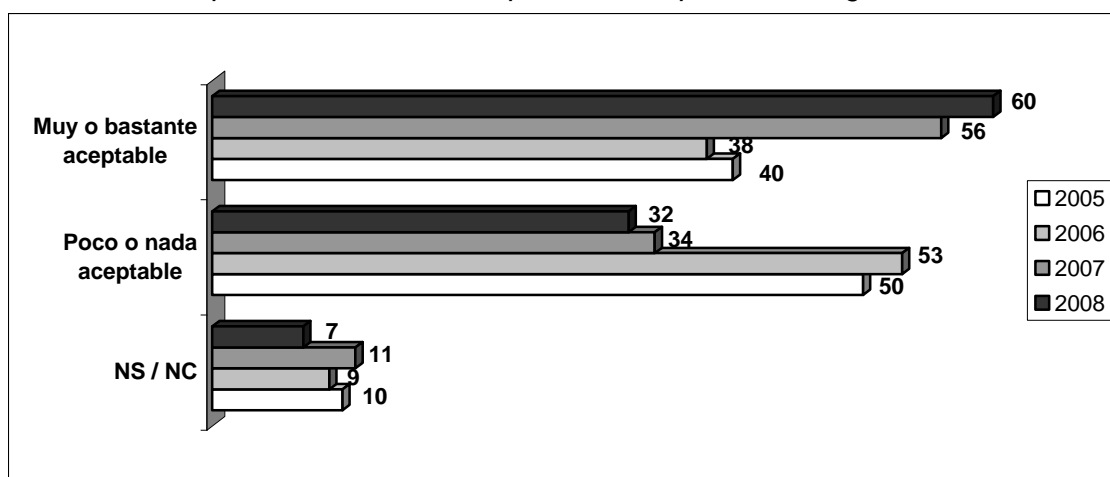
Fuente: Evolución del racismo y la xenofobia en España. Informe 2009. CIS-Oberaxe.

En este mismo contexto de competencia entre extranjeros y autóctonos por unos mismos recursos (singularmente prestaciones y servicios públicos), existe el peligro de que aumente el sentimiento de rechazo a la inmigración. Un desencadenante de la xenofobia, especialmente en situaciones de crisis económica, es el temor a la competencia (Cea D'Ancona, 2007). Y el acceso por parte del extranjero a

determinadas prestaciones es visto, en lugar de como una política de fomento de la integración, como un agravio comparativo. Por ello, es preocupante que el estudio de CIS y Oberaxe de 2009 revele que un 40% de los encuestados considera que la protección del Estado al inmigrante es bastante y un 18% cree que es mucha, dos puntos porcentuales más, en ambos casos, que un año antes [Ver Gráfico 1.6]. En paralelo, el 56% está más bien de acuerdo o muy de acuerdo con que los inmigrantes reciben más ayudas escolares que los españoles de igual nivel de ingresos; y un 46% entiende que sucede lo mismo con las ayudas en el ámbito sanitario [Ver Gráfico 1.7].

GRÁFICO 1.5

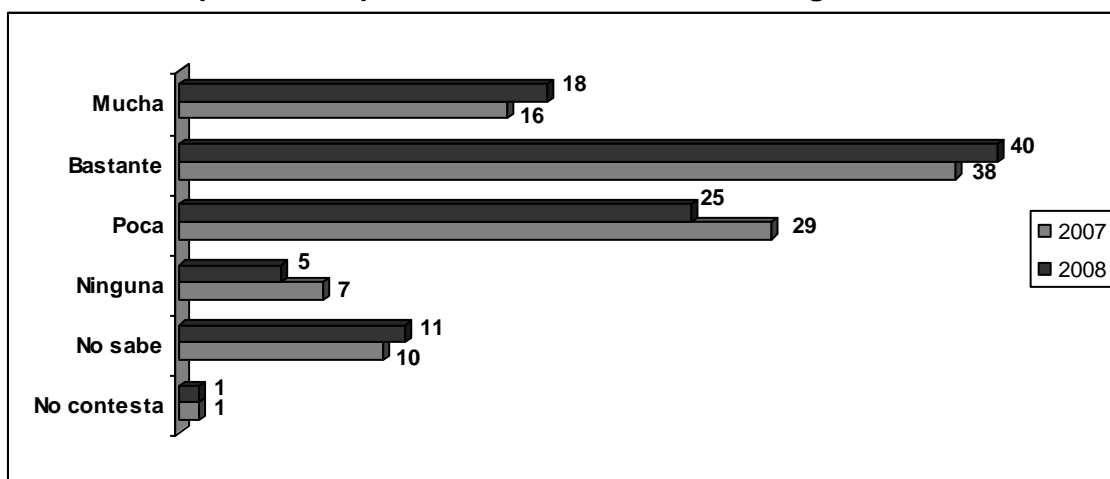
Preferencia de la población autóctona en empleo. En %.
A la hora de contratar a una persona prefiere que se contrate a un español antes que a un inmigrante



Fuente: Evolución del racismo y la xenofobia en España. Informe 2009. CIS-Oberaxe.

GRÁFICO 1.6

Percepción de la protección del Estado a los inmigrantes. En %.

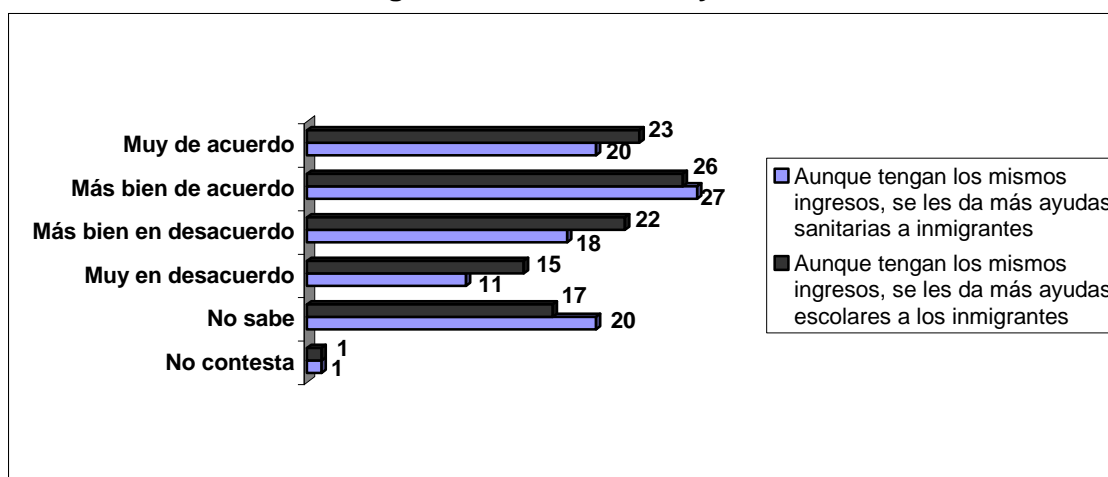


Fuente: Evolución del racismo y la xenofobia en España. Informe 2009. CIS-Oberaxe.

Asimismo, un 20% de los españoles cree que los inmigrantes reciben de las Administraciones mucho más de lo que aportan; otro 32% percibe que reciben más de lo que aportan; y un 24% que reciben tanto como aportan. Una percepción subjetiva que aparentemente no se ajusta a la realidad. Son varios los estudios que confirman que los ingresos del Estado generados por la población inmigrante son muy superiores al gasto público del que se benefician (Oficina Económica del Presidente del Gobierno, 2006; Moreno y Bruquetas, 2011; Fundación Ideas, 2011; Ximénez Sandoval, 2008), una balanza en positivo que parece más que probable que se haya mantenido incluso en tiempos de crisis (García Mayo y Page, 2010a; Page y García Mayo, 2011). Por otro lado, en los últimos años es creciente el porcentaje de encuestados que cree que la presencia de inmigrantes disminuye la calidad de los servicios sanitarios (52% en 2008, desde el 32% en 2005) y de la educación (49% desde el 36%).

GRÁFICO 1.7

Los inmigrantes reciben más ayuda. En %.

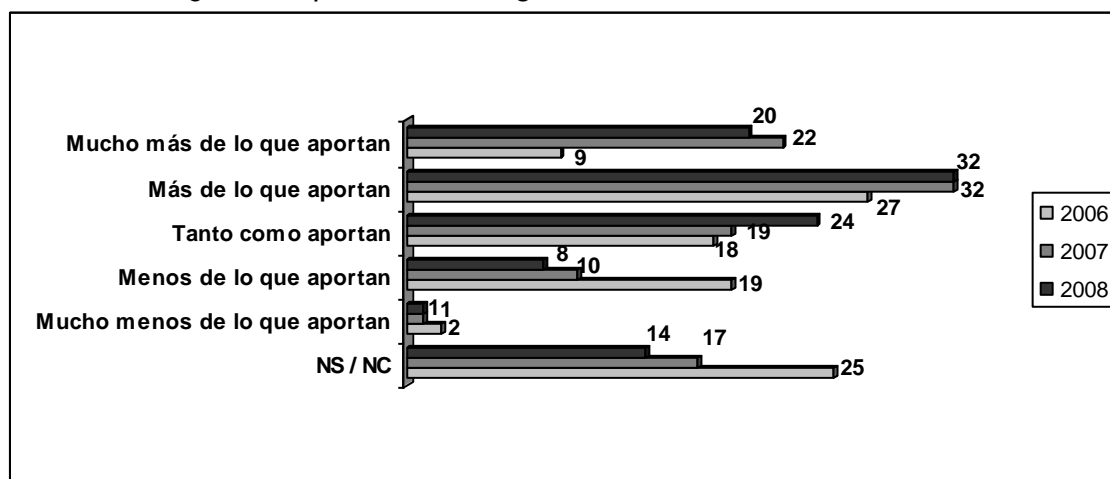


Fuente: Evolución del racismo y la xenofobia en España. Informe 2009. CIS-Oberaxe.

GRÁFICO 1.8

Relación proporcional entre las prestaciones del Estado que reciben los inmigrantes y los ingresos que generan. En %.

¿En su opinión los inmigrantes reciben del Estado...?



Fuente: Evolución del racismo y la xenofobia en España. Informe 2009. CIS-Oberaxe.

Indudablemente, la llegada de millones de nuevos ciudadanos procedentes de decenas de países ha supuesto una revolución (y un reto) en el ámbito cultural, con sus consiguientes implicaciones para la convivencia. Para un 39% de los encuestados, es bueno que los inmigrantes, aunque aprendan la cultura y costumbres españolas, también mantengan las suyas. Sin embargo, un 49% cree que los extranjeros sólo deben mantener aquellos aspectos de su cultura que “no molesten” a los españoles. Y un 10% prefiere que los inmigrantes olviden su cultura y costumbres para sólo adaptarse a las locales.

Pese a ello, el enriquecimiento cultural es el aspecto positivo que más encuestados mencionan al referirse a la inmigración (el 35%), seguidos de otros dos de carácter económico (“contribuyen al crecimiento económico” y “realizan trabajos que no cubren los españoles”, con un 19% cada uno). En el extremo contrario, entre los aspectos negativos de la inmigración que los españoles más destacan figuran que aumentan los problemas de delincuencia y seguridad (33%), los problemas de integración y por el

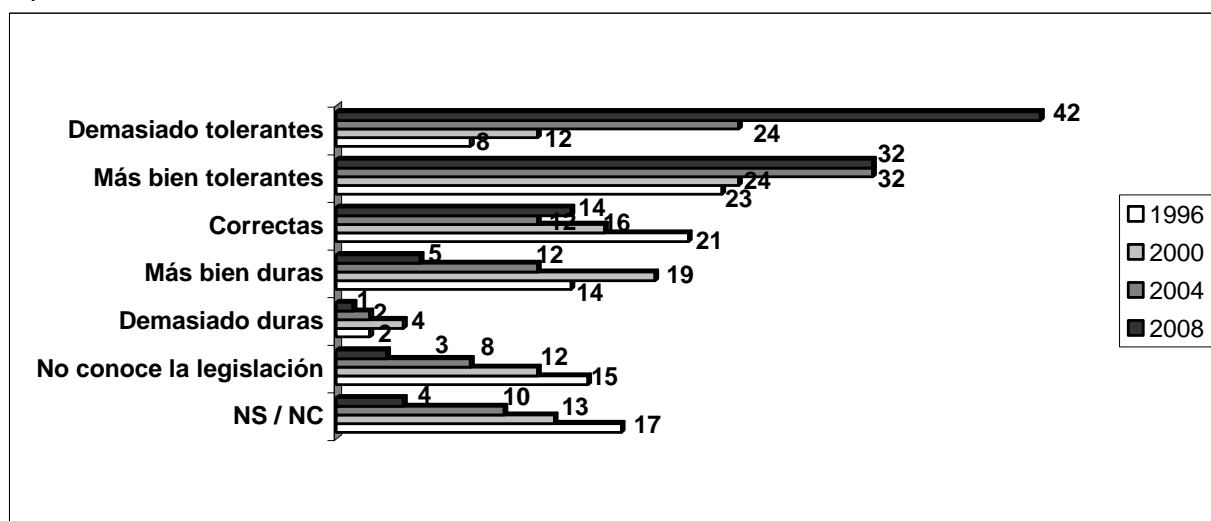
choque cultural (11%), su competencia en el mercado laboral (11%) y la percepción de que el número de inmigrantes es excesivo y que no hay una buena gestión por parte de las Administraciones (10%).

La percepción que de las políticas de inmigración desarrolladas hasta el momento tengan los ciudadanos constituye, es evidente, un factor clave que puede determinar el discurso y el programa de cualquier partido sobre esta materia. Y la opinión de los españoles es progresivamente más crítica en la última década y media, hasta llegar a 2008 con un récord de los que piensan que la legislación peca de poca rigurosidad. En sólo cuatro años ha pasado de un 24% a un 42% los que creen que las leyes que regulan la entrada y permanencia de los extranjeros en España son demasiado tolerantes; y se ha mantenido en el 32% en ese periodo lo que las consideran más bien tolerantes. Esto es, un 74% de los españoles, en principio, parece que apoyarían un endurecimiento de la legislación de extranjería, 18 puntos porcentuales más que en 2004 [Ver Gráfico 1.9].

GRÁFICO 1.9

Valoración de las leyes sobre inmigración

En su opinión, las leyes que regulan la entrada y permanencia de extranjeros en España son...



Fuente: Evolución del racismo y la xenofobia en España. Informe 2009. CIS-Oberaxe.

Algunos autores *tranquilizan* sobre las conclusiones que pueden sacarse de este tipo de estudios, subrayando que revelan más una crítica a la gestión de la inmigración que sobre el extranjero mismo. “La actitud negativa no está dirigida tanto hacia la inmigración, sino hacia el Gobierno (y la política) y su (in)capacidad de gobernar los asuntos relacionados con la inmigración y de dar respuesta a las preguntas que se plantea la ciudadanía” (Zapata-Barrero, 2009). Una impresión que, de confirmarse, efectivamente permitiría a priori relativizar la posibilidad de que estén produciéndose problemas graves de convivencia, al menos de momento. Pero abre la puerta a que los políticos aboguen por un endurecimiento legislativo y lo hagan poniéndolo en relación con otros de los aspectos que se desprenden de las encuestas.

Y es que, en cualquier caso, los partidos políticos se encuentran con un porcentaje de votantes, más o menos apreciable según la materia, que considera que hay demasiados inmigrantes en España; que los autóctonos deben tener preferencia en el acceso al empleo y a determinados servicios públicos; que los extranjeros acaparan las ayudas públicas, lo que hace que reciban más de lo que aportan al Estado; que vinculan inmigración y delincuencia; y que creen que el extranjero debe olvidarse de las facetas de su cultura que *molesten* a los españoles. Y, quizá por todo ello, se reclama muy mayoritariamente un endurecimiento de unas políticas de inmigración que se perciben como excesivamente laxas. Es evidente que para los partidos resulta tentador tratar de sacar provecho electoral de estas opiniones, incluso a costa de exaltarlas y extremarlas.

1.3 El perfil del español reacio a la inmigración.

Como en cualquier otro campo de la mercadotecnia, el marketing político está obligado a conocer a qué públicos se dirige; o, en concreto, a cuáles le resulta más conveniente

dirigirse para ser más eficaz en busca de sus objetivos. Los partidos políticos eligen, articulan y construyen sus mensajes en función de sus destinatarios. De ahí que antes de optar por un discurso u otro en torno a la inmigración los partidos deban conocer el perfil de aquellos votantes que se muestran más reacios a la presencia de extranjeros en nuestra sociedad.

Múltiples estudios han identificado constantes que pueden llegar a condicionar percepciones negativas en relación al fenómeno de la inmigración (Citrin *et al.*, 1997 y 2001; Burns y Gimpel, 2000 o Coenders *et al.*, 2004, entre otros). Constantes personales, sociodemográficas, socioeconómicas... que anticipan, aunque no de forma irrevocable, actitudes negativas y que se repiten a lo largo del tiempo y en diferentes países. Y que los estudios del CIS y Oberaxe vienen a confirmar que se reproducen también en el caso español.

El informe de evolución del racismo y la xenofobia de 2009 de Cea D'Ancona y Valles dibuja el perfil del español reacio a la inmigración. Con carácter general, y con más o menos incidencia en función de la pregunta, las variables que parecen determinar una percepción más negativa son un nivel de estudios bajo, también menores niveles de ingresos y de cualificación profesional, una más baja clase social, una mayor edad, una experiencia de desempleo reciente, las posiciones ideológicas más a la derecha, la desconfianza hacia las personas, una mayor práctica religiosa y un predominio (no muy acusado) del sexo femenino. Un perfil sociodemográfico que coincide con el que tradicionalmente han definido diferentes centros de investigación, fundamentalmente el CIS, en años anteriores para el español que rechaza la inmigración.

Un componente fundamental de este perfil para entender algunos mensajes antiinmigración utilizados en España es la competencia por unos mismos recursos entre autóctonos e inmigrantes como origen del rechazo al extranjero. Las

percepciones y las actitudes pueden basarse en cálculos de interés propio (Kessler y Freeman, 2005). La competencia por unos recursos limitados (empleo, servicios públicos, prestaciones sociales...) se erige en justificación para la creación de barreras del tipo ellos/nosotros y en estimulante de actitudes hostiles hacia los que se entienden de *otro* grupo.

De ahí que los eventuales votantes con peor situación económica, que optan o ya disponen de un trabajo de baja cualificación, que viven en barrios o municipios más modestos y que, en su caso, pueden depender de ayudas públicas o prestaciones sociales se conviertan en destinatarios prioritarios de los discursos políticos que tratan de aprovecharse o exaltar las actitudes negativas hacia el foráneo. Como veremos más adelante, esta variable resulta determinante para explicar el contenido de los discursos de Partido Popular y Partido Socialista sobre inmigración.

Las situaciones de crisis económica se convierten en un caldo de cultivo ideal para reacciones contra la inmigración: a medida que cae el PIB per cápita se eleva la actitud hostil (Coenders *et al.*, 2004). Sin embargo, en general todos los ciudadanos no culpan al inmigrante de su situación económica, sino que esta reacción se da en concreto en situaciones y sectores en que se está en competencia directa (Zapata-Barrero, 2009). Por ello, un nivel de estudios elevado, una posición económica y profesional mayor, de alta especialización y alto nivel de renta son rasgos fundamentales en el perfil del grupo de los tolerantes, con una actitud más favorable hacia la inmigración (Cea D'Ancona y Valles, 2009).

Por otro lado, aunque la variable ideológica influye en las actitudes, no puede entenderse como fundamental en última instancia. En efecto, según desvelan los informes de CIS y Oberaxe, a medida que la posición ideológica del encuestado se escora hacia la derecha, se incrementan las percepciones negativas en torno a la

inmigración. Sin embargo, como explicaremos ampliamente en el siguiente capítulo, en el que abordamos las estrategias de PP y PSOE en torno a este tema, el rechazo no es una actitud exclusiva de la derecha. Un estudio pormenorizado de los barómetros del CIS en el que analizaremos, en función de su autoubicación ideológica, la evolución de los que identifican la inmigración como problema, nos revela que entre los simpatizantes de la izquierda y el centro izquierda el peso porcentual de los que tienen una percepción negativa de la inmigración, aun menor que entre los conservadores, es tal que supone un reto (o una oportunidad) electoral para los partidos de uno y otro signo.

Los discursos políticos se verán así condicionados de forma crucial por el porcentaje de electores progresistas que ven la inmigración como un problema; dado que, aunque el contingente de reacios sea proporcionalmente menor que entre los conservadores, puede ser mayor en términos absolutos (y a la postre en número de votos) ya que los españoles se declaran muy mayoritariamente de centro izquierda o izquierda.

En España, como en otros tantos escenarios, se reproduce lo que ha venido a llamarse de la *paradoja del inmigrante indeseado* (Abad, 1993): aunque por lo general resulta evidente que la llegada de extranjeros constituye una necesidad para el conjunto de la economía y para cubrir empleos que los autóctonos perciben como menos deseables, esa misma llegada de extranjeros se entiende como un problema y como fuente de conflictos. En el caso español, algunos estudios apuntan a que las actitudes negativas tendrían su origen, más que en el tamaño de la población

extranjera, en la velocidad con que se han producido los flujos de entrada (Gimeno, 2001).

Algunos autores interpretan las actitudes negativas que presentan los españoles en relación a la inmigración como una consecuencia lógica ante un proceso irreversible de cambio, con profundas implicaciones demográficas, sociales, económicas, políticas e incluso, en algunos casos, personales. “Es estructuralmente normal que se produzcan actitudes negativas ante uno de los mayores desafíos que tiene nuestra sociedad” (Zapata-Barrero, 2009). Normal o no, existe.

La imagen negativa que del inmigrante tiene una parte no menor de la población española tiene su origen, su principal fuente de justificación, en los medios de comunicación (Van Dijk, 2008). Unos medios de comunicación en los que sólo se critica sin matices el discurso violento y abiertamente racista de las formaciones de extrema derecha; por lo demás, muy minoritarias en el caso español. Sin embargo, esos mismos medios por lo general no denuncian, y en muchas ocasiones tan siquiera ponen en cuestión, mensajes de contenido racista menos virulento, ese racismo cotidiano y que apela a un difuso, y desde luego relativo, sentido común.

La mayoría de las formas de racismo de hoy son de un racismo indirecto, sutil, sin alharacas ni violencia explícita. Y viene amparado por unas informaciones, las más, que abordan la inmigración con un tratamiento negativo y generan sentimientos de exclusión y de identidad tribalizada (Checa, 2008). Y, en la mayoría de los casos, esa imagen negativa que ofrecen los medios raramente puede ser rechazada o desmentida por la experiencia personal de trato directo con los inmigrantes, poco extendido y en algunas zonas prácticamente inexistente (Van Dijk, 2008). (*)

(*) Son múltiples los estudios que han abordado el tratamiento que otorgan los medios de comunicación al fenómeno de la inmigración. Sobre la imagen de la inmigración en la prensa, véanse, entre otros, Igartúa y Muñiz, 2007; Igartúa, *et al.*, 2005; Álvarez Gálvez, 2009, y Rodríguez Borges, 2010.

El hecho es que, como revelan los estudios del CIS y Oberaxe, los españoles parecen más preocupados por la gestión de los flujos de entrada y el control de las fronteras, que sobre la inclusión y la igualdad de derechos. Algunos estudios vinculan este interés con el contenido que sobre el fenómeno inmigratorio ha predominado en la agenda mediática: precisamente el de control de fronteras y el de llegadas dramáticas de inmigrantes irregulares. Existe una conexión entre noticias, discursos políticos y opinión negativa (Zapata-Barrero, 2009).

“La actitud tolerante que se muestra en el nivel de la inclusión es síntoma de que estamos en los inicios del proceso, donde la ciudadanía y su opinión están más formadas en materia de fronteras que de coexistencia”, sostiene Zapata-Barrero. “Si las políticas comenzaran a enfocarse en la coexistencia, en la igualdad de derechos y de inclusión, se supone que el enfoque de la opinión pública se desviaría de las fronteras al nivel de coexistencia, y comenzaría sin duda a generar, podemos avanzar como hipótesis, una actitud negativa”.

Efectivamente, resulta probable que, si el debate político y la agenda mediática empezaran a girar en torno a la convivencia y no sólo a la gestión de los flujos, las percepciones negativas sobre la inmigración irían en la misma dirección y se conformarían sobre esta misma temática. En la campaña de las elecciones generales de 2008 el Partido Popular se desmarcó con su propuesta de contrato de integración para los inmigrantes. Una medida que los populares volvieron a esgrimir en las elecciones autonómicas en Cataluña de 2010. ¿Ha empezado ya la cuenta atrás para que la coexistencia se convierta en el centro del debate sobre la inmigración?

Capítulo 2.

La inclusión de la inmigración en el debate político. Las razones de PP y PSOE

La pugna política entre partidos se ha convertido desde hace décadas en una suerte de campaña electoral permanente (Blumenthal, 1980). La campaña ya no termina con la victoria o derrota en las urnas, sino que en el periodo que transcurre entre una y otra cita electoral los partidos y potenciales candidatos siguen *cortejando* al votante con las mismas estrategias, técnicas y objetivos. Por ello, uno de los grandes anhelos de todo director de campaña se convierte en obsesión continua en el juego político: marcar la agenda, determinar los temas del debate.

La labor de los políticos, desde el punto de vista de la comunicación, cada vez parece más centrada en determinar los temas de los que se informa y se opina en los medios de comunicación para controlar de lo que hablan y por lo que se interesan los ciudadanos (McCombs, 2006). El político tratará de introducir los temas que más le convienen en la agenda mediática, para que ésta, con su capacidad para moldear sobre qué se piensa y cómo se piensa acerca de ello, imponga una agenda pública acorde a sus intereses.

Elmer E. Schattschneider ya anticipó en 1960 en su *The semi-sovereign people* que “aquel que determina en qué consiste la política gobernará el país, porque la definición de las alternativas es la elección de los conflictos, y la elección de los conflictos proporcionará el poder” (citado en Maravall, 2008). Y es así porque cada partido tratará de imponer siempre los temas en los que parte con ventaja, en los que cuenta con una imagen de estar más capacitado para gestionar determinada materia o en los que tiene una posición más cercana a la de la mayoría. Un partido intentará que

predominen temas eminentemente ideológicos si su ubicación en el eje izquierda-derecha es más próxima a la de una mayoría de votantes que la del rival; u optará por promover temas transversales si se pretende dudar de la capacidad de gestión del contrincante y si éste está mejor posicionado ideológicamente.

Los políticos cuentan con las encuestas como la fotografía más fidedigna de los temas de interés de los ciudadanos. Los sondeos ofrecen a los partidos un catálogo de las materias que más preocupan a los votantes en cada momento. Son una herramienta que proporciona a los políticos un listado de temas que debería abordar e incluso, en ocasiones, también les indica las posiciones que deberían asumir sobre estas cuestiones (García Beaudioux, D'Adamo y Slavinsky, 2005). Como ya apuntamos en el anterior capítulo, el político trata de influir en la agenda de los medios para que éstos lo hagan sobre el ciudadano; pero la agenda de los ciudadanos, en un proceso circular, también puede llegar a determinar los temas que está dispuesto a abordar el político.

En España, viendo los datos que revelan las encuestas, parecía claro que la inmigración acabaría siendo una de las materias de confrontación política. Generalmente se entiende que un tema forma parte de la agenda pública si supera con cierta permanencia la cota del 10% en los sondeos que miden los asuntos que más preocupan a los ciudadanos, por lo que en esa agenda por lo general no pueden figurar más de entre cinco o siete temas (McCombs, 2006).

Desde que la inmigración apareció por primera vez, en septiembre de 2000, en los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas como uno de los principales problemas que perciben los españoles, en tan sólo nueve de los 113 barómetros elaborados desde entonces y hasta el cierre de 2010 la inmigración se ha situado por debajo del 10% de los encuestados, y solamente en cinco la señalaron menos del 9%.

Durante la última década, la inmigración se ha mantenido entre los cinco asuntos de cabeza. Un escenario demasiado tentador para que los partidos políticos españoles lo obviarán y no convirtieran la inmigración en tema de campaña (de la formal y estrictamente electoral y también de la oficiosa y permanente).

Partido Socialista y Partido Popular cuentan, es evidente, con un posicionamiento ideológico muy diferente, lo que les acerca o aleja, respectivamente, de la ubicación ideológica de la mayoría de los españoles; en los últimos años uno estaba en el Gobierno y otro en la oposición; tienen entre los que les apoyan una muy distinta distribución de votantes fieles, frágiles, potenciales...; manifiestan un interés divergente acerca de qué tipo de temas (ideológicos o transversales) les conviene que formen parte de la agenda pública... En función de éstas y otras variables, PP y PSOE configuran su agenda y moldean sus discursos sobre diferentes materias. En función de estos factores, irrevocablemente determinantes, ambos partidos elaboran sus mensajes en torno a la inmigración. Pero, aun con diferentes objetivos (incluso con metas contrapuestas), los resultados, en forma de discurso, pueden acabar pareciéndose.

2.1 España y la crispación

La historia de la democracia española ha estado, y sigue estando, marcada por el profundo desfase existente entre un juego político exageradamente bronco, en permanente lucha abierta y sin cuartel, y una convivencia social sin grandes incidentes, en la que coexisten sin graves problemas grupos de diferente ideología, clase y, ahora también, de diferentes nacionalidades y razas. La *hiperconflictividad* política (y en los medios de comunicación) no es reflejo de la *microconflictividad* social española (Gil Calvo, 2007).

Una hiperconflictividad que se ha traducido en lo que el profesor Gil Calvo ha denominado *lucha política a la española*, caracterizada por una pugna entre partidos que se manifiesta en una importante agresividad verbal de los representantes políticos, en altas dosis de dramatismo en el discurso, en una confrontación beligerante continua, en una hostilidad contra el enemigo, al que se niega cualquier legitimidad para justificar su exclusión del juego político. Y es que parece que no hay adversarios cuyos derechos respetar, sino enemigos a los que vencer. Un despecho que quizá hunde sus raíces en la Guerra Civil y cuatro décadas de dictadura franquista, y en la endogamia clasista y territorial que aún permanece entre los representantes de nuestra clase política (Gil Calvo, 2007).

Los grandes enfrentamientos que, en forma de dueto político entre opositor y gobernante, ha vivido la actual democracia española (sucesivamente Felipe González-Adolfo Suárez, José María Aznar-Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero-José María Aznar, y el actual Mariano Rajoy-José Luis Rodríguez Zapatero) se han caracterizado por ser embates, con matices y diferentes intensidades, en los que el líder de la oposición ha centrado su labor más en socavar el poder de su rival, en no dejar gobernar en la medida de lo posible, que en intentar alcanzar el poder presentándose como alternativa.

El fin de las ideologías, el adiós a las clases sociales que ha alumbrado una sociedad hipercapitalista desclasada, el efímero fin de la Historia... En España, como en el resto de democracias occidentales, la disputa electoral cada vez está menos marcada por el peso del voto ideológico. El voto partidario va perdiendo fuerza (Dalton y Wattenberg, 2000). La volatilidad del voto y la abstención son dos *problemas* con los que los partidos políticos deben lidiar y han de tratar de combatir. Y encuentran, o creen encontrar, en el sensacionalismo político, en la sobreactuación (singularmente en la crítica desmedida), el antídoto para conseguir captar el interés de los medios de

comunicación y de los ciudadanos, para que escuchen sus mensajes y atiendan a su agenda de temas. Una vía generalizada en la actual *democracia de audiencia* (Manin, 1998) y que ya de por sí hace que todos los partidos se vean tentados a recurrir a la crispación tanto para hacer llamativo su discurso como, sobre todo, para defenestrar al rival.

Y es que, a la postre, acaba por tener más relevancia este último aspecto: el intento de combatir la volatilidad y la abstención se limita a sólo al electorado propio, porque las campañas negativas y la crispación buscan activamente desanimar al simpatizante del contrincante para que no vaya a votar (es más fácil provocar su abstención de votantes frágiles del rival que sumarlos como nuevos votantes propios). La política sensacionalista que buscaba animar la participación acaba teniendo como objetivo crucial la desmovilización de los rivales. El resultado puede ser el mismo: obtener más votos que el rival, pero no por aumentar nuestros apoyos, sino por restar los del adversario.

Pero aunque en la pugna política española se manifiesten, como vemos, los mismos síntomas propios de la actual tendencia histórica de desideologización que en el resto de Occidente, la nuestra tiene sus particularidades. El sistema político que se recoge en la Constitución de 1978 es profundamente asimétrico. En un intento de apuntalar a los nuevos gobiernos que salieran de las primeras citas electorales una vez recuperada la democracia, la Constitución dota al ejecutivo de amplios poderes y facilidades para constituirse y sostenerse gobernando a discreción (investidura por mayoría simple, moción de censura por mayoría absoluta, un sistema electoral, en la práctica, mayoritario que crea un bipartidismo imperfecto...). Una asimetría que empuja al primer partido de la oposición, ocupe quien ocupe su bancada en las Cortes, a ejercer un papel en el juego político de cada legislatura casi exclusivamente en negativo, ejerciendo el veto de facto del que dispone en todas las iniciativas que

necesiten una mayoría absoluta o una mayoría cualificada y acumulando prolijamente recursos en el Tribunal Constitucional (Gil Calvo, 2007).

Tanto si el partido en el poder cuenta con mayoría absoluta como si sólo tiene mayoría simple, la oposición prácticamente sólo puede ejercer su función de control mediante estos procedimientos negativos. El Gobierno tratará de evitar a toda costa tener que apoyarse en el principal partido de la oposición para promover nueva legislación, y utilizará preferentemente a las fuerzas nacionalistas periféricas (siempre ampliamente representadas en las Cortes por las particularidades del sistema electoral español) como socios de legislatura para sacar adelante sus políticas. El gran partido de la oposición, ya sea PP o PSOE, queda excluido del juego político de forma sistemática.

Ante esta situación de desventaja estructural, ante la imposibilidad de acceder al poder con juego limpio, la oposición acaba decantándose por fomentar la crispación para tener una oportunidad de promover la alternancia. La oposición opta por olvidarse de su función de control para ofrecerse como alternativa, y se decanta por el atajo de intentar defenestrar la imagen de su rival no para sumar apoyos para sí sino sólo para restárselos a su contrincante. Y, ya sea en defensa propia o por la inercia del despecho siempre presente, el partido gobernante aplica también las mismas técnicas de ataque continuo al *enemigo*, haciendo oposición a la oposición y abriendo un círculo vicioso en el proceso de crispación permanente de la *lucha política a la española*.

2.2 El PP y la crispación

Desde que perdiera el poder en las elecciones generales de 2004, en la que los españoles dieron el Gobierno al PSOE liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, el Partido Popular ha diseñado y ejecutado una estrategia de crispación permanente y deliberada (véase Fundación Alternativas, 2007 y 2008). La crispación es habitual en

las democracias occidentales. Los desacuerdos entre los diferentes partidos o situaciones coyunturales de alta tensión política pueden derivar en un debate bronco que traslade el malestar a la ciudadanía. Pero en España en las dos últimas legislaturas (2004-2008 y 2008-2012) la crispación que se ha vivido en las Cortes, en los medios de comunicación y las calles ha sido muy fundamentalmente resultado de una estrategia premeditada del Partido Popular, desarrollada porque entiende que este escenario le beneficia política y electoralmente. Se repite así la experiencia que ya se vivió con la dura oposición ejercida por el popular José María Aznar en la legislatura 1993-1996, y que finalmente le llevó a la Moncloa; y también con la contestación orquestada por el PSOE contra la guerra de Irak y la catástrofe ecológica provocada por el buque *Prestige* en la legislatura 2000-2004.

Una estrategia de crispación *bien ejecutada* pasa por promover un desacuerdo permanente con el Gobierno sobre cualquier materia. Para el partido que fomenta la crispación cualquier acuerdo es casi imposible; y si no lo es, hay que imposibilitarlo: se rechazará las iniciativas del Ejecutivo sin proponer las propias; se deslegitimarán a priori las políticas del Gobierno y se renunciará a discutir las; se rechazarán las ofertas de acuerdo y se invertirán los papeles para exigir al Gobierno que asuma pactos basados en sus contrapropuestas; se negará la legitimidad del rival incluso para proponer reformas, advirtiendo de sus consecuencias catastróficas y de sus perversas intenciones; se utilizarán temas de Estado tradicionalmente al margen de la lucha partidista y sobre los que existían consensos mínimos... Y todo ello se ejecutará con un nivel de crítica desmedido, con un tono durísimo, sobrepasando los límites del insulto y la descalificación si es necesario (Fundación Alternativas, 2007).

Si funciona, el partido de la crispación habrá conseguido crear una sensación de permanente emergencia nacional, habrá logrado dotar al Gobierno de una imagen de incapacidad por no conseguir alcanzar acuerdos con la oposición y, en el *mejor* de los

casos, se considerará al propio Ejecutivo como responsable de la crispación, y no víctima, por sus responsabilidades de gobierno. Y, en tal caso, parte del electorado moderado del partido gobernante se alejará de él o incluso se hartará de toda la actividad política. El escenario (¿teórico?) no se aleja demasiado del vivido en España en las dos últimas legislaturas (González y Bouza, 2009; Papell, 2009)

Los partidos políticos en España afrontan la pugna política aceptando unas premisas que favorecen a priori el recurso a la crispación: las elecciones no se ganan, sino que se pierden desde el Gobierno, así que resulta fútil competir desde la oposición (y más dadas las limitaciones que impone el sistema político español al papel del opositor, como hemos visto anteriormente); es mucho más difícil atraer a los votantes frágiles del rival que conseguir desmovilizar a parte de ellos; y resulta más rentable radicalizar posiciones sobre determinados temas tanto para movilizar a nuestro electorado como para atraer a los indecisos o, en su caso, a los votantes menos comprometidos del adversario (Fundación Alternativas, 2008).

El Partido Popular debe sortear un gran obstáculo para conseguir ganar unas elecciones. Su gran déficit como alternativa de gobierno es que parte en clara desventaja en relación al PSOE por su ubicación ideológica. En España, tradicionalmente, y aún hoy, una inmensa mayoría de los votantes sigue declarándose más próximo a las posiciones de izquierda [ver Tabla 2.1]. Comparando la autoubicación ideológica de los votantes y el posicionamiento ideológico que otorgan a cada uno de los dos grandes partidos políticos españoles, queda claro que el PSOE es la formación que ideológicamente más se parece a la media en que se encuentran los españoles y la que más próxima se encuentra al votante mediano (al famoso centro), mientras que el PP queda muy escorado a la derecha.

Tabla 2.1. Posiciones ideológicas de los españoles en la escala ideológica de 1 a 10

	1986	1989	1993	1996	2000	2004	2008
Izquierda (Posiciones de 1 a 5)	60%	55%	54%	58%	53%	60%	59%
Derecha (Posiciones de 6 a 10)	17,5%	21%	23%	24%	26,5%	21%	27%
Sin ideología	22%	24%	22%	18%	21%	19%	14%

Fuente: Estudios postelectorales del CIS / Fundación Alternativas.

El Partido Popular debe buscar pues fórmulas para que su desventaja ideológica no se convierta en un obstáculo insalvable en sus aspiraciones de alcanzar el poder en las urnas. Atendiendo a la distribución de los votantes por proximidad ideológica, el PP sólo podría obtener la victoria si un porcentaje suficiente de los electores de izquierda o de los de centro izquierda opta por la abstención o, claro, por votar al candidato popular (aunque basta con que estos votantes se queden en casa). Y para ello el Partido Popular tiene que conseguir imponer una agenda de temas que no tengan componente ideológico evidente. Si el debate político se centra en materias en que la discusión se mueve en el eje izquierda-derecha, el PP tiene muy difícil alcanzar la victoria. Pero si logra centrar toda la atención de medios de comunicación y público en asuntos ajenos a este eje, habrá dado un gran paso hacia el poder. Este objetivo es el que da sentido a la estrategia de la crispación de los últimos años.

Frente a los temas posicionales, sobre los que los votantes tienen diferentes preferencias (singularmente de carácter ideológico), los temas transversales generan consenso entre los ciudadanos, son materias en los que existen objetivos y preferencias comunes con independencia de la posición ideológica de cada cual (Maravall, 2008). Corrupción, terrorismo, la mentira, la capacidad y competencia de los políticos... Más allá de diferencias ideológicas, todos los votantes estarán en contra del terrorismo, querrán políticos honrados, competentes y capaces, que no les

mientan... Como los objetivos en relación a estos asuntos son comunes a todos los partidos, la disputa partidista en torno a ellos pasa por presentarse como el más capacitado para gestionarlos y por dibujar al adversario como incompetente al respecto.

Los partidos políticos permanentemente tratan de encontrar nuevos temas, nuevas *dimensiones políticas* (Riker, 1982), que les coloquen en buena posición para ganar las siguientes elecciones. En este intento de imponer los temas que resultan más rentables, de manipular las dimensiones políticas (la *herestética*, según Riker), el Partido Popular abiertamente ha buscado debilitar el voto ideológico, desplazar de la agenda mediática y de la agenda pública los temas que pudieran hacer más visible su desventaja ideológica en relación con el PSOE. El proceso de paz con ETA, los atentados del 11-M, la política territorial con el *Estatut* catalán como estandarte... y también la inmigración fueron temas (transversales) que sirvieron al PP en la legislatura 2004-2008 para atacar al Gobierno socialista con una dureza desconocida hasta entonces para conseguir subrayar su incompetencia, su radicalidad y su intento de hacer saltar por los aires los consensos sobre estas materias. Durante la legislatura 2008-2012, el tema estrella en este sentido fue, por razones obvias, la economía.

La estrategia del Partido Popular quedó abiertamente revelada en plena campaña para las elecciones generales de 2008 por el que en ese momento era secretario de Comunicación del partido, Gabriel Elorriaga, en unas inesperadas declaraciones al diario británico Financial Times.

Toda nuestra estrategia está centrada en los votantes socialistas indecisos. Sabemos que nunca nos votarán. Pero si podemos sembrar suficientes dudas sobre la economía, sobre la inmigración y sobre cuestiones nacionalistas, entonces quizás se quedarán en casa. (...) Será difícil incrementar nuestro voto.

El PP tiene una imagen muy dura y de derechas en este momento. Incluso nuestros votantes piensan que son más de centro que el PP. (...) Pero sus votantes [los del PSOE] son menos disciplinados. Por eso dirigimos nuestro mensaje a ellos. Les estamos diciendo: 'Vuestro Gobierno no se ha ocupado de vuestros problemas reales'. Los resultados dependerán del impacto de este mensaje'. (Financial Times, recogido por El País, 18 de febrero de 2008).

El Partido Popular pues trata de desactivar el voto ideológico y, en paralelo, busca promover la abstención entre los votantes del PSOE más moderados. Las elecciones en España se ganan (o se ganaban) en el centro izquierda (Maravall, 2008). El PP trata de desmovilizar a estos votantes más próximos al PSOE, pero volátiles, proponiendo temas que puedan hacer dudar de la capacidad del Partido Socialista para gestionarlos y, al tiempo, generando un estado de alarma constante que los desanima a participar en la vida política y en las elecciones. Si los comicios se deciden en temas como políticas sociales, educación, sanidad o derechos ciudadanos (vinculados al eje izquierda-derecha) el PSOE inicialmente parte con ventaja; si el PP consigue imponer una agenda de temas transversales como la estructura territorial o el terrorismo por medio de la crispación (es más difícil fijar los términos del debate político mediante una oposición tranquila), la ventaja puede quedar anulada.

Las campañas negativas provocan una menor participación en las elecciones (Ansolabehere e Inyegar, 1995). La crispación consigue crear una sensación de hartazgo en parte del electorado, que acaba por dar la espalda a la política y a los partidos, y no acude a las urnas. Pero el zarpazo de la abstención, en estos casos, no afecta por igual a todo el espectro ideológico, sino que tiene una mayor intensidad entre el electorado de izquierda (Barreiro, 2002). El Partido Popular confía en que una menor participación, al afectar más intensamente a votantes más próximos al PSOE, pueda servir para compensar su desventaja ideológica.

El Partido Popular perdió las elecciones de 2008. Su estrategia de la crispación cayó derrotada, sí, pero no fracasó; al menos no totalmente, dado que alcanzó parte de los objetivos que buscaba. El PP ha conseguido alejar al PSOE del centro político [ver Tabla 2.2]. Los resultados de las elecciones generales reflejan que el apoyo al PSOE de los votantes de centro (centro izquierda y centro derecha) se desinfló, mientras que se incrementó en el caso del PP. Quedaba desmentida así la antigua premisa de que una estrategia de polarización espanta al electorado moderado (Maravall, 2008). El Partido Popular, lejos de repeler al votante moderado con su dura oposición, aventaja a los socialistas en más de 10 puntos en voto captado entre el electorado de centro. El socialista José Luis Rodríguez Zapatero consiguió repetir victoria, pese a perder el apoyo del centro, gracias a aumentar el respaldo entre los votantes situados más a la izquierda (González y Bouza, 2009). Efecto secundario de la crispación: el PP parece que consiguió desanimar a los votantes moderados que en 2004 apoyaron al PSOE, pero simultáneamente acabó por movilizar a los progresistas y a los nacionalistas que trataban de evitar la llegada de Mariano Rajoy a la Presidencia del Gobierno.

Tabla 2.2.
Recuerdo de voto al PSOE según posiciones ideológicas (en %)

	1986	1989	1993	1996	2000	2004	2008
Extrema Izquierda (1-2)	41,8	30,7	36,6	38,2	40,9	49,3	66,2
Izquierda (3-4)	68,3	57,4	60,9	52,7	47,8	67,5	76,8
Centro Izquierda (5)	26,3	23,9	26,5	26,2	17,1	38,2	28,8 *
Centro Derecha (6)	6,2	7,4	5,9	4,5	1,6	11,2	-
Derecha (7-8)	4,4	5,7	3,2	3,0	0,8	5,5	2,3
Extrema Derecha (9-10)	2,7	7,6	0,7	0,7	0,8	6,3	5,5

Recuerdo de voto al PP según posiciones ideológicas (en %)

	1986	1989	1993	1996	2000	2004	2008
Extrema Izquierda (1-2)	0,0	0,4	0,5	1,8	0,9	1,1	0,6
Izquierda (3-4)	0,3	0,3	1,6	3,5	5,7	1,8	1,9
Centro Izquierda (5)	6,1	7,3	22,0	27,8	35,3	18,7	39,8*
Centro Derecha (6)	29,9	32,6	53,9	59,5	70,0	62,5	-
Derecha (7-8)	63,4	59,1	73,0	77,6	81,6	79,5	86,7
Extrema Derecha (9-10)	78,9	60,8	86,8	78,6	82,9	77,7	91,7

*Para los datos de 2008, las posiciones 5 y 6 aparecen conjuntamente.
Fuente: Estudios postelectorales del CIS / Fundación Alternativas.

2.3 PP, crispación e inmigración

La inmigración es un fenómeno cuya relevancia justifica con creces que forme parte del debate político. Por sus implicaciones sociales, económicas y demográficas, los partidos están obligados a hacer públicas sus propuestas sobre cómo gestionarlo. Por el interés que despierta entre la ciudadanía, entre los votantes (como ya hemos analizado en el primer capítulo), es comprensible que tenga presencia en los discursos de los políticos. Pero, si bien es normal que se aborde en España como hace tiempo que se hace en otras democracias europeas (incluso en campaña electoral, con el riesgo de quedarse en el simple trazo grueso en un tema tan delicado), no están justificadas todas las fórmulas de utilizarlo en la confrontación partidista.

A cada partido le resulta más conveniente que al resto el uso de unas temáticas determinadas con objetivos electorales. Y es que los temas, en política, tienen dueño (McCombs, 2006). Los ciudadanos perciben que unos partidos están más capacitados que otros para gestionar según qué materias, es la denominada teoría de la apropiación de temas o *issue ownership* (Petrocik, 1996). Y cuando se combina el establecimiento de la agenda con la noción de que cierto partido político es el más competente para lidiar con una determinada materia, los efectos electorales pueden llegar a ser de gran calado (Miller y Niemi, 2002). Por eso cada partido tratará de imponer en la agenda los temas que más le convienen, aquellos acerca de los que los votantes lo perciben como el más capacitado para gestionarlos.

El Partido Popular ha conseguido en los últimos años convertir la inmigración en uno de esos temas de los que puede apropiarse, en línea con la tradición de la derecha europea, con amplia experiencia en el discurso duro en torno al fenómeno inmigratorio.

La inmigración se percibe por los españoles como un *problema* de seguridad (un aumento de la delincuencia y de la inseguridad ciudadana es el efecto negativo que mayoritariamente los ciudadanos achacan a la llegada de extranjeros) y/o como un fenómeno estrechamente relacionado con cuestiones económicas y laborales. Los ciudadanos prefieren generalmente a partidos conservadores para lidiar con estos dos asuntos públicos (seguridad y economía), del mismo modo que optan por los partidos de izquierda para gestionar los servicios sociales o la vivienda. Según los barómetros del CIS, el PP ha logrado hacer de la inmigración una de las pocas materias en que los encuestados le prefieren abiertamente para gestionarla [ver tabla 2.3]. Pero ante todo los sondeos revelan que los populares pueden encontrar en la inmigración una oportunidad para restarle apoyos a su rival más directo: un porcentaje apreciable de los votantes del PSOE (desde hace años por encima del 10%, y en 2010 por encima del 18%) considera que los populares están más capacitados para afrontar las políticas de inmigración [ver tabla 2.4].

Tabla 2.3
¿Qué partido político, el PSOE o el PP, considera que está más capacitado para afrontar cada uno de los siguientes temas? (en %)

OCTUBRE DE 2010	PSOE	PP	Ninguno
El empleo	21	29.9	31.8
La educación	32.4	24.7	23
La sanidad	37.1	20.9	21.9
La economía	19.6	34.9	28.2
La política exterior	28.1	26.9	22.7
El terrorismo	32	23.2	24.2
La seguridad ciudadana	29.3	26.6	22.6
La inmigración	25	31.8	25.1
El Estado Autonómico	27.5	24.6	24.2
El medio ambiente	34.9	18.2	23.6
Las infraestructuras	31.6	22.9	21.9
La política de ciencia y tecnología	28.4	20	23.9
Las políticas sociales	36.6	20.7	22.1
Los derechos de los ciudadanos	34.3	21.3	23.9
La vivienda	26	24.3	28.8
La igualdad entre hombres y mujeres	37.6	18.2	22.4

OCTUBRE DE 2009	PSOE	PP	Ninguno
El empleo	26.2	27.6	31.4
La educación	34.7	25.2	22.7

La sanidad	39.9	21.1	21
La economía	24.3	34.1	26.6
La política exterior	32.8	26.4	20.3
El terrorismo	34.3	24.8	23.8
La seguridad ciudadana	32.4	26.8	23.1
La inmigración	29.9	29.8	25.2
El Estado Autonómico	30.4	23.6	24.2
El medio ambiente	38.5	17.8	24.6
Las infraestructuras	35.1	23	21.1
La política de ciencia y tecnología	31.4	21.5	21.8
Las políticas sociales	43.3	19.6	20
Los derechos de los ciudadanos	39.3	20.9	22.3
La vivienda	28.7	24.1	30
La igualdad entre hombres y mujeres	42.6	17.4	21.5
OCTUBRE DE 2008	PSOE	PP	Ninguno
El empleo	37.4	24.2	21.5
La educación	44.3	21.3	16.6
La sanidad	46.4	19	16.3
La economía	33.3	29.5	19.5
La política exterior	39.3	23.6	15.4
El terrorismo	37.2	24.1	20.5
La seguridad ciudadana	39.3	23.1	18.1
La inmigración	37.1	26.3	19.8
El Estado Autonómico	39.3	20.6	17.8
El medio ambiente	46.7	15.4	16.6
Las infraestructuras	43.6	19	16.1
La política de ciencia y tecnología	41.5	16.4	16
Las políticas sociales	49.6	15.7	15.3
Los derechos de los ciudadanos	46.6	17.5	16.5
La vivienda	36.3	21.2	24.2
La igualdad entre hombres y mujeres	50.6	14.7	15.7

Fuente: Barómetros del CIS.

Tabla 2.4

¿Qué partido político, el PSOE o el PP, considera que está más capacitado para afrontar la inmigración? Por recuerdo de voto (en %)

OCTUBRE DE 2010	PSOE	PP	Ninguno
Votantes del PSOE	45.6	18.3	19
Votantes del PP	3.6	70.6	13.4
OCTUBRE DE 2009			
Votantes del PSOE	56.3	14	18
Votantes del PP	4.1	70.6	16.4
OCTUBRE DE 2008			
Votantes del PSOE	63.1	11	13.8
Votantes del PP	7.5	65.4	11.8

Fuente: Barómetros del CIS.

Según se desprende de las encuestas del CIS analizadas en el capítulo anterior, un porcentaje significativo de españoles considera que la legislación de extranjería es

demasiado laxa y que debería endurecerse; que hay demasiados inmigrantes en España; que los autóctonos deberían tener preferencia en el acceso a determinados servicios públicos; que existe una relación directa entre inmigración y delincuencia; y que el extranjero debería aparcar los aspectos de su cultura que *molesten* a los españoles. La combinación de todas estas actitudes de rechazo es, por su contenido y por el número de los que las respaldan, perfecta para construir un mensaje antiinmigración.

El Partido Popular ha aprovechado todas estas percepciones negativas (todas) para construir su discurso sobre el fenómeno, como comprobaremos en capítulos posteriores en los que analizaremos el contenido de los mensajes de los dos partidos mayoritarios. En los últimos años, los dirigentes del Partido Popular han abogado por una imprecisa política de *orden y control* en la gestión de la inmigración, frente a la presunta indolencia del Gobierno socialista; han utilizado el mensaje de *aquí no cabemos* para denunciar la *avalancha* de extranjeros que amenaza con convertirse en *pesadilla*; han vinculado abiertamente la llegada de inmigrantes con el deterioro de los servicios públicos y han esgrimido el argumento de que los extranjeros no pueden poner en peligro los derechos de los españoles; han propuesto que los inmigrantes firmen un contrato de integración con el que se comprometerían a asumir las *costumbres españolas...*

Para el Partido Popular, el de la inmigración es un tema que encaja a la perfección en los objetivos de su estrategia de crispación (Gabriel Elorriaga lo citaba en esas polémicas declaraciones a Financial Times sobre la estrategia electoral del partido en 2008). Fundamentalmente, porque todo ese listado de percepciones negativas que tiene el ciudadano español y que identifica el CIS puede, en la lógica de crispación del PP, denunciarse como las consecuencias de la mala gestión del Gobierno. El descontrol de las fronteras, el deterioro de los servicios sociales, el favoritismo hacia el

inmigrante frente al español..., todo puede aprovecharse para acusar al Ejecutivo de incompetencia e incapacidad. Una denuncia que es la cumbre de los temas transversales utilizados tradicionalmente para crispas la vida política.

La inmigración podría llegar a considerarse como un tema de carácter posicional. Por su vinculación con otros asuntos como el racismo, la igualdad, la protección del débil, la cooperación internacional, la ampliación de los derechos cívicos y sociales, los servicios públicos... podría inscribirse en el marco ideológico de enfrentamiento entre progresistas y conservadores. Pero en él tiene un peso especial un rasgo fundamental de los temas transversales: pese a los matices y distintas intensidades, no hay diferencias sustanciales en relación a los objetivos que deben tener las políticas de inmigración. Unos objetivos que pasarían por una gestión ordenada de las fronteras y de los flujos de entrada, y garantizar una convivencia tranquila; dado, claro está, que ha de tomarse como premisa (y todos los partidos así lo hacen) que la inmigración cero no es una posibilidad real (Zapata-Barrero, 2008). Sólo cabe gestionar un fenómeno irreversible.

En cualquier caso, la inmigración como tema de debate político sale definitivamente del eje izquierda-derecha si se analiza el perfil de los que muestran una actitud negativa en relación a la presencia de extranjeros en España. Un rechazo que trasciende a las diferencias ideológicas. El Partido Popular, en su intento de compensar su desventaja ideológica, desarrolla su estrategia de crispación para promover la abstención entre los votantes del PSOE o, en el mejor de los casos, conseguir atraerlos y convertirlos en votantes propios. El perfil del español reactivo a la inmigración ofrece una explicación clara de por qué el PP ha encontrado en este fenómeno un tema de confrontación política clave para la consecución de estos fines.

Según los informes del CIS y Oberaxe, dos de las variables que influyen en la aparición de actitudes de rechazo hacia la inmigración son el nivel de ingresos y la cualificación profesional. Cuanto menor es la renta y más humilde el empleo, más proclive se será a tener una percepción negativa del extranjero, debido fundamentalmente a que se dan situaciones de competencia directa por los mismos servicios sociales y ayudas públicas, tanto por tener similares niveles de renta como por compartir los lugares de residencia (Cea D'Ancona y Valles, 2009).

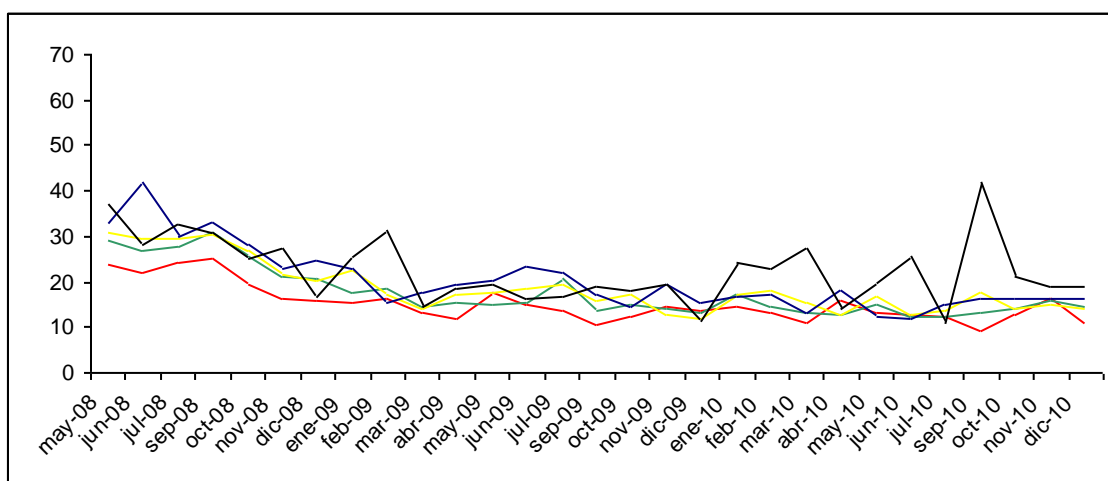
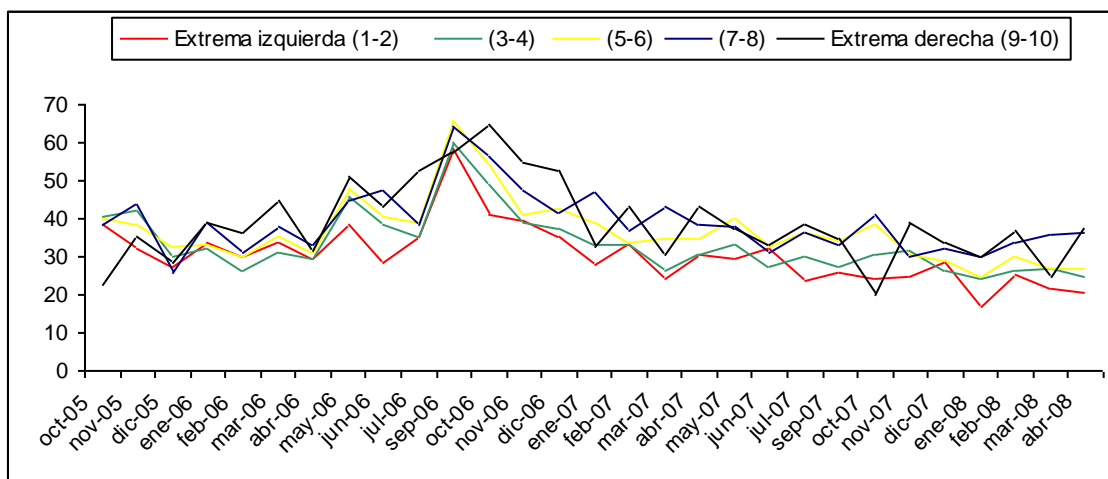
El Partido Popular cuenta con la gran baza de que entre los segmentos de público que deberían ser destinatarios prioritarios de un discurso que abogara por atajar los problemas de convivencia y de deterioro de los servicios públicos que supuestamente genera un exceso inmigración se encuentran trabajadores poco cualificados de clase baja o media baja y que residen en barrios o municipios humildes (u obreros). Esto es, entre los votantes que podrían dar una buena acogida a los mensajes duros en torno a la inmigración figuran integrantes de tradicionales caladeros de votos del PSOE. Un escenario que le ofrece al PP la gran oportunidad de abanderar un endurecimiento de las políticas de inmigración para alcanzar su objetivo de “sembrar dudas” entre votantes socialistas acerca de la capacidad del Gobierno sobre esta materia y, eventualmente, empujarles a cambiar el voto o simplemente a la abstención.

En paralelo, un análisis detallado de los barómetros mensuales del CIS permite comprobar que la imagen de la inmigración como un problema no es exclusiva de los ciudadanos con posiciones ideológicas más a la derecha. Una parte amplia de la izquierda y el centro se convierte en destinatarios potenciales de un discurso duro sobre inmigración.

GRÁFICO 2.1

Evolución de la inmigración como problema para los españoles. Por escala ideológica

Respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son, a su juicio, los tres problemas principales que existen actualmente en España? En porcentaje.



*Autoubicación ideológica de los encuestados de 1 a 10. 1 es extrema izquierda y 10 extrema derecha.

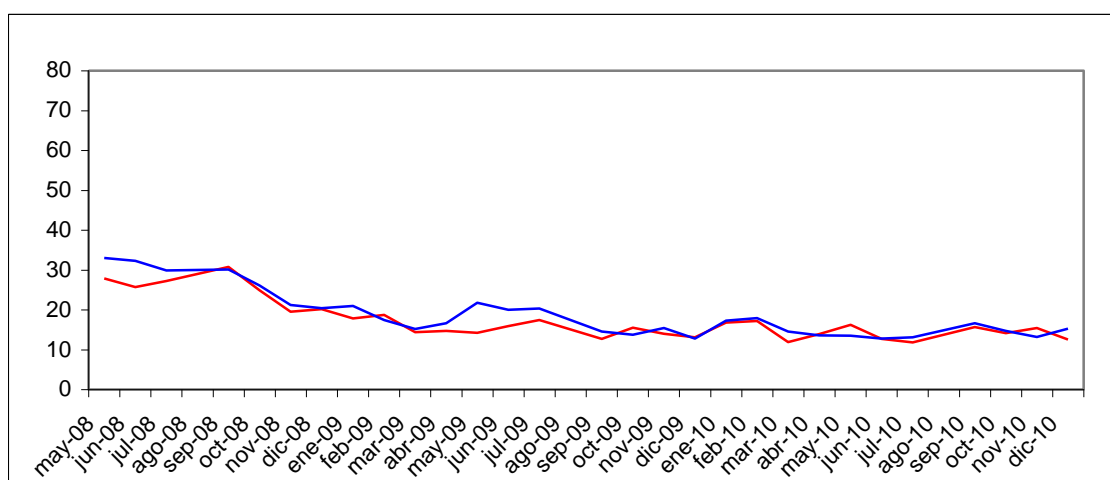
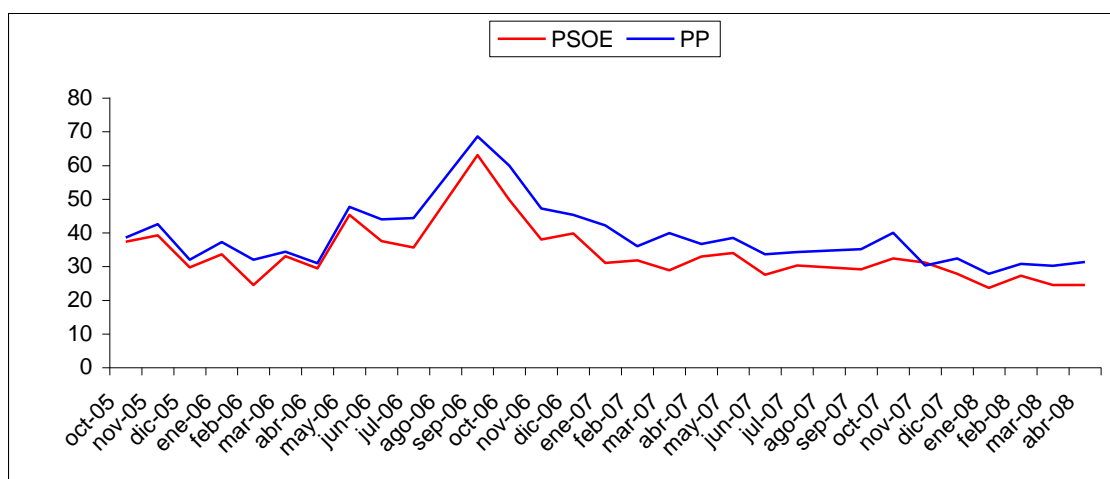
Fuente: Elaboración propia con datos de los barómetros del CIS.

En los últimos años, entre los encuestados que citan la inmigración como uno de los principales problemas del país, efectivamente los que se autoubican en las posiciones más a la derecha de la escala ideológica (del 7 al 10) presentan los mayores porcentajes [ver Gráfico 2.1, y Tabla A.2.1 en el Anexo]. Sin embargo, los datos de las posiciones más a la izquierda (del 1 al 4) acompañan siempre la tendencia general de

mayor o menor identificación de la inmigración como problema, con porcentajes muy próximos a la media general en todo momento. Y, por su parte, los encuestados de las posiciones del centro de la escala ideológica (5 y 6) ofrecen valores sistemáticamente mayores al promedio general. Si el PP pretende que sus mensajes sobre inmigración cuajen entre los votantes progresistas y los moderados, en principio, los datos, le acompañan.

GRÁFICO 2.2
Evolución de la inmigración como problema para los españoles.
Por recuerdo de voto

Respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son, a su juicio, los tres problemas principales que existen actualmente en España? En porcentaje.



Fuente: Elaboración propia con datos de los barómetros del CIS.

Asimismo, el análisis pormenorizado por recuerdo de voto (en función del partido al que se votó en las anteriores elecciones) de los ranking de principales problemas del país también da una idea de por qué el Partido Popular ha encontrado en la inmigración un tema que abordar para tratar de obtener rédito electoral. En los últimos años, el porcentaje de votantes del PSOE que ve la inmigración como un problema para España es muy ligeramente inferior al que presentan los votantes del PP. Y, en todo caso, la proporción de votantes socialistas es siempre sustancial y en línea con el promedio del conjunto de los españoles (ver Gráfico 2.2; y Tabla A.2.2 en el Anexo).

El Partido Popular ha tratado en los últimos años de forma intermitente, sobre todo en periodo electoral (aunque no sólo), imponer en la agenda de los medios y de los ciudadanos el tema de la inmigración como problema. Los populares tienen a su alcance un tema transversal sobre el que los españoles consideran que está más capacitado para gestionarlo; que despierta actitudes de rechazo tanto en la izquierda como en la derecha; que preocupa tanto a sus votantes como a los votantes socialistas; y que, por todo ello, encaja en su estrategia de tratar de reducir la participación en el electorado de izquierda y de centro para compensar su desventaja ideológica en relación al PSOE. El PP lo tiene a su alcance, y lo está aprovechando.

2.4 El PSOE y la crispación

El Partido Popular justifica públicamente la dureza de su estrategia de oposición en la necesidad de alertar de las desastrosas consecuencias de las reformas radicales que ha emprendido el Partido Socialista desde su llegada a Moncloa en 2004. Reformas que *rompen* España, que *venden* España; reformas, todas, que forman parte de un programa radical y que los socialistas emprenden con intenciones perversas. Sin embargo, la estrategia de crispación del PP se puso en marcha sin esperar a esas reformas, sino con carácter inmediato tras la toma de posesión de la Presidencia por

parte de José Luis Rodríguez Zapatero al poner en duda la legitimidad misma de los resultados de las elecciones por producirse tres días después de los atentados del 11 de marzo en Madrid. La estrategia de la crispación no es consecuencia de ese programa radical ejecutado por el Gobierno socialista (proceso de paz, reformas estatutarias, ley de matrimonios de personas del mismo sexo...); es anterior y forma parte de un plan político que busca devolver al PP al poder porque se entiende que un escenario de crispación beneficia sus opciones electorales.

Sin embargo, aunque parece claro que el PP está en el origen del permanente estado de tensión política que se ha vivido en las dos legislaturas que arrancaron en 2004 y 2008, el PSOE ha participado desde el Gobierno muy activamente en esa *lucha política a la española* que anteriormente hemos descrito. El Ejecutivo socialista también ha sido partícipe de la crispación. Como respuesta a los duros ataques del PP, pero también por conveniencia, el Gobierno del PSOE ha fomentado y se ha beneficiado de esa crispación, en una estrategia que pasaba por hacer con todo rigor oposición a la oposición (Gil Calvo, 2007; González y Bouza, 2009).

El Partido Popular se ha autoexcluido durante dos legislaturas de la posibilidad de generar consensos, ha negado toda posibilidad de acuerdo sobre casi cualquier materia. Pero el Gobierno socialista no ha tenido inconveniente en fomentar esa exclusión del PP, apoyándose en socios parlamentarios nacionalistas (cambiantes según el momento político) para sacar adelante diferentes iniciativas. En ocasiones por iniciativa propia (matrimonio homosexual, retirada de tropas de Irak...), en otras al albur de los deseos de sus socios parlamentarios (*Estatut* de Cataluña, Ley de Memoria Histórica...), e incluso a veces por circunstancias sobrevenidas (tregua de ETA y proceso de paz), el Ejecutivo socialista ha emprendido iniciativas de calado sin consensuar posiciones con el principal partido de la oposición. Es cierto que resultaba en la práctica casi imposible contar con el respaldo de un PP empeñado en alcanzar

los objetivos de su estrategia de crispación. Pero el Gobierno ha sabido aprovecharse de este escenario para hacer su propia aportación al clima político bronco. El PP no quería acuerdos y al PSOE no le ha interesado demasiado conseguirlos, en un permanente juego de negación del adversario, ya esté en el poder o en la oposición.

El Partido Socialista ha denunciado con persistencia el rechazo por parte del PP a cualquier intento de pacto, sus acusaciones a los dirigentes populares de *no arrimar el hombro* han sido permanentes en los últimos años. Unas acusaciones que trataban de justificar en parte la incapacidad del Gobierno para alcanzar acuerdos con la otra formación mayoritaria y para esconder el fracaso, de facto o de mera comunicación, según los casos, de algunas de las políticas que más han marcado las agendas mediática, pública e institucional en los últimos años (muy singularmente el proceso de paz, pero también por ejemplo, no saber contrarrestar la imagen de debilidad y de tendencia a la cesión en la cuestión territorial).

Pero el objetivo fundamental de las quejas socialistas sobre la oposición exasperada del PP, de sus denuncias por la actitud de rechazo premeditado a cualquier iniciativa que venga del Ejecutivo, va más allá y es de carácter estratégico. Los socialistas puede que simplemente estén alertando al ciudadano de un comportamiento real y reprochable de los populares; pero lo hacen alimentando también la polarización en beneficio propio. El PSOE busca con sus acusaciones crear una imagen de un Partido Popular extremista, alejado del sentido de Estado, abiertamente irresponsable, que se ha entregado a los elementos más derechistas de sus filas... El mensaje de los socialistas trata de posicionar al PP aún más a la derecha en la escala ideológica, en un intento de desanimar a sus votantes más moderados y, al tiempo, de movilizar y atraer a votantes de izquierda hacia el electorado socialista.

Es un juego de espejos. El PP busca con su estrategia de crispación mantener movilizados a sus votantes más conservadores y, sobre todo, desanimar al electorado moderado de toda participación política, alejar del PSOE a los votantes de centro para compensar la desventaja ideológica con la que parte. Y lo hace utilizando temas transversales, que le permiten más fácilmente poner en duda la capacidad de los socialistas sobre determinadas materias y también aparcar el debate del eje izquierda-derecha que no le conviene.

Los socialistas, por su parte, tratan permanentemente de culpabilizar al PP del mal ambiente político, denuncian su irresponsabilidad por sacrificar el interés general por un beneficio electoral, e intentan atribuirle rasgos propios de formaciones extrema derecha. El Partido Socialista procura que en la medida de lo posible el debate se desarrolle en una dialéctica de izquierda vs. derecha que tradicionalmente le beneficia. El PSOE articula su propia versión de la estrategia de la crispación para que los votantes moderados renieguen de un PP que se ha radicalizado y, al mismo tiempo, para movilizar a los electores de izquierda y atraerlos a sus filas.

El Gobierno socialista se ha declarado en todo momento víctima, y sólo víctima, de la crispación. Y ha achacado la suma tensión y la imposibilidad de sacar adelante algunas iniciativas a la estrategia premeditada del Partido Popular. Pero del mismo modo que las duras invectivas que incluye la estrategia de la crispación del PP son anteriores a las reformas radicales que supuestamente combaten, los intentos socialistas de excluir al PP de la vida política y aislarle del resto de partidos con representación parlamentaria son previos a los ataques de los populares e incluso anteceden a la llegada de Rodríguez Zapatero a Moncloa. Ya en 2003, como antesala del nuevo gobierno tripartito que ocuparía la Generalitat de Cataluña, el PSC (la formación socialista catalana federada con el PSOE), Iniciativa per Catalunya Verds y Esquerra Republicana de Catalunya firmaban el Pacto del Tinell, en el que se incluía

una cláusula que comprometía a las tres formaciones a no alcanzar acuerdos de Gobierno ni pactos de legislatura con el PP tanto en Cataluña como en las instituciones de ámbito estatal.

El Partido Socialista llega al Gobierno en 2004 de forma sorpresiva, tras unas elecciones trágicamente marcadas por los atentados islamistas del 11-M. La gestión que de los ataques realizó el Ejecutivo de José María Aznar, sobre todo desde el punto de vista de la comunicación, en los tres días que transcurrieron hasta la celebración de los comicios propició el vuelco electoral. El PSOE regresaba al poder aupado por votantes de centro, de izquierda y de corte nacionalista que, aunque algunos no compartían su ideario, optaron por un voto instrumental para impedir un nuevo gobierno del PP (González y Bouza, 2009). En este contexto, los socialistas tratan de crear un Gobierno ejemplar, sin tacha, el Gobierno del talante, el Gobierno que encarne una tercera vía equidistante que agrupe a ciudadanos de todo el espectro y que rompa con los excesos de la mayoría absoluta con que ha gobernado el PP de José María Aznar desde 2000.

Con este objetivo, el Ejecutivo socialista pone en marcha políticas para todos los segmentos ideológicos que le han dado la victoria electoral. El nuevo Gobierno tiene que diseñar políticas para mantener entre su electorado a los centristas que han abandonado al PP (ley de dependencia, ley de violencia de género, ley de igualdad, regularización de inmigrantes sin papeles...). Pero también ha de formular iniciativas de impronta progresista para que no se desmovilicen los votantes de izquierda que acudieron a las urnas contra el PP (retirada de las tropas de Irak, Ley de Memoria Histórica, asignatura de educación para la ciudadanía, matrimonio entre personas del mismo sexo...) y otras medidas que encajen con parte del electorado próximo a los nacionalismos (nueva ronda de reformas estatutarias, pero sin ceder ante el desafío

soberanista del denominado Plan Ibarretxe para no espantar a los votantes moderados).

Sin embargo, la estrategia de durísima oposición desarrollada por el Partido Popular da al traste con el intento de cambio tranquilo, con el anhelo socialista de una legislatura de debate político dominado por el talante. El PP demuestra, en versión española y castiza, la tesis de los estrategas del Partido Republicano estadounidense de que la polarización y la crispación pueden atraer a los moderados hacia el electorado propio y acabar penalizando al partido rival en el Gobierno (Maravall, 2008).

El PSOE volverá a ganar las elecciones generales en 2008. La estrategia de la crispación del PP pierde los comicios, pero, insistimos, no fracasa. El PSOE se impone en las urnas, pero lo hace perdiendo el apoyo de una parte sustancial de los votantes de centro que le respaldaron cuatro años antes, y gracias a la movilización a su favor de la izquierda y del nacionalismo moderado que se suman para abortar la vuelta de los populares al poder. El PSOE consigue la victoria, pero tras los comicios se encuentra en una posición de mayor debilidad estratégica que en 2004, toda vez que ha encogido, y mucho, su electorado de centro.

Los socialistas iniciaban entonces una legislatura en que sus políticas de gobierno deben articularse con un doble objetivo: recuperar el centro perdido y mantener a la izquierda que se ha movilizado contra el PP. Para alcanzar la primera de estas metas, el nuevo Ejecutivo de Rodríguez Zapatero pone coto a algunas de las materias que habían monopolizado (en su contra) las agendas durante su primer mandato: entre otras materias, escenifica un endurecimiento de sus mensajes sobre política antiterrorista (ya no hay negociación posible después de la ruptura del anterior proceso de paz) y también de su discurso en torno a la inmigración (recortando los cupos de entrada, promoviendo el retorno al país de origen...)

Los síntomas de lo que se convertiría en crisis económica (y luego en recesión) empezaron a ser evidentes en España ya en los albores de la legislatura. Para conseguir mantener fiel al elector posicionado más a la izquierda, el Gobierno activó en la primera parte de la legislatura medidas con simbología progresista para encarar la crisis (ayuda de 426 euros a los parados que agotan la prestación por desempleo; apoyo público a la minería y a las plantas automovilísticas para garantizar el empleo...) y formuló un claro discurso en contra de las políticas económicas de corte neoliberal (singularmente, una reforma laboral restrictiva que no fuera pactada por sindicatos y patronal).

Pero en la segunda parte de la legislatura, la estrategia del PSOE saltó por los aires. Con más de cuatro millones de parados, con la actividad española rezagada en relación con las grandes economías europeas, con los mercados de deuda pública en niveles desorbitados, tras los naufragios de Grecia e Irlanda..., el Ejecutivo, presionado por la Unión Europea y Estados Unidos, da un giro total a sus políticas y emprende un programa de medidas que contradicen por completo el discurso que mantenía hasta entonces: reforma laboral no pactada (que llevó a los sindicatos, hasta entonces aliados gubernamentales de facto, a convocar una huelga general), recorte salarial a los funcionarios, reforma del sistema de pensiones... Todas ellas medidas impopulares, de corte neoliberal, muy alejadas de las posiciones defendidas desde la izquierda. Pero que, en el mejor escenario posible para los socialistas, si dan buenos resultados antes de las elecciones de 2012, pueden acabar por volver a atraer a parte del electorado moderado.

La estrategia de la crispación desarrollada por el PP consiguió restarle apoyos al PSOE entre los votantes de centro. Y las reformas económicas que el Gobierno socialista se vio obligado a ejecutar le alejan del electorado de izquierda. El resultado,

de momento, es el hundimiento del PSOE en todos los sondeos sobre intención de voto.

2.5 El PSOE y la inmigración

Al Partido Socialista no le conviene en clave electoral que la inmigración se convierta en uno de los grandes temas de la agenda. Como hemos visto, es una de las pocas materias sobre las que los ciudadanos españoles prefieren mayoritariamente al Partido Popular para gestionarla. Los socialistas parten en el debate sobre la inmigración en una clara desventaja en sus opciones de aprovechar el tema en beneficio propio. Incluso los expertos del grupo de estudio 'Agenda y Voto' han advertido en las encuestas una correlación negativa para los intereses del PSOE: cuanto mayor peso tiene la inmigración como uno de los problemas del país que se citan en los barómetros del CIS, menor es su intención de voto (González y Bouza, 2009). En definitiva, el PSOE preferiría que la inmigración no fuera uno de los temas de confrontación política. De ahí que el Partido Popular trate de promover el escenario estrictamente contrario, e introducir en las agendas pública, mediática y política el fenómeno migratorio como uno de los campos de interés.

Los socialistas dan una doble respuesta a la estrategia del PP de incluir la inmigración entre las materias que están presentes en el campo de batalla política. Por un lado, el PSOE trata de equiparar el discurso antiinmigración de su rival con el de la extrema derecha europea, en el marco de su propia estrategia de crispación antes comentada y su permanente intento de crear en torno al PP la imagen de un partido irresponsable. Por otro, los socialistas se pliegan a los resultados de las encuestas, y ofrecen su propia versión del discurso de mano dura con la inmigración para no perder el respaldo de sus tradicionales caladeros de votos más afectados por la competencia de la población extranjera.

Apenas unos meses después de asumir el poder, el PSOE anunció la que se convertiría en la mayor regularización de inmigrantes españoles de la historia del país: más de 578.000 extranjeros obtuvieron permiso de residencia y trabajo en un único proceso de normalización extraordinario. Los socialistas no pretendían colocar el de la inmigración como uno de los temas de confrontación política. Hasta ese momento, y pese a las disensiones en la tramitación de las dos últimas leyes de extranjería, existía un consenso básico y parecía que ambas partes coincidían en que la inmigración se quedara fuera de la cruda lucha partidista. Pero la estrategia de crispación del PP, de ataque con todo al nuevo Gobierno, encontró en la inmigración y en el proceso de regularización otro tema que explotar electoralmente, como veremos en los capítulos siguientes.

A partir de entonces, el Ejecutivo socialista aprovechó el desliz del PP de utilizar la inmigración en la pugna partidista para apuntalar uno de los objetivos fundamentales de su comunicación política: adjudicar al PP la etiqueta de partido incompetente y radical. Desde las filas del PSOE se aborda la inmigración con permanentes denuncias de la mala gestión realizada en esta materia durante los ocho años de gobierno popular: recordando el abultado volumen de inmigrantes que entraron de forma irregular (al menos tantos como los regularizados por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero en 2005); denunciando las cinco regularizaciones poco rigurosas que realizó el PP en el poder... El PSOE trata de combatir que los ciudadanos prefieran al PP para gestionar la inmigración poniendo permanentemente en duda su capacidad para tal tarea. [“Los inmigrantes vinieron a España cuando gobernaba el PP (...). Se colaron un millón. (...) Ustedes dieron papeles sin exigir contrato de trabajo, sin examinar los antecedentes penales, bastaba con presentar un bono para el autobús, un recibo de televisión.” (José Luis Rodríguez Zapatero, debate electoral en televisión, 3 de marzo de 2008)].

Con carácter general, el PSOE pretende que la percepción que del PP tienen los ciudadanos sea la de un partido escorado muy a la derecha, radical, poco fiable en todos los sentidos. La inclusión de la inmigración en la arena política por parte del PP, sobre todo en los términos en que lo hizo en las elecciones generales de 2008 y en los comicios autonómicos catalanes de 2010 (problemas de integración, saturación de los servicios públicos, derechos de los españoles frente a los del extranjero...), le ha brindado una gran oportunidad a los socialistas en este sentido. El PSOE ha equiparado con insistencia el discurso del Partido Popular con el de las formaciones europeas de extrema derecha, lo ha puesto bajo sospecha por su contenido racista y xenófobo... Los socialistas podrían incluso conseguir que el de la inmigración, al menos en parte, sea un tema que se convierta en posicional, que se mueva en el eje izquierda-derecha, para hacer así valer su ventaja de posicionamiento ideológico y anular su desventaja respecto del PP en capacidad de gestión percibida. [“Todo rezuma rechazo, menosprecio a los inmigrantes, desprecio a la igualdad, rechazo a la diferencia, todo incita a ensalzar el racismo y la xenofobia” (María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Gobierno; El País, 9 de febrero de 2008)].

El discurso de una mayoría de los políticos se acerca al tema de la inmigración sin concesiones a una visión positiva del fenómeno. El mensaje casi siempre es en negativo, pero con distintas fórmulas. Se puede hacer de una forma ostentosa y desvergonzada, resaltando abiertamente todos los conflictos que implica la llegada de extranjeros a nuestras sociedades; o de forma cínica y vergonzante, ocultando aspectos positivos porque se considera que no es rentable electoralmente (*). El discurso del Partido Popular participa en ocasiones de forma decidida de aquella primera vía. El del Partido Socialista se acerca más a la segunda opción.

(*) Hemos tomado del catedrático Javier de Lucas la clasificación de omisión ostentosa y desvergonzada/ cínica y vergonzante que él utiliza para referirse a la no inclusión del concepto de ciudadanía en el discurso político sobre inmigración, y la hemos adaptado al conjunto de la visión que del fenómeno inmigratorio ofrecen los políticos.

Los resultados de las encuestas, que reflejan que un porcentaje sustancial de los españoles percibe conflictos por la llegada de extranjeros, ofrecen al Partido Popular un listado de temas negativos que abordar en su discurso sobre inmigración. Y el PSOE, que afea los mensajes que sobre el extranjero vierten los populares, que los coloca en línea con los de la extrema derecha, que los tacha de racistas y xenófobos, no se atreve a no recurrir a un mensaje de dureza frente a la inmigración por temor a perder definitivamente a su porción de votantes que peor concepto tienen del fenómeno.

Control estricto de los flujos, seguridad, orden... son conceptos que el PSOE ha esgrimido para combatir, por igualación, el discurso duro del Partido Popular. [“En cuanto tenemos un inmigrante ilegal, lo repatriamos (...). Se ha conseguido una política de reducción muy importante de los que intentan llegar y una ampliación de los que conseguimos devolver” (José Luis Rodríguez Zapatero, El País, 7 de marzo de 2008)]. Como ya hemos apuntado anteriormente, las actitudes negativas en torno a la inmigración no son exclusiva de la derecha. Los barómetros del CIS muestran cómo un porcentaje más que significativo de los electores de centro y también de los de izquierda perciben la inmigración como uno de los problemas del país. Del mismo modo, estos sondeos revelan que entre los votantes del PSOE el porcentaje de los que ven la llegada de extranjeros como problema no es muy inferior al que presentan los votantes del Partido Popular. Por lo tanto, los socialistas se encuentran con que abordar la inmigración con un mensaje abiertamente positivo pone en peligro una porción sustancial de su electorado. En los siguientes capítulos abordaremos ampliamente el endurecimiento progresivo de las posiciones del PSOE.

El discurso socialista es doble. Para los votantes que no encuentran motivos para rechazar la inmigración, el discurso se articula en positivo, para contraponerlo a la denuncia apocalíptica del PP: “La respuesta al fenómeno de la inmigración no es

hacer un discurso de rechazo, sino ampliar las políticas sociales. Y eso es lo que estamos haciendo. Que las políticas del Gobierno central puedan llegar a la última escuela, al último centro de salud (...) Éste es el Gobierno que ha puesto encima de la mesa 800 millones en estos años para la integración de inmigrantes, para que haya medidas sociales específicas, concretas, conocimiento de idiomas, ayudas sociales... Y, por tanto para que los ciudadanos que viven donde hay un peso inmigratorio importante no se vean afectados. (José Luis Rodríguez Zapatero, El País, 7 de marzo de 2008). Y para los electores más reacios a la inmigración y que pueden aproximarse a las tesis del PP, el discurso socialista se torna negativo: "Si [los inmigrantes] incumplen la ley para venir a España de forma irregular, se les repatría o se les expulsa. Hemos multiplicado por dos las repatriaciones y las expulsiones" (María Teresa Fernández de la Vega, El País, 23 de febrero de 2008).

El Gobierno socialista necesita este doble lenguaje en su estrategia de atender a objetivos aparentemente contrapuestos, pero que en el fondo no lo son tanto. Critica ferozmente los mensajes del PP equiparándolos a los de la extrema derecha para reforzar su imagen de formación radical. Intenta así restar apoyos al PP entre su electorado más moderado y, al tiempo, mantener movilizados a los votantes socialistas que se colocan más a la izquierda. Pero el Ejecutivo socialista también se ha prestado a promover un discurso de mano dura, de control y seguridad, para no perder el respaldo de sus votantes, tanto de centro como de izquierda, que más reacios se muestran a la inmigración y que podrían verse tentados por el discurso de los populares.

Pero que el PSOE, en su intento de no perder terreno en este tema respecto del PP, no renuncie a la baza del discurso de mano dura tiene un gran coste. Que los dos partidos con opciones de gobernar repitan mensajes similares en este sentido hace que se asiente entre los ciudadanos la percepción de la inmigración como problema.

La búsqueda de réditos electorales fomenta esta suerte de xenofobia institucional (De Lucas, 2008).

PARTE II

**¿CÓMO UTILIZAN LOS PARTIDOS LA INMIGRACIÓN COMO
TEMA DE CONFRONTACIÓN POLÍTICA?**

Capítulo 3.

Las formas de la confrontación.

Discursos reactivos y proactivos

Los partidos políticos intentan de forma permanente que unos temas, los que más les convienen, se impongan en las agendas por encima de otros, los que más benefician al rival. Dentro y fuera de periodo electoral el juego político se dirime en dar prioridad a unos asuntos sobre otros (*priming*), pero moldeándolos y rellenándolos de un significado concreto para que su elección sea acorde con los objetivos de cada partido. Los temas se enmarcan, se les da un encuadre (*framing*), de ellos se seleccionan y realzan sólo algunos aspectos para definir la cuestión. Se pone el foco sólo sobre determinadas facetas de un asunto, sólo sobre las que permiten que una cuestión sea vista por el público de la forma más rentable para los intereses propios.

Los partidos no sólo quieren determinar sobre qué se piensa y se habla, sino también en qué sentido se hace. “Los marcos definen problemas (determinan su agenda causal, así como costos y beneficios), diagnostican las causas (identifican las fuerzas que crean el problema), realizan juicios morales (evalúan las agendas causales y sus efectos) y sugieren ‘remedios’ (ofrecen y justifican tratamientos para el problema) al tiempo que predicen sus efectos probables”, señalan García Beaudoux, D’Adamo y Slavinsky (2005).

El encuadre de un tema busca dar una visión particular del mundo. El enmarcado transmite unas ideas. Y, para ello, lo hace con un lenguaje concreto, el que más se ajusta a esas ideas, el que más encaja con esa visión del mundo (Lakoff, 2007 y 2008). Para que funcione el mensaje tiene que encajar con los marcos mediante los que piensa la gente, los marcos que definen su forma de entender el mundo. Existen dos grandes marcos, según George Lakoff, a través de los que los seres humanos

entienden el mundo y procesan lo que ocurre en él: el del padre estricto (visión conservadora) o del padre protector (visión progresista). Todas las personas tienen ambos modelos, ambos marcos, en su mente, utilizan los dos alternativamente, y se sienten más cómodas con uno u otro en según qué facetas de su vida (se puede ser conservador/padre estricto en temas de seguridad y de familia, y ser progresista/padre protector en políticas sociales y fiscales, por ejemplo).

El partido que consiga imponer los temas que más le benefician y los encuadres de estos temas que más se ajustan a sus intereses (esto es, activar el marco conservador o progresista, en función de las necesidades, entre una mayoría de ciudadanos) se encontrará en una posición estratégica muy ventajosa en relación a su contrincante. Los temas tienen dueño. Y los encuadres y el lenguaje utilizados para referirse a ellos, también.

3.1 Inmigración y *retóricas*

Los ciudadanos y los partidos que les representan pueden afrontar el fenómeno de la inmigración a través de dos visiones contrapuestas, de dos maneras antagónicas de afrontar el proceso de multiculturalidad que se abre en las sociedades de acogida. Dos reacciones que van desde el rechazo a la nueva realidad, que conlleva la defensa del pasado monocultural, hasta la asunción del fenómeno como un proceso irreversible que supone un reto que hay que gestionar, y que implica una apuesta por el futuro multicultural. Y estas dos visiones, estos dos marcos, se articulan, respectivamente, con dos tipos de discursos sobre la inmigración: discurso reactivo y discurso proactivo (Zapata-Barrero, 2008; Zapata-Barrero, González y Sánchez Montijano, 2008).

El profesor Ricard Zapata-Barrero analiza al detalle, en su imprescindible *Fundamentos de los discursos políticos en torno a la inmigración* (2008), todas las

derivadas de ambos tipos de discurso. Del mismo modo que Albert O. Hirschman analizó las *retóricas* discursivas con que los conservadores de los dos últimos siglos han combatido los sucesivos avances en derechos y libertades (*Retóricas de la intransigencia*, 1991), Zapata-Barrero identifica las muy diferentes retóricas que articulan, y alimentan, los discursos reactivo y proactivo.

La política del discurso reactivo se fundamenta sobre dos retóricas: la retórica del populismo (o *ciudadanismo*) y la retórica conservadora (o *tradicionalismo*). Los partidos políticos que esgrimen un discurso reactivo (la inmigración como problema, como amenaza) apelan constantemente a los conflictos de intereses entre la población inmigrante y la población autóctona. Como clave de esa retórica del populismo, estos partidos se presentan como defensores a ultranza de los ciudadanos, y sólo de los ciudadanos (la población autóctona), ante los posibles conflictos que pueden generarse por la llegada de extranjeros, y dan por sentado que los nativos tienen prioridad y sus derechos e intereses deben anteponerse. El ciudadanismo apela a los intereses del ciudadano, los defiende, pero lo hace a costa de crear confusión y conflicto entre los intereses de una parte de la sociedad (autóctonos) frente a otra (inmigrantes).

La retórica conservadora, por su parte, interpreta que la llegada de inmigrantes pone en peligro los valores culturales y de la tradición que vertebran la estructura social. La identidad nacional, la tradición, las costumbres (fundamentadas en los valores supuestamente uniformes de los autóctonos) se convierten en un bien que hay que preservar ante el proceso de multiculturalidad. El objetivo de la acción política pasa por la preservación y perpetuación de la cultura previa a la presencia de extranjeros residentes. Existe un profundo rechazo a los cambios y una alabanza constante al pasado monocultural. Todos los posibles conflictos culturales (velo, construcción de mezquitas...) se subrayan como potenciales peligros para la identidad nacional.

Las políticas del discurso proactivo, que identifican los conflictos que conlleva la multiculturalidad como una oportunidad y como un reto para toda la sociedad (ciudadanos e inmigrantes), se asientan igualmente en dos retóricas: la retórica de la igualdad y la retórica de la ciudadanía. La primera de ellas defiende el principio de igualdad de oportunidades para la gestión de las zonas de conflicto. Un principio de igualdad que ya “no sólo se aplica a las personas y a sus preferencias, a los valores y a sus diferentes concepciones del mundo dentro de un mismo marco cultural, sino al mismo hecho de que existen diferentes marcos culturales para interpretar las identidades de los otros”, sostiene Zapata-Barrero. Al contrario de la percepción que se ofrece desde el discurso reactivo, ninguna forma de identidad cultural prevalece sobre otras, ni unos intereses se privilegian respecto a otros.

El discurso proactivo subraya que debe haber pues una igualdad de tratamiento a las diferentes culturas presentes en una sociedad. La Administración debería actuar con imparcialidad en relación a las oportunidades que se conceden a las diferentes culturas o prácticas religiosas. Y, en paralelo, se debe garantizar la igualdad de oportunidades de todos, procurando que formar parte de una determinada cultura (o simplemente ser inmigrante) no suponga de principio una desventaja en relación con el resto de miembros de la sociedad.

La retórica de la ciudadanía, la otra pata del discurso proactivo, tiene un carácter más institucional. Por un lado, defiende que el inmigrante protagonice un proceso que lleve a la ciudadanía plena –incluido, claro, el derecho al voto-; que ponga fin a la diferente condición de ciudadano e inmigrante tanto en derechos, como en visibilidad social y política, y en el uso de canales de participación (*perspectiva de la inclusión*). Por otro, se apela a un cambio de enfoque de las políticas sobre inmigración: que las políticas no se dirijan únicamente al inmigrante, dejando al margen a la ciudadanía; y que los

discursos no tengan como destinatario sólo a los ciudadanos, colocando al inmigrante sólo como objeto pero no como receptor. Políticas y discursos deben dirigirse a ambas partes conjuntamente, promoviendo la interacción entre ellas (*perspectiva de la acomodación*).

3.2 Las retóricas de PP y PSOE

Los barómetros del CIS revelan que una parte sustancial de los ciudadanos (a momentos mayoritaria) percibe la inmigración como un problema. Un porcentaje apreciable de los españoles se muestra reacio a la llegada de extranjeros al país y rechaza sus consecuencias. Ante este escenario, los partidos políticos se encuentran en la disyuntiva de elegir entre dos opciones de actuación y de articulación de su discurso sobre la inmigración: o se utilizan estos datos demoscópicos para arremeter contra la inmigración y para justificar la puesta en práctica de políticas más restrictivas; o, por el contrario, se apuesta por intentar revertir estas actitudes negativas ante el extranjero y se pone en marcha una función pedagógica del discurso (Zapata-Barrero, 2008). Interpretación reactiva o interpretación proactiva. En principio, hay que elegir.

El Partido Popular se ha decantado por la primera opción casi sin tapujos; con intermitencias en el tiempo (no es sostenible para un partido mayoritario hacer de la inmigración una bandera permanente, al menos no con una coyuntura de crisis que le permite centrarse en los asuntos económicos para atacar a su rival), pero sin concesiones a una reconducción de su duro discurso sobre el fenómeno. El del PP es, con carácter general, un discurso reactivo.

Los dirigentes populares han incluido en su argumentario de los últimos años mensajes que se acomodan perfectamente en las retóricas del *ciudadanismo* y el *tradicionalismo*. Desde el PP se ha alertado de que la llegada *masiva* de inmigrantes

supone un riesgo para los derechos de los españoles: “No puede entrar todo el mundo que quiera sin control porque todos no cabemos” (Mariano Rajoy, presidente del PP; El País, 28 de febrero de 2008); “Hay muchas personas que se ven perjudicadas, y los españoles a la hora de pedir una beca, de una plaza pública, se pueden ver perjudicados” (Mariano Rajoy, El País, 4 de marzo de 2008). Y, en paralelo, el Partido Popular también ha hecho un llamamiento, en forma de propuesta electoral tanto en las generales de 2008 como en las autonómicas catalanas de 2010, a que los inmigrantes se comprometan por escrito a respetar las costumbres españolas: “Los inmigrantes deben comprometerse a cumplir las leyes, aprender la lengua y a respetar nuestras costumbres” (Mariano Rajoy, presidente del PP; El País, 7 de febrero de 2008); “Quien quiera trabajar en Cataluña deberá comprometerse a cumplir las leyes de nuestro país y a respetar nuestros valores y costumbres” (Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del Partido Popular de Cataluña; El País, 10 de noviembre de 2010).

El Partido Socialista, por su parte, ha enseñado sobre este asunto una doble cara. Ha ejercido generalmente la labor pedagógica que favorece la socialización del fenómeno migratorio. Ha defendido los derechos de los extranjeros, ha subrayado los positivos efectos (singularmente económicos) de su presencia en España... Una respuesta de carácter abiertamente proactivo que permite combatir la percepción negativa que existe sobre el extranjero. Una respuesta que, además, al PSOE le sirve para contraponer su discurso al del PP, para presentar a este último como una formación radicalizada (uno de sus grandes objetivos estratégicos, ya lo hemos visto).

Sin embargo, en paralelo, los socialistas también han cedido al peso de las encuestas y han endurecido su discurso y sus políticas de inmigración para no ceder terreno en esta materia ante el contrincante popular. Con diferente intensidad, y muy probablemente como mera respuesta de defensa ante el avance del PP en esta materia (es de las pocas en que los populares se han colocado como partido preferido

para gestionarla), pero el Partido Socialista también se ha servido de las encuestas para proponer políticas más restrictivas y para afilar su discurso, especialmente en su segunda legislatura en el poder.

Los socialistas han tratado de ofrecer una imagen de firmeza con la inmigración tanto en la gestión de los flujos en plena crisis económica como en materia de convivencia con el objetivo de no perder (o de recuperar) a la parte de sus votantes que pueden sentirse atraídos por el discurso del PP en esta materia, para que no cambien el sentido de su voto o para que no caigan en la abstención.

Tras las agitadas elecciones de 2008, en que el PP convirtió la inmigración en uno de los grandes temas de campaña, la llegada de Celestino Corbacho como ministro de Trabajo al nuevo Gobierno socialista conllevó un renovado discurso que se acercaba en algunos aspectos al esgrimido por los populares. Del “las normas no las puede imponer el último que se ha empadronado” (El Mundo, 28 de abril de 2008) al “que los inmigrantes tachen España de su agenda inmediata” (El País, 12 de marzo de 2010), el discurso del Ejecutivo socialista –por boca del ministro Corbacho- en el segundo mandato de Rodríguez Zapatero ha querido mostrar una imagen de mayor firmeza ante el fenómeno.

El PSOE, aunque tradicionalmente se siente más identificado con el discurso proactivo en torno a la inmigración, también hace concesiones hacia el discurso reactivo, valiéndose de uno u otro para atender a sus particulares necesidades estratégicas de comunicación: por un lado, de autoposicionamiento y, por otro, de creación de la imagen de su rival.

Capítulo 4.

La regularización ‘masiva’ de 2005: la inmigración como tema de confrontación entre partidos

Desde los primeros años noventa y sobre todo desde mediados de esa última década del siglo, las llegadas de inmigrantes a España empezaron a acelerarse, hasta hacerse imparablemente crecientes. Hasta entonces, los flujos de inmigrantes y la gestión de sus permisos, derechos y obligaciones estaban regulados por la Ley de Extranjería aprobada en la primera legislatura de Felipe González como presidente del Gobierno, en 1985. Una ley que, por el momento en que fue diseñada, se había quedado obsoleta para una nueva realidad, la que colocaba a España en su nueva condición de país de destino de la emigración. De país de emigración a país de acogida en apenas tres décadas.

Fue el primer Gobierno de José María Aznar (1996-2000), muy al final de la legislatura, el que se propuso la aprobación de una nueva Ley de Extranjería que modificara la vigente de 1985. En esa primera legislatura con Aznar en el poder, el Partido Popular gobernaba con el respaldo de una mayoría simple en las Cortes, y tenía que apoyarse en otros grupos parlamentarios (primero en CiU y PNV, y luego en los nacionalistas catalanes y Coalición Canaria) para sacar adelante sus iniciativas legislativas. Durante 1999, todas las fuerzas parlamentarias negociaron la que pretendía ser la nueva legislación sobre inmigración. El consenso parecía viable y se daba por hecho que habría acuerdo antes de las elecciones generales previstas para marzo de 2000.

Sin embargo, mientras el grupo popular en el Congreso, comandado en esta materia por el diputado Diego Jordano, y algunos de los departamentos ministeriales implicados (singularmente el Ministerio de Trabajo, entonces encabezado por Manuel Pimentel, que poco después dimitiría) parecían respaldar el texto que se ultimaba en

las negociaciones con el resto de partidos, el propio presidente José María Aznar y el entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, empezaron a endurecer sus posiciones sobre el fenómeno inmigratorio y a torpedear los avances hacia el acuerdo en las Cortes, incluyendo cada vez nuevas exigencias en el articulado de la futura ley para hacerla más restrictiva.

Algunos autores que han estudiado en profundidad este periodo político vinculan este giro hacia el alarmismo del discurso del PP con el convencimiento por parte de José María Aznar y algunos de los estrategas del partido de que enarbolar la bandera de *nos invaden* podría ser electoralmente rentable (Rius Sant, 2007). Nos encontramos en 1999, año en que el Grupo Independiente Liberal (GIL), partido creado en torno a la figura del empresario Jesús Gil y Gil, irrumpió con éxito en las elecciones de Ceuta y Melilla con un discurso antiinmigración; y año también en que el partido de extrema derecha de Jörg Haider entra en el Gobierno austriaco tras convertirse en la segunda fuerza más votada con una campaña centrada en mensajes abiertamente racistas y xenófobos.

Tras meses de negociaciones y con un texto para la nueva Ley de Extranjería pactado por todos los grupos, el Partido Popular se desmarcó y empezó a incluir enmiendas durante la tramitación parlamentaria que lapidaban todos los avances consensuados. Las nuevas exigencias del PP negaban la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles –salvo las urgencias- y no reconocían los derechos de reunión, manifestación o sindicación de los extranjeros en situación irregular, entre otros pasos atrás. El PP necesitaba el apoyo de CiU y de Coalición Canaria para aprobar las nuevas enmiendas, e inicialmente ambas formaciones se mostraron dispuestas a hacerlo. Pero en una rocambolesca última votación parlamentaria, ya con la legislatura en sus últimos compases, Coalición Canaria se descolgó del acuerdo con el PP (después de quedar roto el gobierno de coalición que ambos partidos tenían en la comunidad de

Canarias) y decide no apoyar las enmiendas restrictivas. CiU, ante la constatación de que no hay posibilidad de que las enmiendas del PP sean aprobadas por falta de apoyos suficientes, dio marcha atrás y decidió votar a favor del texto pactado anteriormente por todas las fuerzas parlamentarias. El resultado fue que el Gobierno del PP, en minoría parlamentaria, vio como el resto de partidos representados en el Congreso de los Diputados se unieron en la votación y le impusieron una nueva Ley de Extranjería, la Ley Orgánica 4/2000.

Una ley, por lo demás, que no tardó en ser modificada. De las elecciones generales de marzo de 2000 salió un Ejecutivo de nuevo encabezado por José María Aznar, pero en esta ocasión con el respaldo de una mayoría absoluta del PP en las Cortes. El Partido Popular aprobará antes de que finalice el año una nueva Ley de Extranjería, la LO 8/2000, más restrictiva, acorde con las enmiendas que quiso imponer en el anterior texto.

Pese a lo agitado de las tramitaciones parlamentarias de ambas leyes, pese a los debates de alta tensión que se produjeron, puede entenderse que todavía entonces la inmigración no formaba parte del listado de temas de la cruda confrontación partidista (Fundación Alternativas, 2007). Los diferentes partidos, y singularmente los mayoritarios PSOE y PP, seguían entonces respetando en sustancia el tradicional convencimiento de que la inmigración debía quedar al margen de la lucha partidaria y de que la gestión del fenómeno (fundamentalmente el control de las fronteras) no era susceptible de entrar entre las materias de ataque contra el Gobierno.

Tanto es así que la nueva Ley de Extranjería que se aprobó en 2003, la tercera con el PP en el Gobierno (Ley Orgánica 14/2003), contó con el respaldo parlamentario también del Partido Socialista. En plena vorágine de confrontación entre PP y PSOE a cuenta del apoyo del Gobierno de Aznar a la invasión de Irak (recuerden las

multitudinarias manifestaciones del *No a la guerra* con el entonces líder de la oposición José Luis Rodríguez Zapatero en la pancarta de cabecera) y de la crisis medioambiental (y política) tras el hundimiento del buque petrolero *Prestige* frente a las costas gallegas, ambos partidos sumaron sus votos para sacar adelante una nueva Ley de Extranjería. Y es que aún parecía existir el consenso básico de que la inmigración era uno de los temas de Estado que se abordan públicamente por los partidos con pies de plomo (o casi).

Las elecciones generales del 14 de marzo de 2004 se saldaron con un vuelco electoral de última hora que dio la victoria al Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero tres días después de los atentados islamistas contra varios trenes en Madrid. El Partido Popular, que estrenaba a Mariano Rajoy como candidato, pasaba directamente de la mayoría absoluta a la oposición. Desde los albores de la legislatura el Partido Popular puso en práctica una estrategia de crispación permanente y deliberada que mantuvo con contumacia. Desde un primer momento los populares pusieron en duda la legitimidad misma del Ejecutivo socialista (que habría salido de unas elecciones que cambiaron su resultado final por su celebración inmediatamente después de los atentados del 11-M, diseñados y ejecutados expresamente con ese objetivo, según la teoría diseñada por varios medios de comunicación y que fue avalada por parte de los dirigentes populares) y toda la legislatura buscaron crear la sensación de un permanente estado de emergencia nacional. Todos los temas fueron susceptibles de convertirse en material de ataque contra el Gobierno, priorizando los temas transversales, más efectivos para una estrategia de crispación: el terrorismo, la política territorial.... Y la inmigración. La política de extranjería se convertía en uno de los temas sobre los que se dirimiría la lucha partidista.

El nuevo Ejecutivo socialista hizo ya una declaración de intenciones desde el mismo momento en que, en la organización de su primer gabinete, traslada el grueso de las

competencias de inmigración desde el Ministerio del Interior –encargado de esta materia durante los gobiernos del PP- al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se encargarán del control de las fronteras y de la lucha contra las mafias que se dedican al tráfico de personas, pero la nueva legislación sobre migraciones tendrá su origen en el departamento que dirige los asuntos laborales. Con el PSOE recién llegado a Moncloa, la inmigración deja de ser para la Administración un *problema de seguridad* para considerarse un asunto con meras implicaciones económicas, laborales y sociales.

Transcurridos apenas cinco meses desde su llegada al poder, el Gobierno socialista confirma su intención de promover un nuevo proceso de regularización de inmigrantes, el duodécimo en la historia de España (el primero se produjo aún durante la dictadura franquista, en 1969). Durante los gobiernos de José María Aznar se realizaron hasta seis procesos extraordinarios de regularización de extranjeros (Rius Sant, 2007). Algunos de estos procesos se ejecutaron con unos requisitos relativamente laxos y otros vinieron impulsados por circunstancias coyunturales (como los encierros masivos de inmigrantes en varias ciudades de España en 2001 o el proceso especial para ciudadanos ecuatorianos, también en 2001), lo que no impidió que el anuncio de una nueva regularización llevara al PP a lanzar una campaña de ataques descarnados contra el nuevo Ejecutivo por su irresponsabilidad y por las apocalípticas consecuencias que acarrearía la iniciativa.

Tras acordar los términos de la nueva política de inmigración con parte de las fuerzas con representación parlamentaria, con sindicatos y con la patronal CEOE, el Consejo de Ministros aprobó el 29 de diciembre de 2004 el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, modificada por la 14/2003. En el marco de la nueva política se incluirá un proceso de regularización extraordinario de extranjeros, regido por la orden de Presidencia 140/2005, de 2 de febrero. El proceso, que se extendió desde el 7 de

febrero hasta el 7 de mayo de 2005, exigía como requisitos a los extranjeros para regularizar su situación en España estar empadronado en el país antes del 8 de agosto de 2004 (seis meses antes de su inicio), contar con un contrato laboral firmado con una duración de al menos seis meses, y adjuntar un certificado de penales del país de origen. El permiso lo solicitaba directamente el empresario empleador, quien, una vez concedido, debía dar de alta al trabajador en la Seguridad Social y sólo entonces entraba en vigor la autorización de residencia.

En esos tres meses, periódicos e informativos televisivos se llenaron de imágenes de grandes colas a las puertas de las oficinas que tramitaban los permisos y de los consulados de los países de origen que expedían el certificado de penales. En ese periodo hubo algún remiendo normativo para facilitar el proceso (singularmente el empadronamiento por omisión). Entre el 7 de febrero y el 7 de mayo se presentaron casi 692.000 solicitudes de regularización, de las que algo más de 578.000 se estimaron positivamente y para las que se expidieron los permisos de residencia correspondientes.

El choque entre los dos grandes partidos se produjo ya en torno a la denominación otorgada al proceso. Para el Partido Popular se trataba de una regularización, en concreto de una regularización *masiva*, una regularización *irresponsable*, *incontrolada*, *estrafalaria*... El Partido Socialista trató de bautizar el proceso como una normalización de trabajadores, dado que simplemente se legalizaba la situación de extranjeros que ya estaban trabajando en España. “Lo que se propone en el reglamento es una normalización, no una regularización extraordinaria. Las regularizaciones extraordinarias son incondicionales para todo el mundo, y este proceso que se propone ni es incondicional ni es para todo el mundo” (Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración; El País, 28 de noviembre de 2004).

Los socialistas trataban de eludir el término regularización a toda costa, toda vez que antes de llegar a Moncloa y en sus primeros meses en el poder insistieron en que no habría más regularizaciones de extranjeros. Una constante en la política española: desde los noventa, el partido en el poder, fuera cual fuera, antes de cada regularización siempre ha garantizado que sería la última.

La batalla nominal la venció el PP. En el acerbo popular la de 2005 fue una *regularización masiva*; de hecho, *la* regularización masiva. El término *normalización* que trató de imponer el PSOE ya entonces tuvo poco predicamento. Y hoy casi nadie se acuerda de que hubo un intento de que aquel proceso fuera simplemente *normalizador*.

4.1 Partido Popular: regularización *masiva* y efecto *llamada*

El Partido Popular pone en práctica su estrategia de crispación inmediatamente después de perder las elecciones de 2004 y lo hace con al menos dos objetivos claros: con carácter inmediato, evitar la desafección de su electorado tras el varapalo electoral; y a medio plazo, conseguir desmovilizar a parte de los electores que habían aupado al PSOE al poder. Y en esta estrategia el de la inmigración es un tema que encaja a la perfección: como hemos visto, ya en 2004 la inmigración forma parte de los principales problemas del país según los barómetros del CIS y genera actitudes negativas en todo el espectro político (de la derecha a la izquierda) y en todo el arco electoral (entre los votantes del PP, pero también entre los del PSOE).

El PP pone en marcha una estrategia de ataque con todo al nuevo Gobierno para generar una especie de estado de emergencia permanente. El anuncio del recién estrenado Ejecutivo de que el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería recogería un proceso de regularización extraordinario pone la inmigración en el listado de temas

con que criticar con dureza al Gobierno. Tanto con la inmigración como con otras temáticas centrales durante la legislatura (singularmente el fallido proceso de paz con ETA y la negociación del nuevo *Estatut* de Cataluña), el Partido Popular tratará de crear la imagen de un Ejecutivo incompetente, irresponsable, impotente ante los problemas del país, que desarrolla políticas radicales con oscuros fines, que con su acción de gobierno lleva al país hacia la catástrofe y que pone en peligro el sistema democrático heredado de la transición.

Antes, durante y después del proceso de regularización, el Partido Popular apostó por la dramatización y la hipérbole para definir la política de inmigración del Ejecutivo socialista. Las iniciativas emprendidas por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en materia de inmigración eran un “disparate” y un “espectáculo estrafalario” (Mariano Rajoy, presidente del PP; *El País*, 1 de noviembre de 2004); fruto de una “política errática” (Eduardo Zaplana, portavoz del PP en Congreso; *El País*, 24 de agosto de 2004), de una política “descontrolada y desorganizada” (Ángel Acebes, secretario general del PP; *El Mundo*, 1 de febrero de 2005), “falsa, errónea y equivocada” (Ángel Acebes, *El País*, 1 de febrero de 2005); y demostraban su “incompetencia” y su “falta de preparación para resolver los problemas importantes que tiene España” (Mariano Rajoy, *El País*, 23 de septiembre de 2004).

La estrategia del PP se centró fundamentalmente en alertar de las graves consecuencias que generaría el proceso de normalización emprendido por el Gobierno socialista. La principal: una avalancha de nuevos inmigrantes “ilegales” en busca de papeles por la *facilidad* de obtenerlos en España. Para el Partido Popular el escenario creado era claro: el Ejecutivo buscaba una “regularización masiva” de extranjeros, lo que generaba un “efecto llamada” que atraería a otros muchos inmigrantes irregulares con la esperanza de, por la laxitud de la legislación española, obtener rápidamente su permiso de residencia. La regularización escondía un “papeles para todos, pero sin

decirlo” (Mariano Rajoy, El Mundo, 24 de agosto de 2004), era un “papeles para todos encubierto” (María Ángeles Muñoz, portavoz del PP en el Congreso sobre Inmigración; El País, 23 de agosto de 2004), una política de “irregularización masiva” y de “puertas abiertas” (Ángel Acebes, El País, 10 de mayo de 2005).

El escenario que se avecinaba, según el Partido Popular, implicaba una “enorme avalancha” de inmigrantes irregulares en España “por tierra, mar y aire” a través del “coladero” en que se habían convertido las fronteras (Ángel Acebes, El Mundo, 1 de febrero de 2005). “El proceso de regularización es una invitación a la ilegalidad” y hace que “las mafias que trafican con inmigrantes apunten a España como el país de la UE en el que es más fácil obtener papeles”; “Habrá un aumento de la inmigración irregular para lograr una fácil regularización”. (Mariano Rajoy, 15 de septiembre de 2004). “Se ha producido un efecto llamada descomunal. Legalicen a los que legalicen habrá en España más de un millón de inmigrantes irregulares”. (Mariano Rajoy, El Mundo, 9 de mayo de 2005). “El proceso de regularización masiva que se hizo en España a lo largo del último año ha sido un enorme disparate, que ha producido, como no podía ser de otra manera, un efecto llamada. Tengo la firme convicción de que hoy hay más personas en España en situación irregular que antes” (Mariano Rajoy, El Mundo, 3 de octubre de 2005).

La imagen que buscaba generar en la ciudadanía el Partido Popular era la de un Gobierno superado por las circunstancias, incompetente y, por tanto, poco fiable: “Desde el PP tenemos que decir que la política de inmigración, si algo no puede ser, es descontrolada y desorganizada. Si no se toma ninguna medida, si muchas fronteras son un auténtico coladero, si se hace un efecto llamada, lo que va a acabar pasando es que los inmigrantes que están en toda Europa van a acabar llegando” (Ángel Acebes, El Mundo, 1 de febrero de 2005). “El Gobierno hará de la inmigración un problema irresoluble. Es el resultado de los mensajes contradictorios, los errores y las

equivocaciones del Gobierno de Zapatero” (Ángel Acebes, El País, 9 de noviembre de 2004). “Zapatero pasará a la historia por convertir la inmigración en el primer problema de los españoles, ya que una cosa es practicar la demagogia sobre este tema desde la oposición con el ‘papeles para todos’, pero el problema es cuando estas prácticas se hacen desde el Gobierno” (Javier Arenas, presidente del PP de Andalucía; El Mundo, 12 junio de 2005)

Los dirigentes populares quisieron ver en la posterior evolución de llegadas de extranjeros de forma irregular una confirmación de sus advertencias sobre las consecuencias del proceso de regularización. El mensaje era que su aparente alarmismo estaba justificado, según demostraban los intentos de entrada al país de un gran número de inmigrantes. En verano y otoño de 2005, varios centenares de inmigrantes participaron en saltos masivos de la valla fronteriza de Melilla; e incluso hubo víctimas mortales entre los irregulares por los disparos de la Policía marroquí. “El verano ha demostrado que la regularización de inmigrantes ha resultado un fracaso, como ya advertimos” (Ángel Acebes, El Mundo, 1 de septiembre de 2005). “El Gobierno, como siempre, actúa cuando los problemas ya se han producido. Todos sabíamos lo que estaba ocurriendo cerca de Ceuta y Melilla, porque todo el mundo ve los campamentos de personas que están allí (...) y, bueno, la gente aprovecha su oportunidad. Lo que ha producido todo esto (...) es la imprevisión del Gobierno” (Mariano Rajoy, El Mundo, 3 de octubre de 2005).

Durante el verano de 2006, las costas de Canarias recibieron cientos de embarcaciones cargadas con miles de inmigrantes. Se batieron los récords de llegadas de inmigrantes irregulares por mar y el fenómeno llegó a conocerse como la *crisis de los cayucos*. Para el PP, quedaba confirmado, “hubo un efecto llamada y una entrada de inmigrantes anárquica, incontrolada e insostenible” (Mariano Rajoy, El Mundo 31 de mayo de 2006). “Llegan de forma masiva pateras o cayucos (...) Salen

[los dirigentes socialistas] a hacer declaraciones. Son los del ‘vamos a hacer’, pero lo que hay que hacer es hacer” (Mariano Rajoy, El Mundo, 15 de mayo de 2006). “Ustedes trasladaron el mensaje de que España era un coladero y habría papeles para todos, y ahora reconducir la situación es complicado” (Ana Torment, diputada del PP; El Mundo, 1 de septiembre de 2006). “Llevar dos años en el Gobierno y el problema se ha agravado en ese tiempo (...) Tome medidas ya, y no a medio plazo” (Soraya Sáenz de Santamaría, secretaria de Política Territorial del PP; El Mundo, 7 de agosto de 2006).

4.2 Partido Popular: inmigración y servicios públicos

El Partido Popular introdujo en su discurso, con motivo del proceso de regularización de 2005, la advertencia sobre otra gran consecuencia negativa emparejada a la llegada a España de extranjeros. Adelantando el discurso abiertamente que luego esgrimió en la campaña de las elecciones generales de 2008, los dirigentes del PP vincularon ya entonces la llegada de extranjeros con eventuales problemas para garantizar la prestación de determinados servicios públicos. “De lo que pase en el futuro, de la marginalidad que se pueda producir, de las dificultades que se puedan generar a la hora de prestar servicios públicos, el único responsable es el irresponsable del talante, de la frase vacía, de la sonrisa tonta y de la vaciedad en el uso de las palabras” (Mariano Rajoy, El Mundo, 9 de mayo de 2005).

Entre las invectivas contra la normalización de extranjeros previas al proceso de regularización figuraron las dudas sobre la viabilidad de los servicios públicos tras la regularización y sobre eventuales problemas presupuestarios de las distintas Administraciones para financiarlos. “Los recursos para ofrecer a los propios inmigrantes son limitados. Trabajo, educación, sanidad... Se va a crear un conflicto tremendo por las posibilidades de asistencia de las comunidades autónomas. Se

multiplicará en el futuro con problemas de convivencia, de seguridad y de marginalidad” (Ángel Acebes, El País, 1 de febrero de 2005). “Hay que conocer el nivel de resistencia de nuestros recursos. Acometer este proceso [de regularización] sin estudios previos de impacto económico puede tener gravísimas consecuencias” (Eduardo Zaplana, El Mundo, 23 de noviembre de 2004).

“Estas administraciones [comunidades autónomas y ayuntamientos], especialmente las de mayor afluencia migratoria, están padeciendo un asfixia económica al dedicar a esas prestaciones más recursos de los previstos y disponibles” (Dionisio García-Carnero, senador del PP; El Mundo, 14 de marzo de 2005). “El desproporcionado incremento registrado en el número de tarjetas sanitarias [de inmigrantes] está sometiendo a una presión brutal al sistema de salud de las comunidades, mientras el Gobierno mira para otro lado. ¿Acaso piensa el Estado asignar más recursos a Madrid, para compensar el aumento de su gasto en sanidad y educación?” (Ana Pastor, secretaria de Política Social del PP; El Mundo, 29 de abril de 2005).

Sin embargo, y pese a las advertencias recogidas en el discurso del Partido Popular, en España se reconoce desde el año 2000 el derecho de todas las personas, con independencia de que se encuentren en el país en situación irregular, a recibir asistencia sanitaria y escolarización. El empadronamiento abre la puerta desde entonces a estas prestaciones públicas sin restricciones, ya que en España deben empadronarse todos los residentes, tengan permiso de residencia o se encuentren sin papeles. De este modo, la regularización de inmigrantes que ya estaban presentes en España no suponía un esfuerzo presupuestario adicional para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, dado que ya estaban prestando estos servicios a esos inmigrantes con anterioridad. Muy al contrario, la obtención de permiso de residencia y trabajo hacía posible que estos extranjeros hasta entonces en situación

irregular empezaran a cotizar a la Seguridad Social, haciendo así aportaciones tributarias para la financiación de esos servicios.

4.3 PSOE: 'pedagogía' y discurso proactivo

El Partido Popular ha encontrado en la inmigración un tema con el que sacar rédito partidista por partida doble. Por un lado, sus duras críticas y advertencias alarmistas le permiten crear la imagen de un Gobierno socialista incompetente e impotente ante un tema de tal trascendencia en la España actual. Por otro, el uso de las retóricas populista y tradicionalista del discurso típicamente reactivo le dan la posibilidad de sacar partido de las actitudes negativas ante la inmigración ya existentes tanto entre los votantes de derechas como entre los de izquierdas.

Con carácter general, la gran diferencia entre los discursos del PP y el PSOE en materia de inmigración se encuentra en que los socialistas, atendiendo a su ideario progresista, hacen verdaderas concesiones al discurso proactivo. Tanto con motivo del proceso de regularización de extranjeros de 2005, como posteriormente en la precampaña y la campaña de las elecciones generales de 2008, el Partido Socialista deslizó mensajes abiertamente proactivos y trató de desarrollar una función pedagógica y socializadora acerca de la presencia de extranjeros en la sociedad española y la nueva realidad multicultural que ésta conllevaba.

Un Rodríguez Zapatero recién llegado a Moncloa subrayaba que "la inmigración es una oportunidad para los países de acogida que un Gobierno eficaz y progresista debe transformar en crecimiento y progreso" (El País, 10 de junio de 2004). Y es que "uno de los desafíos más acuciantes y profundos que tiene planteada la convivencia social en España es el derivado de la inmigración, que desde hace años toma a España

como destino", por lo que hay que poner en marcha una "política de cohesión social evitando los riesgos de fractura" (José Luis Rodríguez Zapatero, 28 de junio de 2004).

La decisión de traspasar del Ministerio de Interior al de Trabajo las competencias en esta materia era "el primer gesto en política de inmigración que hace el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que es importantísimo para desvincular la inmigración del aspecto policial y represivo. En el Ministerio del Interior seguirá habiendo competencias vinculadas al control, pero habrá una manera de afrontar la inmigración diferente. La política anterior del Gobierno trabajó en el control y en demasiadas reformas legislativas, pero no se apostó por la integración (Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración; El Mundo, 7 de junio de 2004).

El discurso de la primera legislatura de Gobierno socialista incluía mensajes en positivo acerca del fenómeno migratorio, lo que le servía para intentar mantener claras las diferencias de *talante* en relación con el PP. Mientras que el anterior Ejecutivo popular había empezado a endurecer su discurso para justificar una política que intentaba ser cada vez más restrictiva, el nuevo Gobierno socialista trataba inicialmente de respaldar y promover políticas integradoras. "El Estado no ha trabajado de forma suficiente para promoverla [la integración de los inmigrantes] y, en general, la dotación de recursos es insuficiente, además de existir una reconocida disparidad de criterios entre los distintos ámbitos competenciales". Había que trabajar pues para que los inmigrantes "dispongan de cauces singularizados o incluso privilegiados. El objetivo es que las personas inmigradas tengan acceso a las políticas públicas a través de los cauces ordinarios de la Administración". (Consuelo Rumí, El País, 30 de junio de 2004).

Como hemos visto, en el argumentario del PP tenía un peso fundamental el "efecto llamada", esto es, las regularizaciones extraordinarias eran uno de los causantes de la

llegada de inmigrantes a España. Desde el PSOE se contraponía que los cambios normativos no explicaban los flujos migratorios hacia España: “Los inmigrantes no leen el BOE”, (Jesús Caldera, ministro de Trabajo; El País, 5 de octubre de 2005). Y, en todo caso, replicaban el efecto llamada del PP con un *efecto salida*: la llegada de inmigrantes se justificaba en que en “África se está viviendo una auténtica rebelión pacífica contra la pobreza” (Alfredo Pérez Rubalcaba, portavoz del PSOE en el Congreso; El Mundo, 1 de septiembre de 2006). “El único efecto llamada está en la miseria y el hambre en África. Resulta inaceptable la hipocresía con que la derecha pretende enturbiar la comprensión de este fenómeno (Juan Fernando López Aguilar, ministro de Justicia; El Mundo, 12 de septiembre de 2006).

Los socialistas consiguieron a momentos vincular la inmigración directamente con los valores progresistas, contraponiendo el mensaje duro del PP con un discurso emocional que engarza con la tradición humanista y de justicia social del progresismo. La política de inmigración “hay que hacerla con la cabeza, pero también con el corazón”, “desde la legalidad, sí, pero también desde los derechos humanos” (José Luis Rodríguez Zapatero, El Mundo, 8 de octubre de 2006). Tras el proceso de regularización, los inmigrantes “ahora tienen derechos y trabajos dignos, como querían muchos empresarios y se merecían” (José Luis Rodríguez Zapatero, El Mundo 27 de agosto de 2005).

El presidente Rodríguez Zapatero dijo en varias ocasiones en su primera legislatura en el Gobierno que sobre la inmigración había que hacer “pedagogía”. Y en ocasiones, se esforzaba por hacerla: “Un país que ya sabe lo que es el miedo al otro, que ha sufrido el aislacionismo, que ha sufrido en sus carnes lo que es ir a emigrar, un país que tiene eso en su piel, tiene que dar ejemplo de comportamiento ante los que vienen de fuera a buscar su futuro”. “Este cambio que está viniendo a este país lo que exige ante todo, como siempre que hay que cohesionar, es más política social, más gasto social en

educación, en sanidad y en vivienda, para que haya una buena integración y una buena convivencia, y nadie sienta que pierde con los que vienen aquí a trabajar”. “Quieren ver a los inmigrantes cuidando a nuestros ancianos, quieren verlos trabajar en las obras o servirnos en un restaurante, pero luego no quieren verlos en las calles, como personas. Nosotros nunca estaremos cerca de gente que piensa así”. (José Luis Rodríguez Zapatero, El Mundo, 8 de octubre de 2006).

4.4 PSOE: del racismo y la derecha

La utilización de este discurso proactivo servía entonces al Partido Socialista para marcar distancias respecto a las posiciones claramente reactivas del PP. Esa pedagogía que ejercen algunos dirigentes socialistas, aparte de beneficiosa en sí misma por concienciar en positivo a la ciudadanía española acerca de la nueva realidad, les permite subrayar más o menos implícitamente el contraste con las posiciones de los populares, el contraste entre valores progresistas y los conservadores. Pero el socialismo también busca hacerlo de manera claramente explícita.

El PSOE trató de que los electores percibieran al Partido Popular como una formación escorada a la derecha, en un intento de alejar a su rival de las posiciones más templadas o directamente progresistas de una mayoría de los españoles. Si bien el discurso duro le permitía al PP sintonizar con la parte del electorado socialista que se muestra reacio a la inmigración (buscando fundamentalmente su abstención, no tanto la captación de su voto), ese mismo discurso duro del PP le daba la posibilidad al Partido Socialista de afear la radicalidad irresponsable de los populares y sus coqueteos con mensajes xenófobos.

“La demagogia de hoy es el mejor caldo de cultivo para la intolerancia de mañana y de siempre” (María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Gobierno; El País, 10 de febrero de 2005). “El PP se está deslizando por la demagogia sin límite y por la barbarie propia de un radicalismo que ha dado como fruto la situación que este Gobierno intenta ordenar” (Consuelo Rumí, El Mundo, 8 de febrero de 2005). Las declaraciones del PP “constituyen un discurso grave y peligroso, que raya en la xenofobia” (Diego López Garrido, secretario general del Grupo Socialista en el Congreso; El Mundo, 25 de agosto de 2004). “Es una irresponsabilidad y una muestra de una ideología que linda peligrosamente con actitudes racistas y xenófobas” (Diego López Garrido, El Mundo, 8 de febrero de 2005). “Hacer un paralelismo entre delincuencia e inmigración, como ha hecho Acebes, es una llamada a la xenofobia. Esas opiniones son falsas y quieren generar conflictos” (Jesús Caldera, El Mundo, 5 de junio de 2006).

Los socialistas denunciaban que el PP sólo trataba de sacar provecho electoral con su discurso antiinmigración, para lo que no dudaba en mentir y manipular. “El PP utiliza una inmensa falacia para confundir y obstaculizar. El PP tergiversa y manipula de forma totalmente irresponsable” (Consuelo Rumí, El País, 1 de febrero de 2005). “La única incertidumbre que se ha producido es la que ustedes han provocado con sus declaraciones, manipulando la información que daba el Gobierno” (Consuelo Rumí, El País, 28 de noviembre de 2004). “Cuando más escucho al PP, más preocupación siento, porque veo que siguen en esa posición de sacar rentabilidad política de un tema tan sensible y tan delicado como es la inmigración” (Consuelo Rumí, El País, 28 de noviembre de 2004). “No puede haber fariseísmo, ni hipocresía, ni demagogia. No lo toleraremos, ni como responsables políticos, ni como socialistas” (José Luis Rodríguez Zapatero, El Mundo, 8 de octubre de 2006). “Vamos a actuar desde la legalidad, y desde la defensa de los valores, aunque algunos creen que pueden alcanzar más votos con un discurso antiinmigración. Yo os digo que quien piense eso

conoce muy poco a este país”. (José Luis Rodríguez Zapatero, El Mundo, 8 de octubre de 2006).

En paralelo, el PSOE trataba de vincular las críticas del Partido Popular contra el proceso de regularización con un eventual intento de mantener a los extranjeros en una situación de irregularidad por motivos espurios. “La ilegalidad de los inmigrantes es una política deliberada del PP para que no tengan derechos” (Diego López Garrido, El Mundo, 25 de agosto de 2004). “Parece que prefieren la irregularidad de los inmigrantes y su explotación a la ordenación del fenómeno” (Antonio Hernando, portavoz de Inmigración del PSOE; El Mundo, 24 de agosto de 2004). “No les veo nada preocupados por la economía sumergida: sindicatos, empresarios, organizaciones, sectores sociales, comunidades autónomas, ayuntamientos, están muy preocupados por el empleo ilegal que hay en nuestro país. A ustedes los veo reticentes para luchar contra el empleo ilegal y contra la economía sumergida” (Consuelo Rumí, El País, 28 de noviembre de 2004).

“El proceso de regularización no pretende más que poner orden donde había desorden, legalidad donde había ilegalidad. ¿O alguien quiere que siga el fraude? ¿Alguien no encuentra razonable que la inmigración se vincule al trabajo? Aquí hay trabajo, también para los inmigrantes, y si están trabajando, tienen que trabajar con derechos, y cotizando al Estado” (José Luis Rodríguez Zapatero, El Mundo, 14 de febrero de 2005). “¿Pretende usted que quién está trabajando no tenga derechos? El riesgo son ustedes que dejaron a cerca de un millón de trabajadores sin derechos y sin protección en España, porque la norma no facilitaba su incorporación a la legalidad. A lo mejor es que ustedes están muy a gusto con que esas personas sean explotadas (...) El único efecto llamada es tener trabajadores que pueden ser explotados. Dejen de estar en el problema y súmense a la solución, aunque sé que no lo van a hacer” (Jesús Caldera, El Mundo, 30 de septiembre de 2004).

4.5 PSOE: los ataques del PP se responden con ataques al PP

El Partido Popular intenta generalmente subrayar la incompetencia del Gobierno socialista sobre temas cuyos objetivos finales son compartidos por todos los ciudadanos (política antiterrorista o asuntos económicos) o por una clarísima mayoría (política territorial). Con motivo de la regularización de 2005, el PP también incluyó la inmigración como uno de los temas sobre los que poner en duda la capacidad del Ejecutivo. La respuesta socialista en este ámbito fue doble: por un lado, una defensa abierta de su gestión y de la rigurosidad de sus políticas; por otro, un duro ataque contra la gestión que los populares desarrollaron durante sus años de gobierno, mofándose de la laxitud de los cinco procesos de regularización efectuados en ese periodo y la poca eficacia demostrada en el control de las fronteras. Esto es, el PSOE ponía al PP ante el espejo y le devolvía, vía hemeroteca, todas sus críticas. Y, como consecuencia, deseada o no, también alimentaba desde sus trincheras el ambiente de crispación.

El Partido Socialista insistió en vincular el proceso de regularización a la necesidad de solucionar el problema heredado del anterior Gobierno del PP, que dejó una bolsa de centenares de miles de inmigrantes sin papeles pese a las repetidas regularizaciones emprendidas. Por ello, el PSOE subrayaba que a la normalización que pretendían poner en marcha “sólo podrán acogerse las personas que precisamente el Gobierno del PP dejó como irregulares. El proceso no va a afectar al inmigrante clandestino que llegara ayer, anteayer, hoy o mañana, sino a aquellos que lleven tiempo en España”, a los que “la pésima gestión del PP no dio respuesta, porque ni los expulsó del país ni tampoco regularizó su situación. La situación que se ha encontrado este Gobierno en cuanto a inmigración es caótica, heredada por una mala gestión del anterior Gobierno” (Consuelo Rumí, El País, 28 de agosto de 2004).

“La situación que ha encontrado este Gobierno es caótica, con cientos de miles de personas en situación de irregularidad que el anterior Gobierno del PP nos ha dejado como herencia, y con las oficinas de extranjería colapsadas por cientos de miles de expedientes. Ese atasco había hecho caer en situación de irregularidad sobrevenida a miles de personas. (...) En cuanto a la gestión, creo que ustedes no tienen autoridad política ni moral para hablar, habida cuenta de la situación que han dejado” (Consuelo Rumí, El País, 28 de noviembre de 2004). “Quiero hacer una política que aborde de verdad los problemas que han originado otros y su incompetencia” (José Luis Rodríguez Zapatero, El Mundo, 14 de febrero de 2005).

“¿Cuántos extranjeros regularizados existen en nuestro país? 1.800.000. Ésa es una realidad, pero añadida a esa realidad más de 800.000 personas que ustedes nos han dejado de forma irregular. Acababan de hacer un proceso de regularización extraordinario, porque ése sí que fue extraordinario, donde regularizaron a unas 300.000 personas sólo en 2001, y en el año 2003 aparecieron ya más de un millón de personas en condición de irregularidad. ¿Eso es una buena gestión? ¿Qué hicieron con el control de fronteras, al que dedicaron todos los presupuestos? No funcionó. ¿Y sabe por qué? Porque no quisieron que funcionara la inmigración regular, a la que este Gobierno sí dedica presupuestos y para el que es un objetivo prioritario.” (Consuelo Rumí, El País, 28 de noviembre de 2004).

Los socialistas buscaban con sus críticas a la gestión del anterior Ejecutivo poner en cuestión la autoridad de los populares para atacar la nueva política del Gobierno socialista. “Si es exigible prudencia y mesura a todo el mundo para tratar el tema de la inmigración, mucho más a quien ha sido ministro del Interior [Ángel Acebes] y alguna responsabilidad tendrá en las miles de personas que entraron ilegalmente. (...) Acebes se ha convertido en una especie de pieza sin control que critica su propia gestión” (Alfredo Pérez Rubalcaba, El Mundo, 9 de febrero de 2005). “El señor Acebes es el

responsable directo, como ministro del Interior, de la situación que el Gobierno socialista se ha encontrado (...) Quien ha generado el problema no quiere ahora colaborar en la solución, sino dedicarse a confundir, crear alarmismo y lanzar críticas tremendistas” (Consuelo Rumí, El Mundo, 8 de febrero de 2005). “Resulta ahora que Acebes sabe por dónde entran los inmigrantes en España, una información que no tenía como ministro del Interior, pero que ahora sí tiene” (Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de la Junta de Extremadura; El Mundo, 15 de febrero de 2005).

“¿Es que no se sonroja usted [a Mariano Rajoy] de hablar de desastre después de estar gobernando y de que el resultado haya sido 800.000 inmigrantes irregulares en nuestro país?” (José Luis Rodríguez Zapatero, El País, 23 de septiembre de 2004). “El PP nos critica por lo que llaman una regularización masiva. Masiva sí que fue la entrada de ilegales cuando ellos gobernaban, que estaban trabajando en el fraude, y ellos miraban para otro lado” (José Luis Rodríguez Zapatero, El Mundo, 8 de octubre de 2006).

Asimismo, desde el PSOE se trató de cuestionar las críticas del PP contra la supuesta flexibilidad de los requisitos impuestos a los extranjeros para obtener el permiso de residencia con mofas constantes sobre las condiciones en que se efectuaron las regularizaciones durante los gobiernos del PP. “Lo más paradójico es que se critique un proceso que dista mucho del que adoptó el Gobierno del PP cuando éste llevó a cabo una regularización extraordinaria en la que se exigía poco más que un recibo de la luz. Quien llevó a cabo un proceso tan desordenado tiene pocos argumentos para objetar éste” (Alfredo Pérez Rubalcaba, El País, 5 de noviembre de 2004). “Durante el tiempo que gobernó su partido [el PP] se hicieron regularizaciones extraordinarias e incondicionales, donde un billete de autobús servía para dar los papeles” (Consuelo Rumí, El Mundo, 8 de febrero de 2005). “Las regularizaciones que hicieron Acebes y

Rajoy no pedían contrato de trabajo, por lo que seguían trabajando en la economía sumergida” (Jesús Caldera, El Mundo, 5 de junio de 2006).

En paralelo, el Gobierno y el PSOE combatían los ataques a su gestión destacando la efectividad de su política y el consenso que la avalaba; pero también deslizado mensajes en los que se subrayaba su firmeza contra la inmigración ilegal y la extrema rigurosidad con que iban a actuar en la regularización. De momento, los socialistas no dieron el paso de endurecer sus posiciones tratando de emular en parte el discurso del PP, pero ya se apuntaba hacia donde podía encaminarse el discurso socialista en el futuro.

Por un lado, había que subrayar la buena gestión del Gobierno para poner orden en materia de inmigración y para que la inmigración llegara por cauces legales, sin caer en la economía sumergida. “Tenemos en nuestro país un problema de falta de orden en la inmigración. El Gobierno va a defender la inmigración legal y aplicará todos los mecanismos del ordenamiento para que la situación de desorden se convierta en una situación de orden. La inmigración ordenada es la inmigración legal, que es la que da garantías a los inmigrantes y la que produce una incorporación adecuada en nuestra sociedad” (José Luis Rodríguez Zapatero, El País, 8 de junio de 2004). “La mejor política que puede hacer un Gobierno para disuadir al potencial de inmigrantes que quieren venir de forma irregular es que funcionen los mecanismos de llegada regular. ¿Quién marca la capacidad de acogida? El mercado laboral y las necesidades del mercado laboral, que es el que, regulado legalmente, creará riqueza, aportará valor no sólo en el aspecto económico, sino también en el demográfico. (Consuelo Rumí, El País, 28 de noviembre de 2004).

“El proceso de documentación de extranjeros ha sido pactado entre el Gobierno, los sindicatos y los empresarios y cuenta con informes favorables del Consejo Económico

Social, del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado (...) Ninguna norma de extranjería e inmigración aprobada durante ocho años de Gobierno del PP contó con el mismo nivel de consenso con las fuerzas políticas, sociales y con las comunidades autónomas (Antonio Hernando, El País, 1 de febrero de 2005).

Para combatir las advertencias apocalípticas del Partido Popular, desde el Gobierno se trató de dar un mensaje de firmeza y rigurosidad. “Los inmigrantes no se deben dejar manipular por gente que les dice que van a conseguir una regularización por esta vía [encierros que se estaban produciendo]. Se acabó el papeles para todos” (Consuelo Rumí, El Mundo, 7 de junio de 2004). “Vamos a atender un problema heredado, pero esto no significa que se vaya a dar papeles a todos los extranjeros, que quede bien claro” (Consuelo Rumí, El País, 22 de agosto de 2004). “Hemos puesto en marcha mecanismos extremos para verificar la viabilidad y la legalidad de las empresas y de los empleadores (...) Hemos puesto todos los medios a nuestro alcance con el fin de que este proceso no tenga ni un asomo de inseguridad para los españoles” (Consuelo Rumí, El País, 28 de enero de 2005). “Este proceso pone orden en una situación caótica con la que nos encontramos al llegar al Gobierno. Pero que nadie se llame a engaño, porque no habrá más regularizaciones” (Consuelo Rumí, El País 3 de mayo de 2005). “Vamos a combatir la inmigración irregular en todos los ámbitos, desde los puntos de entrada en el territorio hasta el empleo. La Inspección de Trabajo pasará a desempeñar un papel esencial contra esa lacra del empleo ilegal que tan cara sale a todos los ciudadanos y que ha sido el verdadero efecto llamada durante todos estos años” (Consuelo Rumí, El País, 3 de mayo de 2005).

Y, para el PSOE, la buena gestión sólo podía dar buenos resultados. “Más de medio millón de empleos arrancados a la economía sumergida es una cifra muy importante. Demuestra que acertamos con el proceso de normalización, no sólo el Gobierno, sino

sindicatos, empresarios, ONG y todos los que lo apoyaron” (Consuelo Rumí, El País, 3 de mayo de 2005). “El proceso ha sido un éxito (...) Ningún país de la OCDE puede demostrar que se pueden aflorar 700.000 empleos en tres meses. Se decía que sería imposible superar las 400.000 solicitudes” (Jesús Caldera, El Mundo, 10 de mayo de 2005). “La legalización de trabajadores extranjeros (...) ha sido (...) una magnífica medida. Es una de las cosas por las que más satisfecho me encuentro desde el punto de vista humano”. (Jesús Caldera, El Mundo, 5 de junio de 2006).

La primera legislatura de José Luis Rodríguez como presidente del Gobierno vino marcada, en materia de inmigración, por la regularización de casi 600.000 extranjeros. La medida llevó al PP a utilizar la inmigración, por primera vez, en la lucha partidista. Y así se mantuvo, de forma intermitente en función de los acontecimientos (saltos de la valla de Melilla, crisis de los cayucos...), durante ese primer mandato de Rodríguez Zapatero. El Partido Popular encontró un encaje adecuado entre su estrategia de crispación y la utilización de un discurso duro en torno a la inmigración y contra la gestión que sobre esta materia desarrollaba el Ejecutivo. El Partido Socialista lo encontró entre su discurso proactivo y pedagógico y su intención de marcar diferencias ideológicas y de valores con su rival. Pero no todo fue labor socializadora por parte de los socialistas: el PSOE también contribuyó al ambiente bronco de esa legislatura con sus igualmente duros ataques a la gestión del fenómeno durante los gobiernos de José María Aznar.

El Gobierno y el PSOE no sólo afearon el discurso reactivo del Partido Popular (en una actitud acorde con sus posiciones y valores progresistas), también criticaron la laxitud de sus políticas tanto en control de fronteras como en concesión de permisos de

residencia (con lo que se colocaban de forma implícita en el papel de defensores de una política de mayor firmeza).

Hemos apuntado que, de momento, en esta su primera legislatura en el poder, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no llegó a endurecer sus posiciones tratando de combatir, por igualación, el discurso reactivo del PP. Pero algunos de sus mensajes ya anticipan el lenguaje duro que el PSOE utilizó como parte de su comunicación en torno a la inmigración tanto en la campaña de las elecciones generales de 2008 como, sobre todo, en la segunda legislatura. En campaña, ese nuevo discurso endurecido no tuvo un papel central (fue más importante hacer notorias las diferencias con el PP y rechazar su imagen), pero el nuevo Gobierno socialista salido de las elecciones de 2008 sí dio un protagonismo evidente a estos mensajes.

Capítulo 5. Elecciones generales de 2008: la inmigración entra en campaña

En la mayoría de los países europeos, singularmente en los de mayor tradición en la acogida de población extranjera, la inmigración es desde hace tiempo una temática que se aborda de forma recurrente en sus campañas electorales. En algunos países la extrema derecha ha logrado, coyuntural o permanentemente, según los casos, una amplia presencia parlamentaria y en las instituciones gracias a un discurso abiertamente xenófobo y antiinmigración. El Frente Nacional de Jean Marie Le Pen en Francia (ahora comandado por su hija Marine), el FPÖ (y luego el BZÖ) de Jörg Haider en Austria, el LPF del asesinado Pim Fortuyn en Holanda, el Partido Nacional Británico fundado por John Tyndall y una pléyade de formaciones con peso creciente en las instituciones de diferentes naciones de Europa central y del Este han sacado partido de un mensaje de rechazo a la inmigración (singularmente contra la población musulmana, aunque no sólo), canalizando –y exaltando- todas las actitudes negativas en torno a la presencia de extranjeros.

Y el éxito de estas formaciones de nuevo cuño ha empujado a lo largo de la última década a los grandes partidos tradicionales de diversos países europeos a posicionarse ante el fenómeno de la inmigración con discursos duros, más o menos extremos, y con políticas efectistas. Una estrategia que ha conseguido, en muchos casos, desactivar a los pequeños partidos de extrema derecha, pero que al tiempo ha servido para legitimar a través de las instituciones las actitudes contrarias a la inmigración de parte de la ciudadanía. El ejemplo más evidente de esta deriva de los grandes partidos es el de la UMP francesa con Nicolas Sarkozy como líder. Primero como ministro del Interior y luego como presidente de la República, Sarkozy ha hecho

uso de discursos y políticas populistas de rechazo a la inmigración para dejar fuera de juego del Frente Nacional de Le Pen y captar parte de sus apoyos electorales.

En España el discurso antiinmigración tradicionalmente ha sido patrimonio de las pequeñas formaciones de una muy atomizada ultraderecha, lo que en la práctica había supuesto que estos mensajes sólo tuvieran cierta relevancia, aunque muy puntualmente, en elecciones municipales. Sólo en determinados municipios, singularmente en Cataluña y Levante, estos grupos han conseguido representaciones significativas. Frente a la presencia que la inmigración tiene en las agendas política y mediática durante las campañas electorales de otros países europeos, España, en cambio, era hasta las elecciones generales de 2008 una excepción. Hasta entonces, la inmigración parecía un tabú que los partidos no podían aventar antes de unos comicios. En las elecciones de 2000 tuvo una presencia relativa, fruto de la agitada tramitación de la que se convertiría en la nueva Ley de Extranjería, pero sin convertirse en centro del enfrentamiento. En los comicios de 2004, el debate se centró en la guerra de Irak, el Plan Hidrológico Nacional o las competencias autonómicas, y el tema de la inmigración apenas apareció. Pero de cara a las elecciones generales de 2008 el Partido Popular intentó que la inmigración se convirtiera en uno de los grandes temas de campaña.

Se llegó a las elecciones del 9 de marzo tras una muy bronca legislatura, con el Partido Popular lanzado a una oposición más que dura contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a cuenta de aspectos diversos en torno al atentado del 11-M y, muy especialmente, del diálogo abierto por el Ejecutivo con la banda terrorista ETA y de la política territorial por la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Como hemos visto, la inmigración ya había sido asunto de confrontación política durante gran parte de la legislatura, debido fundamentalmente a las críticas del Partido Popular a la política de *papeles para todos* del Gobierno socialista (según la

terminología acuñada por el PP) y a sus consecuencias, el *efecto llamada*. Sin embargo, las elecciones de 2008 representan un verdadero paso adelante del discurso del PP hacia posiciones claramente reactivas. Los populares ya no sólo centrarán sus mensajes (y sus ataques) en el control de las fronteras, sino que también abordarán abiertamente la inmigración como una fuente de conflictos de convivencia y de integración. El discurso del PP da un salto cualitativo y pasa de estar focalizado únicamente en los flujos de llegada y, en menor medida, en el impacto de un contingente de extranjeros de gran volumen en los servicios públicos, a abordar también la convivencia y el choque cultural, en línea con el contenido de los mensajes de otros partidos conservadores europeos.

El Partido Popular incluyó en su programa electoral de 2008 una batería de medidas que implicaban un esperado endurecimiento de la política de inmigración y, como gran novedad, un reforzamiento de la política de integración de los extranjeros mediante la asunción de las “costumbres españolas”. Rajoy, y tras él todos los dirigentes del Partido Popular, enarbó en plena campaña electoral, por primera vez en España, un discurso que identificaba la inmigración como un problema para los españoles. La iniciativa de los populares monopolizó la agenda política durante varios días en precampaña, y ocupó gran parte del debate y del cruce de mensajes entre los dos grandes partidos.

El uso de la inmigración en campaña permitió reforzar y se engarzó como un puntal fundamental de la estrategia electoral global del PP. Pero también de la del PSOE. La estrategia de campaña del Partido Popular pasaba, por un lado, por la creación de una imagen del candidato socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, como ineficaz, poco fiable, mentiroso y creador de problemas; y, por otro, por la inclusión en su programa de propuestas especialmente dirigidas a tradicionales votantes del PSOE u otras fuerzas de izquierda, entre las que figuraron medidas restrictivas con la inmigración. El

objetivo del PP no era tanto captar su voto como desmovilizarlos y promover su abstención. El Partido Socialista, por su parte, quiso plantear los comicios como una elección entre la derecha y la izquierda, entre todo lo negativo y rancio que representaba el PP y la alegría y optimismo socialistas. El uso que se hizo en las elecciones de 2008 del tema de la inmigración se incrustó a la perfección en el corazón de las estrategias de ambos partidos.

5.1 Las propuestas de PP y PSOE sobre inmigración

Los dos grandes partidos llegaron a la campaña electoral de 2008 con tres puntos clave en materia de inmigración coincidentes en sus respectivos programas de gobierno: no habría más regularizaciones extraordinarias de extranjeros, un reforzamiento de las medidas de control de fronteras y una agilización de las expulsiones de inmigrantes que delincan. Sin embargo, el tono y la orientación de los mensajes eran muy diferentes.

“Si la política de la última legislatura se ha centrado en asegurar las formas de entrada regular a España y de acceso a nuestra sociedad”, se apuntaba en el programa electoral del PSOE, “la política de la próxima legislatura será ante todo la de garantía de la convivencia y desarrollo para todos los que viven en España”. El programa de gobierno socialista era en muchos aspectos un ejemplo de pedagogía de defensa de la sociedad multicultural. Todo el texto basculaba en torno a dos principios que buscaban garantizar la convivencia entre inmigrantes y españoles: por un lado, “Igualdad plena de derechos y deberes para todos quienes residen regularmente en España, nacionales y extranjeros; igualdad en el acceso a servicios públicos de calidad, capaces de mantener y mejorar sus prestaciones para nacionales y extranjeros; ningún español ni ningún extranjero deben ser objeto de exclusión o discriminación en la atención de las administraciones e instituciones españolas”; por

otro, “Legalidad en el respeto al marco de convivencia del que nos dotamos, en la plena aplicación de las leyes y del respeto de los derechos y principios constitucionales; legalidad en el mantenimiento de las vías legales de entrada y residencia, adaptadas a nuestra capacidad de acogida y consensuadas socialmente como hasta hoy; y legalidad en la lucha contra el fraude y la discriminación”.

En el tono del texto de los socialistas predominaban los aspectos propios del discurso proactivo en torno a la inmigración. “Nuestro compromiso es ante todo un compromiso de seguridad: seguridad mediante reconocimiento de derechos y protección frente a la discriminación para quienes han accedido regularmente a nuestro país; seguridad para quienes vivimos en España con una política realista de entrada y la garantía del derecho a la reagrupación familiar que tengan en cuenta las necesidades del empleo y nuestra capacidad de acogida; y seguridad también para todos mediante la lucha contra quienes quieran poner en peligro nuestra convivencia con el fraude, con el tráfico de personas, con la discriminación y con la demagogia”, rezaba el preámbulo del apartado reservado a la inmigración.

El Partido Socialista apuntaba que su política “será ante todo la de garantía de convivencia y desarrollo para todos los que viven en España” y estará fundamentada en los principios de “igualdad plena de derechos y deberes” y la “legalidad en el respeto al marco de convivencia”. Convivencia, respeto, acogida, solidaridad eran algunas de las ideas fuerza que recorrían las propuestas socialistas, conceptos propios del discurso proactivo. Pero al tiempo reservaban mensajes con un tono más duro para abordar la necesidad de prevenir la inmigración ilegal y combatir, esto sí con mucha firmeza, a las mafias de tráfico de seres humanos.

La política de inmigración que proponía, por su parte, el Partido Popular se articulaba en torno a dos ejes: “garantizar el control de las fronteras, los flujos legales y el

máximo respeto a la ley y a los derechos humanos favoreciendo, al mismo tiempo, la integración de todos los extranjeros que viven con nosotros”. Una integración, por lo demás, que tendría su manifestación ideal en una sociedad que “no acepte divisiones en función del origen étnico o las creencias religiosas de cada uno de sus miembros” y “enriquecida por acentos diferentes que decide compartir una misma lengua y los mismos valores”.

Cuando quedaba poco más de un mes para la celebración de las elecciones, el Partido Popular hizo pública una propuesta que condicionó ineludiblemente la agenda de temas de la precampaña y la campaña. El candidato popular y presidente del partido, Mariano Rajoy, anunció que, si ganaba las elecciones del 9 de marzo, obligaría a los inmigrantes que renovaran sus permisos iniciales de residencia (después de un año de estancia en el país) a firmar un “contrato de integración” (El Mundo, 7 de febrero de 2008).

En este documento, según precisó el líder popular y posteriormente se explicitó en el programa electoral del partido, el residente extranjero se comprometía a “cumplir las leyes y a respetar los principios, valores y costumbres de los españoles, a aprender la lengua, a pagar sus impuestos y cotizaciones, a trabajar activamente para integrarse, y a retornar a su país si durante un tiempo carece de empleo y de medios”. Integración obligatoria. A cambio del cumplimiento del contrato, la Administración se comprometería a “garantizarle los mismos derechos y prestaciones que a un español, a ayudarle a su integración a respetar sus creencias y costumbres –siempre que estas últimas no sean contrarias a las leyes españolas-, a enseñarle la lengua, a ayudarle y formarle para encontrar empleo, y a colaborar en su retorno si carece de empleo y de medios”.

Por su parte, el programa del PSOE recogía sus objetivos sobre integración en los siguientes términos: “Contribuiremos activamente al desarrollo y promoción de la política de integración de los y las inmigrantes legales en la sociedad española, velando por un completo disfrute, sin ninguna discriminación, de los derechos que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos”. En este sentido, los socialistas subrayaban que “Es preciso profundizar en aquellas políticas que más incidencia pueden tener en la cohesión social, como es la educación, y en la convivencia facilitando la igualdad de oportunidades y evitando el deterioro de los servicios públicos”. Y, más en concreto, se proponía “Desarrollar una Estrategia Nacional de refuerzo de los servicios públicos de educación y sanidad, dirigida a la garantía de calidad del sistema educativo y sanitario en aquellos barrios y localidades que reciben un mayor número de inmigrantes”.

El PSOE entendía la integración como cohesión social. El inmigrante está integrado si disfruta de los mismos derechos y prestaciones que los autóctonos; y para garantizarlo, los socialistas proponían reforzar los servicios públicos para que la calidad de los mismos no se resienta. El Partido Popular entendía la integración, por el contrario, sólo como la asimilación por parte de los inmigrantes de los *valores españoles* y como el cumplimiento de las leyes.

El PP incluyó su propuesta de contrato de integración interesado como estaba en focalizar la atención de adversarios y electores sobre el tema inmigratorio. Y consiguió su objetivo. La campaña, con la introducción de la medida por parte del PP, daba un giro radical. En los meses de diciembre y enero, el Partido Popular trató de dominar la agenda haciendo públicas sus propuestas económicas (singularmente diversas rebajas impositivas). Pero a pocas semanas de los comicios, el PP introducía un nuevo tema para tomar la iniciativa y centrar el debate en torno a un asunto y en unos términos que le resultaba favorable electoralmente.

La medida del PP sobre la integración de los inmigrantes –equiparable a las políticas desarrolladas en otros países europeos, pero totalmente novedosa en España– monopolizó el debate político, el cruce de declaraciones entre candidatos y en gran medida la agenda de los medios de comunicación. Una vez conseguido, el Partido Popular siguió perfilando su política inmigratoria. Si accedían al Gobierno, los populares crearían una Agencia de Inmigración y Empleo que seleccionaría en origen a los extranjeros que pretendiesen trabajar en España en función de su “capacidad de adaptación” y articularía la oferta de permisos de residencia a través de un “visado por puntos”, en función de criterios como el conocimiento de la lengua española, del sistema legal español y la cultura española, y su capacitación profesional (El País, 9 de febrero de 2008). En la práctica, estas medidas implicaban priorizar a los inmigrantes procedentes de países latinoamericanos, frente a los magrebíes, el contingente con más problemas de integración.

Durante la legislatura que entonces acababa, la inmigración se había colocado entre los problemas que más preocupan a los españoles, con porcentajes ciertamente altos. El Partido Popular llegaba a las elecciones con la intención de sacar partido de este escenario. La actitud de rechazo ante la inmigración, según mostraban las encuestas, la compartían una parte sustancial tanto del electorado del PP como del propio PSOE. Si los populares conseguían presentarse como los garantes del orden y el control en la política de inmigración, si lograban posicionarse como los que pondrían fin a los problemas de convivencia entre extranjeros y autóctonos a través de la mano dura, quizá desestabilizarían la fidelidad de voto entre los electores más proclives a votar al Partido Socialista y que además tenían una actitud negativa ante el inmigrante. El cálculo de los populares era que la abstención de parte de los votantes socialistas, gracias a ésta y otras propuestas especialmente dirigidas a ellos, sería suficiente para imponerse en los comicios.

5.2 El PP cruza la línea: la inmigración como problema

La política de inmigración ya se había convertido en uno de los caballos de batalla entre los dos grandes partidos españoles durante la legislatura previa a las elecciones de 2008. La regularización extraordinaria (*regularización masiva*, en la terminología del PP) emprendida en 2005 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero había servido al PP para colocar el fenómeno de la inmigración como tema de confrontación. Los dirigentes populares arremetieron durante esos tres años contra el Ejecutivo por su política de *papeles para todos* y por generar un *efecto llamada* que alentaba que continuaran llegando inmigrantes por vías irregulares.

Pero en la precampaña y la campaña de 2008, el Partido Popular, en un comportamiento inédito hasta entonces en la política española (con la excepción del discurso articulado por formaciones minoritarias de extrema derecha), dio un paso más en este campo y optó por dar un novedoso encuadre al asunto: la inmigración es un problema. Rompía así una regla no escrita que regía en la política española. Una regla, no obstante, maltrecha tras la crispada legislatura que se había vivido. Los dirigentes populares ya habían advertido en numerosas ocasiones que la política del Gobierno socialista convertiría la inmigración en un problema. Con las elecciones ya a la vista, el PP daba a su augurio carta de naturaleza y refrendaba que la inmigración, efectivamente, ya lo era.

Rajoy llenó su discurso durante semanas de visiones negativas en torno al inmigrante, en unos términos que hasta entonces parecían sólo reservados para pequeñas formaciones de ultraderecha. “La inmigración es un problema real” (El País, 10 de febrero de 2008); “Para que esto no se convierta en un drama hay que poner orden y control (...) Es evidente que es una avalancha” (El Mundo, 26 de febrero de 2008);

“Estoy a favor de que vengan quienes quieran buscarse la vida. Pero una cosa es eso y otra que se convierta en una pesadilla (...) No puede entrar todo el mundo que quiera sin control porque todos no cabemos” (El País, 28 de febrero de 2008); “Hay un peligro, que es la inmigración desordenada” (El País, 4 de marzo de 2008).

Y si la inmigración se había erigido en un problema, era por responsabilidad directa del Gobierno socialista, del que el PP trataba de difundir una imagen de ineficacia en sus políticas y dejación de sus funciones. Porque, según Mariano Rajoy, “Zapatero, con la inmigración, hace la política del avestruz: esconde la cabeza, hace como que no pasa nada” (El País, 10 de febrero de 2008); “Usted no ha hecho nada en esta materia, salvo una regularización masiva que se ha oído en toda Europa (...) Esto requiere orden y control, y no palabras, que es lo que usted hace”, (Debate entre los dos candidatos en televisión, 3 de marzo de 2008). Ignacio Astarloa, entonces secretario de Justicia del PP, subrayó que, si su partido gobernaba, tendría que “poner orden e integración en el caos organizado por Zapatero” (El País, 8 de febrero de 2008).

Frente a este “caos” propiciado por el Ejecutivo socialista, el PP se presentaba como el único garante de la seguridad, el orden y el control. Rajoy quiso dejar claro que con la inmigración ilegal había que ser “implacable y absolutamente contundente”. La fórmula del PP ante la inmigración: “Quiero orden, control, ley, integración” (Mariano Rajoy, El Mundo, 28 de febrero de 2008); “Hay que poner mucho orden, mucho control, ser enormemente estricto a la hora de regularizar y a la hora de dar permisos” (Mariano Rajoy, El País, 6 de marzo de 2008).

5.3 El ‘problema’ a pie de calle: costumbres y servicios públicos

Los populares, para explicar por qué la inmigración era un “problema” que podría derivar en “pesadilla”, introducían en su discurso constantemente diferentes asuntos

que podrían implicar choque de costumbres entre nacionales y extranjeros. Además de la exigencia de conocer la lengua castellana, se recordaban casos de mujeres musulmanas que pretendían hacerse la fotografía para el DNI con el velo islámico; niñas musulmanas con el velo en las aulas y que no podían hacer gimnasia o ir a la piscina con sus compañeros de colegio; menús especiales según sus creencias en los comedores escolares... (El País, 8 de febrero de 2008). De ahí que se propusieran que el foráneo asumiera obligatoriamente las “costumbres españolas” como garantía de integración y evitar el surgimiento de guetos (El País, 10 de febrero de 2008), aunque en ningún momento los dirigentes populares llegaron a aclarar cuáles eran estas costumbres patrias.

Desde el Partido Popular en cambio, sí se explicaban esas costumbres españolas por oposición, explicitando algunas prácticas que quedaban fuera del comportamiento común de los nacionales. “Yo comprendo que hay otros países donde hay poligamia. Pero aquí no”, explicó Mariano Rajoy (El País, 28 de febrero de 2008). “Quiero que [los inmigrantes] recuerden que la mutilación genital, la poligamia y los matrimonios de conveniencia son delito en España”, aseveró el candidato popular (El País, 10 de febrero de 2008). La vinculación de inmigración y algunos comportamientos perseguidos por el Código Penal se hizo más evidente con unas palabras de Manuel Pizarro, número dos de las listas del PP por Madrid, con las que identificó como costumbres españolas “no robar y que no te corten la mano por ello” (El País, 9 de febrero de 2008).

Asimismo, los portavoces del PP enmarcaron el fenómeno inmigratorio como un problema de choque entre los derechos de españoles y de foráneos, subrayando que la llegada masiva de inmigrantes generaba una saturación de los servicios públicos, lo que perjudicaba fundamentalmente a los nacionales con menores recursos económicos. Esta idea se articuló en mensajes pronunciados por Mariano Rajoy como:

“Quiero que los derechos de los españoles no se vean perjudicados por todos los demás” (El Mundo, 28 de febrero de 2008); “Habrá que hacer un esfuerzo en los colegios, los comedores, la sanidad..., los derechos de unos no pueden perjudicar los de otros” (El País, 28 de febrero de 2008); “Hay muchas personas que se ven perjudicadas, y los españoles a la hora de pedir una beca, de una plaza pública, se pueden ver perjudicados”. (El País, 4 de marzo de 2008); “A la hora de repartir los colegios, hay personas que tienen mejor puntuación porque tienen menos medios. Lo mismo pasa con las becas de comedor; lo mismo pasa en la sanidad, con las listas de espera; lo mismo pasa en la vivienda”. (El País, 6 de marzo de 2008).

Por su parte, Miguel Arias Cañete, ex ministro de Agricultura y secretario ejecutivo de Economía y Empleo del PP, fue más explícito. "Tenemos unas tensiones en el sistema de sanidad de las comunidades autónomas espectaculares, con las urgencias colapsadas porque los inmigrantes han descubierto la grandeza del sistema nacional de salud. Claro, alguien que para hacerse una mamografía en Ecuador tiene que pagar el salario de nueve meses llega aquí, a Urgencias, y se la hacen en un cuarto de hora" (El País, 8 de febrero de 2008).

5.4 El PSOE, al contraataque: la creación del adversario

A ningún partido ni líder político le es suficiente en campaña con ensalzar sus cualidades, su programa y su pasada y/o futura buena gestión. Les hace falta la construcción en torno a sus rivales de una contrafigura que acumule un conjunto de características negativas y antagónicas a las propias. Es el juego de comunicación política de la creación del adversario (Del Rey Morató, 2007). Una fórmula que el Partido Socialista explotó, y mucho, durante la campaña electoral de 2008 y que la posición defendida por el PP sobre inmigración sólo vino a potenciar aún más.

Uno de los grandes objetivos estratégicos de la comunicación del Partido Socialista pasa por recordar a los ciudadanos las razones por las que ubican al PP tan a la derecha en la escala de posicionamiento ideológico; y, al tiempo, hacer patente que el PSOE se encuentra en esa escala en una posición de izquierda moderada, el mismo campo del espectro en el que se ubica una mayoría de ciudadanos españoles. La pretensión de los socialistas de presentarse ante el electorado como los garantes de los derechos civiles frente a una derecha encarnada por el Partido Popular, se vio muy facilitada por la decisión de los populares de introducir en campaña un tema tan sensible como el de la inmigración y hacerlo en esos términos de extrema dureza.

5.4.1 Derecha y racismo

Transcurridas pocas horas desde que Mariano Rajoy anunciara su intención de incluir en el programa electoral del PP la obligatoriedad de que los inmigrantes suscribieran un contrato de integración para obtener su permiso de residencia, partidos políticos de todo signo y una pléyade de organizaciones no gubernamentales saltaron a la palestra para tachar de racista la medida. El PSOE, especialmente interesado en potenciar entre el electorado la imagen de un Partido Popular escorado muy a la derecha, no fue a la zaga, hasta convertirlo en uno de los *leit motiv* de su discurso.

José Luis Rodríguez Zapatero colmó de epítetos sus intervenciones públicas para achacarle a la derecha que representa el Partido Popular ser “xenófoba”, “racista”, “excluyente”, “fundamentalista”, “rencorosa”, “machista” y “homófoba” (El Mundo, 11 de febrero de 2008) y le acusó de propalar “ideas discriminatorias, rancias y absolutamente excluyentes de los valores constitucionales” (El Mundo, 8 de febrero).

Otros dirigentes socialistas también emprendieron la labor de dibujar el peor PP posible a cuenta de la inmigración. “El PP necesita que los inmigrantes firmen un

papel en el que digan que van a ser buenos y a cumplir con la ley porque, para la derecha, los inmigrantes son gente de poco fiar", dijo Pedro Zerolo, secretario de Movimientos Sociales del PSOE (El País, 7 de febrero de 2008). "Es humo con tufillo xenófobo", indicó Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior y cabeza de lista del PSOE por la provincia de Cádiz (El Mundo, 8 de febrero de 2008). "Todo rezuma rechazo, menosprecio a los inmigrantes, desprecio a la igualdad, rechazo a la diferencia, todo incita a ensalzar el racismo y la xenofobia", abundó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega (El País, 9 de febrero de 2008).

Asimismo, el PSOE emitió un comunicado en que equiparaba las propuestas del PP con las posiciones defendidas por partidos de extrema derecha europeos. Los socialistas esgrimían que el "no cabemos" utilizado por Mariano Rajoy es un mensaje habitual en la propaganda de los partidos ultraderechistas alemanes Die Republikaner-REP y NPD; que la defensa realizada por el candidato del PP de que "los derechos de los españoles no se vean perjudicados por los derechos de todos los demás" era similar al lema *Los franceses primero* del Frente Nacional galo, liderado por Jean Marie Le Pen. De igual modo, el PSOE equiparaba frases pronunciadas en un mitin por Rajoy y el programa electoral del Frente Nacional.

Mariano Rajoy: *"[Los inmigrantes] tienen que comprometerse a asumir las costumbres españolas. Yo comprendo que hay otros países donde hay poligamia. Pero aquí no, y no vale con que me digan que tienen que cumplir la ley. Tienen que comprometerse"*.

Programa del Frente Nacional: *"No es suficiente proponer un contrato de integración incorporando un buen conocimiento de la lengua francesa. Se debe tener en cuenta un conjunto de elementos culturales, sociales y lingüísticos que revelen un*

recorrido exitoso de inserción".

5.4.2 Derecha y costumbres

El mismo día en que el Partido Popular dio a conocer su intención de que los inmigrantes respetaran las costumbres españolas vía contrato escrito, muchos medios de comunicación ya contactaron con expertos juristas que constataron la dificultad (o directamente la imposibilidad) de legislar sobre costumbres por ser un terreno difícil de acotar. ¿Cuáles son las costumbres españolas? La falta de una respuesta concreta, más allá de la defendida por el PP que señalaba la necesidad de impedir prácticas como la poligamia o la ablación de clítoris, comportamientos ambos tipificados como delitos en el Código Penal, sirvió a los socialistas para mofarse de la medida de los populares.

“¿Quién define el catálogo de buenas costumbres? ¿Cuáles son las costumbres que hay que imponer a los inmigrantes? ¿Las mías, las del señor Rajoy, las de monseñor Rouco, las de un agnóstico?”, se preguntaba Alfredo Pérez Rubalcaba (El País, 8 de febrero de 2008). “¿Tenemos que hacer que [a los inmigrantes] les gusten los toros o vayan a misa?”, ironizaba José Bono, cabeza de lista del PSOE por Toledo. “Nadie debe firmar un contrato para que se respeten las costumbres porque, afortunadamente, en este país no tenemos todos las mismas costumbres”, resumía Rodríguez Zapatero (El Mundo, 8 de febrero de 2008).

5.4.3 Derecha y humanitarismo

El PSOE trató igualmente de achacar al Partido Popular la insensibilidad con los más desfavorecidos –a su juicio, una indiferencia sólo propia de la derecha- y, para ello, se volcó en el diseño de mensajes emocionales que potenciaban la dimensión humana del fenómeno de la inmigración y recordaban que cada inmigrante es una persona a la

que se debe reconocer todos sus derechos (amenazados, en la lógica electoral socialista, por el programa del PP). En definitiva, las medidas de la derecha encarnada por el PP eran “injustas” y “peligrosas” para la convivencia.

“Hay inmigrantes donantes de órganos, voluntarios en ONG y fallecidos en las misiones de paz y en atentados terroristas como el de la T4 ¿Deberíamos pedirles que firmen su papel de delincuente potencial a esas personas que mueren por nosotros?”, le preguntó Zapatero a Rajoy en el primero de sus debates televisados. “Se lo quiere usted pedir [firmar el contrato de integración] a los inmigrantes que nacen, viven y mueren con nosotros y hasta a veces por nosotros”, prosiguió.

“Siempre estaré enfrente de quien haga un discurso para excitar las bajas pasiones, de quien haga un discurso de xenofobia, porque detrás de un inmigrante y antes de un inmigrante [sic] hay un ser humano con derechos”, dijo Zapatero (El País, 2 de marzo de 2008). “La derecha habla de los inmigrantes como si fueran mercancía, hablan de importar trabajadores extranjeros, los trata como si fueran potenciales delincuentes y, encima, son los que van todos los domingos a misa y dicen que comulgan”, insistió el candidato socialista (El Mundo, 2 de marzo de 2008), para quien las políticas propuestas por el PP “alientan las peores pasiones para la convivencia” (El País, 10 de febrero de 2008).

5.4.4 La gestión del PP

Los dirigentes socialistas trataron de invalidar el papel del PP como actor autorizado para hacer propuestas en torno a la inmigración. Por un lado, por electoralismo y dejación (o dejadez) durante la legislatura que entonces tocaba a su fin: “Me indigna que el PP utilice la inmigración como arma electoral después de cuatro años ausente de todo lo que se ha hecho por la integración, por la ordenación y contra la inmigración

ilegal”, indicó Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración y entonces miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE (El País, 11 de febrero de 2008).

Por otro, y muy singularmente, por su gestión del fenómeno inmigratorio durante los ocho años de gobierno popular. El mensaje era claro: el Gobierno de Zapatero ha solucionado los problemas que le dejó la mala gestión de Rajoy cuando fue ministro del Interior. “Este Gobierno ha puesto orden donde había desorden, ha puesto ley donde había irregularidad. Hemos sacado de debajo de las alfombras a los inmigrantes que Rajoy dejó, hemos llevado al mercado laboral a los inmigrantes que estaban en la economía sumergida”, señaló la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega (El País, 23 de febrero de 2008).

José Luis Rodríguez Zapatero explotó insistentemente esta idea en los dos debates televisados que mantuvo con Rajoy. “Cuando llegué al Gobierno había un millón de ciudadanos sin papeles que se les colaron porque no controlaron las fronteras. Hicieron cinco regularizaciones con 500.000 inmigrantes a los que dieron papeles presentando un bonobús. ¿Con qué cara habla usted de regularizaciones?” (Debate en televisión, 25 de febrero de 2008). “Los inmigrantes vinieron a España cuando gobernaba el PP (...). Se colaron un millón. (...) Ustedes dieron papeles sin exigir contrato de trabajo, sin examinar los antecedentes penales, bastaba con presentar un bono para el autobús, un recibo de televisión. No sé si fue por su afición al ciclismo, se regularizó a inmigrantes con el recibo de compra de una rueda de bicicleta”. (Debate en televisión, 3 de marzo de 2008).

5.5 La gestión del PSOE según el PSOE

El Partido Socialista afrontaba una campaña en la que el PP trataba de centrar el debate en el tema de la inmigración. Según la lógica de los populares, si la inmigración se había convertido en un problema era por las políticas desarrolladas por el Gobierno

de Rodríguez Zapatero en los cuatro años anteriores, y el Partido Popular se ofrecía como garante de mayor firmeza y de imposición de la integración.

Los socialistas, además de poner en duda la gestión del PP en materia de inmigración mientras estuvo en el poder (como hemos visto en el apartado anterior, trataron de desactivar la percepción de Gobierno eficaz y laxo. Lo hizo por dos vías. Por un lado, con un mensaje en positivo sobre las medidas ya adoptadas, que le servía para seguir marcando diferencias con un PP que trataban de hacer ver que se había radicalizado. “La respuesta al fenómeno de la inmigración no es hacer un discurso de rechazo, sino ampliar las políticas sociales. Y eso es lo que estamos haciendo. Que las políticas del Gobierno central puedan llegar a la última escuela, al último centro de salud, es una tarea difícil, porque por medio están las comunidades autónomas” (José Luis Rodríguez Zapatero, El País, 7 de marzo de 2008) “Éste es el Gobierno que ha puesto encima de la mesa 800 millones en estos años para la integración de inmigrantes, para que haya medidas sociales específicas, concretas, conocimiento de idiomas, ayudas sociales... Y, por tanto para que los ciudadanos que viven donde hay un peso inmigratorio importante no se vean afectados. (...) Lo que hay que hacer es lo que hemos hecho: fortalecer los flujos legales, ayudar más a la cooperación en los países de origen (José Luis Rodríguez Zapatero, El País, 7 de marzo de 2008).

Y, en paralelo, el Partido Socialista también optó por imprimir a sus mensajes dosis de dureza para que el PP no asumiera en solitario el papel del partido del orden y el control. Los socialistas ya habían hecho tentativas en este sentido desde 2006. La *crisis de los cayucos* (que llevó a la inmigración a convertirse por única vez en el principal problema del país para los españoles en el barómetro del CIS de octubre de 2006) y la cercanía de las elecciones autonómicas de 2007 ya habían llevado a los dirigentes del PSOE a deslizar algunos mensajes en este sentido, aunque siempre circunscritos a la entrada irregular de extranjeros. “Seremos inflexibles con la

inmigración ilegal” (José Luis Rodríguez Zapatero, El Mundo, 27 de agosto de 2006) “El Gobierno combatirá la inmigración irregular con todos los instrumentos de que dispone” (Juan Fernando López Aguilar, candidato del PSOE a la presidencia de Canarias; El Mundo, 12 de septiembre de 2006). “Existe la necesidad de luchar contra la inmigración ilegal y de ordenar de acuerdo con la ley la llegada de inmigrantes” (Joan Ignasi Pla, candidato socialista para la Comunidad Valenciana; El Mundo, 17 de septiembre de 2006).

Durante la precampaña y la campaña de 2008, los socialistas igualmente hicieron bandera de la firmeza frente a las regularizaciones. No habría más regularizaciones extraordinarias, pero además introducían en su discurso matices para competir en rigurosidad con el PP: “Si [los inmigrantes] incumplen la ley para venir a España de forma irregular, se les repatría o se les expulsa. Hemos multiplicado por dos las repatriaciones y las expulsiones”, dijo María Teresa Fernández de la Vega (El País, 23 de febrero de 2008). “En cuanto tenemos un inmigrante ilegal, lo repatriamos (...). Se ha conseguido una política de reducción muy importante de los que intentan llegar y una ampliación de los que conseguimos devolver”, apuntó Zapatero (El País, 7 de marzo de 2008).

5.6 La inmigración y las estrategias de comunicación de PP y PSOE

La decisión del Partido Popular de incluir la inmigración entre los temas de campaña, y sobre todo el tono en que lo hizo, sirvió para reforzar las estrategias de comunicación y los objetivos electorales no sólo del PP, también del PSOE. Los populares necesitaban para ganar las elecciones que una parte de los electores que auparon al PSOE al poder cuatro años antes cambiaran su voto o se abstuvieran. La estrategia de crispación ejecutada desde 2004 tenía ese objetivo (movilizar a sus apoyos y desmovilizar a los del PSOE) y la inclusión de temas y propuestas que podrían tener

eco entre los votantes próximos al Partido Socialista (entre ellos, la mano dura con la inmigración) venía a sumarse a esos esfuerzos.

El PSOE necesitaba al menos mantener la cifra de votantes obtenida en 2004; o incluso incrementarla, dado que era previsible que el PP recuperaría parte de los electores que decidieron no votarle cuatro años antes por la gestión de los atentados del 11-M por parte del Gobierno de José María Aznar. Ante la posibilidad de que la estrategia de crispación del PP hubiera conseguido mermar las bases más moderadas y de centro del electorado socialista, el PSOE debía buscar votos en la izquierda del espectro ideológico. Los socialistas debían para ello hacer evidente que el Partido Popular era un partido de derechas radicalizado. Las duras medidas sobre inmigración que propuso el Partido Popular le abría la puerta a los socialistas para caricaturizar a su rival como una formación de la extrema derecha xenófoba. El PSOE se agarró con fuerza al tema de la inmigración para reforzar su estrategia de plantear los comicios como una elección entre el progresismo y la derecha más reaccionaria, entre la alegría y el catastrofismo.

El tema de la inmigración, para unos voluntariamente y para otros como una baza sobrevenida, se incrustó en el centro de las estrategias de comunicación de ambos partidos mayoritarios. Partido Popular y Partido Socialista se valieron de la inmigración, y mucho, para reforzar sus respectivas campañas electorales.

5.6.1 El PP, en busca de la abstención en los caladeros del PSOE

El Partido Popular afrontaba las elecciones de 2008 con la necesidad de superar el que representa su mayor déficit estructural: su desventaja en relación al PSOE por su ubicación ideológica. Una inmensa mayoría de los votantes españoles se declara más próximos a las posiciones de izquierda. Y los electores siguen viendo al PP como un

partido muy escorado a la derecha, mientras que ubican al PSOE en una posición de izquierda moderada.

Atendiendo al autopoicionamiento de los votantes en la escala ideológica, el PP sólo podría obtener la victoria si un porcentaje suficiente de los electores de izquierda o de los de centro izquierda opta por votar al candidato popular o, en su defecto, por la abstención. Ya hemos analizado anteriormente cómo la estrategia de crispación emprendida por los populares y la selección de temas que el PP trata de imponer en la agenda pública tienen su razón de ser en la necesidad de superar esta desventaja ideológica. El PP trata de desmovilizar a estos votantes más próximos al PSOE, pero volátiles, proponiendo temas transversales (alejados de connotaciones ideológicas) que puedan hacer dudar de la capacidad del Partido Socialista para gestionarlos y, al tiempo, generando un estado de alarma permanente que los desanima a participar en las elecciones.

Los efectos de la desaceleración económica (que luego se convertiría en crisis y más tarde en recesión) eran ya evidentes en los meses previos a las elecciones del 9 de marzo; incluso en las semanas anteriores a los comicios se publicaron varios datos abiertamente negativos de paro e inflación. Parecía previsible que el PP aprovecharía la coyuntura (aunque aún muy incipientemente) de desaceleración y colocaría la economía como el tema sobre el que girara su campaña. Su estrategia fue otra. Prefirió lanzar todas sus propuestas económicas con anterioridad, en los meses de diciembre y enero, y no las retomó lo suficiente o al menos no las incluyó con fuerza en la agenda durante la campaña. (Quizá influyó en la decisión de los dirigentes populares ver cómo su gran apuesta económica, la inclusión en sus listas del ex presidente de Endesa Manuel Pizarro, se desinflaba a las primeras de cambio tras un debate televisado con el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, celebrado el 21 de febrero, el primer día de campaña electoral). En

paralelo, la política antiterrorista y el malogrado proceso de paz con ETA siguieron teniendo mucho peso en el discurso del PP. De hecho, según el estudio postelectoral del CIS, el terrorismo fue para una mayoría de españoles el tema que más se discutió en campaña.

Como uno de los ejes de campaña, desde el PP se trató de construir una imagen de un José Luis Rodríguez Zapatero “mentiroso”, frente al “fiable” Mariano Rajoy; un Zapatero “extremista”, frente a un “moderado”, “equilibrado” y “previsible” Rajoy; un Zapatero “que no ha hecho nada”, frente al “buen gestor” popular; un Zapatero “que crea problemas donde no los hay”, frente a un Rajoy que “sólo se ocupará de lo importante”. Un tono acorde con la campaña de crispación permanente emprendida por el Partido Popular desde 2004, con la que se trataba de defenestrar la gestión de los socialistas en el Gobierno y buscar la desafección de parte de los votantes que les respaldaron cuatro años antes.

El objetivo era restar apoyos al PSOE, ya fuera captando parte de sus electores o, prioritariamente por ser más factible, promoviendo la abstención de los votantes volátiles próximos al PSOE. Recordemos las declaraciones de Gabriel Elorriaga, entonces secretario de Comunicación del PP, a Financial Times: “Toda nuestra estrategia está centrada en los votantes socialistas indecisos. Sabemos que nunca nos votarán. Pero si podemos sembrar suficientes dudas sobre la economía, sobre la inmigración y sobre cuestiones nacionalistas, entonces quizás se quedarán en casa. (...) Será difícil incrementar nuestro voto. El PP tiene una imagen muy dura y de derechas en este momento. Incluso nuestros votantes piensan que son más de centro que el PP. (...) Pero sus votantes [los del PSOE] son menos disciplinados. Por eso dirigimos nuestro mensaje a ellos. Les estamos diciendo: ‘Vuestro Gobierno no se ha ocupado de vuestros problemas reales’. Los resultados dependerán del impacto de este mensaje”. (Financial Times, recogido por El País, 18 de febrero de 2008).

Con este objetivo, el Partido Popular puso sobre la mesa toda una batería de medidas que buscaban encontrar el apoyo de electores próximos tanto al PP como al PSOE; y también algunas otras propuestas específicamente destinadas a los ciudadanos de clases de menores recursos, tradicionalmente votantes de forma mayoritaria de las fuerzas de izquierda. En este escenario se enmarcan las nuevas medidas en torno a la inmigración (contrato de integración, visado por puntos...), que tenían como público específico aquellos españoles que conviven con inmigrantes en esos barrios humildes, a los que compiten con los extranjeros por los mismos servicios públicos y sociales. La promesa del PP de endurecimiento general de las penas para todo tipo de delitos, así como una rebaja de la edad penal de los 14 a los 12 años, tenían el mismo auditorio principal, el que sufre mayores problemas de inseguridad ciudadana en su lugar de residencia. Y la eliminación de los impuestos a todos los que ganaran menos de 16.000 euros brutos al año propuesta por los populares buscaba llamar la atención de los votantes de menor renta y de sus hijos *mileuristas*.

Rajoy trató a lo largo de toda la precampaña y la campaña de erigirse en el líder de las clases media y baja, frente a un PSOE que, según denunciaba el candidato popular, había abandonado sus señas de identidad. “Han inventado el socialismo de los millonarios y se han olvidado de los problemas reales y de la gente normal (...) Quiero ser el presidente de aquellas personas que tienen más dificultades para defender sus posiciones en la vida. No voy a ser el presidente de los listos. Voy a ser el presidente de la gente normal, de mis compatriotas, de los que andan por la calle (Mariano Rajoy, El Mundo, 10 de febrero). “Yo estoy con los artistas que tienen que hacer mucho arte para poder llegar a final de mes, con los artistas que pagan una hipoteca, con los artistas que se levantan a las siete de la mañana para trabajar y dar de comer a sus hijos y con los que hacen números todos los días con la pensión (Mariano Rajoy, El Mundo, 11 de febrero). “Yo le pido el voto a la clase media española, al trabajador, al

asalariado, a aquel que le cuesta mucho ganar su dinero, al currante (...) Les voy a pedir el voto a los que han confiado en el PP en estos cuatro años, pero también a los que confiaban en el PSOE y no entienden nada de lo que ha pasado en este tiempo". (Mariano Rajoy, El Mundo, 18 de febrero).

5.6.2 El PSOE explota la dicotomía izquierda/derecha

El PSOE construyó toda su campaña de 2008 sobre un pilar fundamental: buscar la permanente comparación con su adversario especialmente en el aspecto ideológico (que le resulta tan favorable). La izquierda frente a la derecha. Pero no sólo: en esas elecciones había que elegir entre el talante y la crispación, entre la solidaridad y los privilegios, entre el optimismo y el catastrofismo. Por ello, el endurecimiento de las políticas de inmigración propuesto por el Partido Popular vino a reforzar aún más el discurso de los socialistas, convirtiéndose para el PSOE en un filón para la construcción de mensajes dicotómicos. Al Partido Socialista no le hizo falta adaptar su estrategia ante las sorprendidas promesas del PP. El nuevo discurso aún más duro del PP sobre la inmigración simplemente le dio más argumentos a los socialistas para construir la imagen de un PP escorado a la derecha.

Ante cualquier duda que pudiera sembrar entre el electorado la imagen que difundía Mariano Rajoy de sí mismo como el defensor de los "currantes", José Luis Rodríguez Zapatero le identificaba con el ideario de la derecha más tradicional. "La derecha no gobierna bien cuando hay prosperidad porque no reparte los beneficios y gobierna peor cuando hay dificultades porque no reparte los sacrificios, éstos siempre van a los mismos, y con nosotros los sacrificios irán a los más poderosos (José Luis Rodríguez Zapatero, El País, 11 de febrero de 2008). "Al PP nunca le han importado las familias que menos tienen (...). El 9 de marzo se decide que siga un Gobierno con sensibilidad social; nosotros hemos hecho más que ningún otro Gobierno por apoyar a las familias".

(José Luis Rodríguez Zapatero, El País, 13 de febrero de 2008). “La derecha, cada vez más derecha, del PP tiende a obstaculizar la igualdad, la ampliación de los derechos y las libertades de los ciudadanos, a hacer a la gente más igual. Es lo que han hecho en estos cuatro años, recurrir la ley de igualdad, recurrir las leyes que ampliaban derechos y poner obstáculos a la igualdad. Afortunadamente la mayoría de los españoles, y por supuesto de las españolas, quieren vivir en un país de ciudadanos libres e iguales y en un país donde nadie les imponga ninguna creencia sólo la que es la creencia de cada uno y el respeto a la de todos” (José Luis Rodríguez Zapatero, El Mundo, 3 de febrero de 2008).

Tras una legislatura tan agitada como la que a punto estaba de llegar a su fin, el PSOE no dejó pasar la oportunidad de identificar al Partido Popular con la crispación, con el catastrofismo, con el pesimismo, con cualquier sentimiento negativo, mientras los socialistas se creaban para sí la imagen del partido del optimismo, de la alegría... En palabras de Zapatero: “Se decide entre diálogo y la convivencia o el ordeno y mando; entre la tolerancia con el diferente y la intolerancia, entre maneras de vivir y convivir” (El País, 22 de febrero de 2008). “El principal obstáculo [del país] es una oposición que no aceptó el resultado electoral, que ha practicado el insulto, que ha crispado, que ha enfrentado a ciudadanos de unas comunidades con otras, que no ha dudado en usar el terrorismo con fines partidistas” (El País, 26 de febrero de 2008). “Ustedes sólo se dedican a meter miedo” (El País, 4 de marzo de 2008).

Los socialistas también trasladaron este discurso maniqueo a sus eslóganes electorales. Frente a los lemas un tanto neutros utilizados por el PP en su cartelería (*Las ideas claras*, posteriormente sustituido por *Con cabeza y corazón*), el PSOE optó por toda una batería de mensajes que transmitían optimismo. Bajo el título genérico de *Motivos para creer*, los socialistas utilizaron múltiples carteles con diferentes fotografías de Zapatero y en los que se incluían eslóganes como *Por todo lo que merece la pena; Comprometidos con la Igualdad; No es lo mismo; Porque lo estamos*

consiguiendo; Somos más; Soñar con los pies en la tierra; Por todo lo conseguido; Porque no está todo hecho; La octava potencia económica, los primeros en derechos sociales; Ahora que avanzamos, por qué retroceder o Podemos llegar tan lejos como queramos. La imagen del partido de la esperanza y los buenos sentimientos que pretendía para sí el PSOE se vio aún más reforzada con la ayuda de los artistas integrados en la Plataforma de Apoyo a Zapatero (PAZ), que produjeron un videoclip en el que interpretaban el poema de Mario Benedetti *Defender la alegría*.

En paralelo, y ante la posibilidad de que los esfuerzos del Partido Popular de restarle apoyo promoviendo la abstención de parte de sus votantes tradicionales fructificaran el 9 de marzo, el PSOE apeló, como en anteriores comicios, al voto útil para captar electores posicionados más a la izquierda, sobre todo en la recta final de la campaña. El mensaje a los electores izquierdistas tentados de apoyar a otras formaciones progresistas (singularmente Izquierda Unida) pretendía ser directo: o se vota PSOE o se abre a la derecha la puerta de Moncloa. “Pediré hasta el último minuto, hasta esta medianoche, una mayoría amplia”, dijo Zapatero (El País, 7 de marzo de 2008). “Hay una mayoría de españoles que quieren que siga este proyecto, y esa mayoría debe decidir. Para elegir entre el PSOE y el PP hay que votar lo que uno quiere, y esa mayoría es la que tiene que traducir sus deseos en votos. (...) Las encuestas han estado marcando una elección competida, como suele pasar en los países de nuestro entorno. Pero voy a pedir hasta el último minuto, hasta las doce de la noche del viernes, esa mayoría amplia para gobernar”, insistió el candidato (El País, 7 de marzo de 2008). “Lo que no quiero es un voto inútil para que ganen los que no tienen que ganar”, sentenció el ex presidente del Gobierno Felipe González (El País, 7 de marzo de 2008). Y el voto útil, finalmente, se dejó ver en los resultados del PSOE.

La intensa campaña electoral de 2008 se cerró de nuevo de luto. La banda terrorista ETA asesinó el 7 de marzo al ex concejal socialista de la localidad guipuzcoana de Mondragón Isaías Carrasco. Todos los partidos suspendieron sus actos de cierre de campaña. La abierta confrontación de las semanas anteriores, el cruce de declaraciones, los mensajes electorales y electoralistas de unos y otros quedaron, al menos en apariencia, en un segundo plano durante unas horas. Y España, en un nuevo ejemplo de civismo democrático, el 9 de marzo fue a votar.

El Partido Socialista ganó las elecciones: 11,06 millones de votantes respaldaron su proyecto (38.000 más que cuatro años antes), un 43,64% del total (42,59% en 2004). El Partido Popular pudo proclamar el lugar común –ya manido en la aún breve historia democrática española- de que la suya fue una dulce derrota. Aumentó en más de 407.000 su base electoral, hasta alcanzar los 10,16 millones de votos, con un respaldo del 40,11%, frente al 37,71% obtenido en los convulsos comicios del 14-M. Los populares recortaron sustancialmente la distancia con el PSOE, pero no lo suficiente. Los resultados hicieron buenos los datos que ofrecían los sondeos previos: la ventaja socialista se situó en los 3,5 puntos porcentuales.

La lectura global y de trazo grueso es que la estrategia de los populares de promover una menor participación electoral alentando la abstención entre votantes volátiles del PSOE no funcionó (o al menos no lo bastante). Según reveló El País, los estrategas del PP estimaban que con una participación por encima del 75% del censo la victoria de los socialistas era prácticamente segura, pero si se situaba en torno al 70% las aspiraciones de Mariano Rajoy tomaban consistencia (El País, 1 de marzo de 2008). La participación, ese 9 de marzo, fue del 75,32%, sólo 34 centésimas porcentuales

menos que en los anteriores comicios, y la cifra total de votantes que optaron por el PSOE se incrementó.

La abstención no creció en términos absolutos, pero la distribución del voto sí se vio afectada sustancialmente. Y es que el Partido Popular alcanzó parte de los objetivos que buscaba con su estrategia de crispación durante la legislatura y con las medidas destinadas a los votantes tradicionales del PSOE. El PP consiguió desplazar al PSOE del centro político. Los resultados de las elecciones generales reflejan que el apoyo al PSOE de los votantes de centro (centro izquierda y centro derecha) se desinfló, mientras que se incrementó en el caso del PP. El Partido Popular, lejos de repeler al votante moderado con su dura oposición, aventajó a los socialistas en más de 10 puntos en voto captado entre el electorado de centro.

El socialista José Luis Rodríguez Zapatero consiguió repetir victoria, pese a perder el apoyo del centro, gracias a aumentar el respaldo entre los votantes situados más a la izquierda (González y Bouza, 2009). La distribución del voto funciona a modo de juego de vasos comunicantes y, aunque el Partido Popular parece que realmente logró su objetivo de sembrar las dudas suficientes como para llevar a la abstención a una parte del electorado tradicionalmente vinculado al PSOE, los socialistas ganaron por la izquierda. El discurso socialista de plantear los comicios como una elección dicotómica entre la derecha más rancia y la izquierda del futuro movilizó a simpatizantes de otras formaciones progresistas hacia el voto útil (Izquierda Unida perdió más de 321.000 votantes en relación a 2004). Efecto secundario de la crispación: el PP parece que consiguió desanimar a los votantes moderados que en 2004 apoyaron al PSOE, pero simultáneamente acabó por movilizar a los progresistas y a los nacionalistas que trataban de evitar la llegada de Mariano Rajoy a la Presidencia del Gobierno.

El Partido Popular tenía todo de cara para aprovechar el tema de la inmigración para la consecución de sus objetivos estratégicos. Se había convertido en unos de los temas emergentes de la agenda pública durante la legislatura, era motivo de preocupación para votantes de PP y PSOE, afectaba muy singularmente a votantes tradicionales de la izquierda (los que comparten con el inmigrante lugar de residencia y los que compiten por las mismas prestaciones sociales)... E incluso la medida estrella del PP en materia de inmigración, el contrato de integración, contaba con un respaldo notable en todo el electorado: según un sondeo de El País, publicado el 10 de febrero, el 56% de los españoles apoyaba la propuesta de obligar a los inmigrantes a asumir las costumbres españolas; y también lo hacía todo un 45% de los votantes del Partido Socialista.

Pero el Partido Popular no supo aprovechar este viento de cara y la medida tuvo poco recorrido. Tan sólo un día después de que Mariano Rajoy anunciara su propuesta de contrato de integración para inmigrantes, otro dirigente popular, Miguel Arias Cañete, hizo unas declaraciones que pusieron en jaque la posibilidad de sacar un verdadero rédito electoral con la medida. "Tenemos unas tensiones en el sistema de sanidad de las comunidades autónomas espectaculares, con las urgencias colapsadas porque los inmigrantes han descubierto la grandeza del sistema nacional de salud. Claro, alguien que para hacerse una mamografía en Ecuador tiene que pagar el salario de nueve meses llega aquí, a Urgencias, y se la hacen en un cuarto de hora", dijo Arias Cañete, que también criticó el crecimiento económico "de baja calidad" que propiciaban los inmigrantes, porque se trata de mano de obra "no tan cualificada como aquellos camareros maravillosos que teníamos, que les pedíamos un cortado, mi tostada con crema, lo mío con manteca *colorá*, y a mí una de boquerones en vinagre, y te lo traían todo con una enorme eficacia" (El País, 8 de febrero de 2008).

Según González y Bouza (2009), estas declaraciones “provocaron una importante polémica pública y destrozaron la viabilidad electoral del tema. Desde el punto de vista técnico, aquella intervención polémica del ex ministro Arias Cañete puede interpretarse como un auténtico *antipriming* (...) que anuló cualquier posibilidad seria de que el tema *inmigración* formara parte de la agenda partidaria de campaña del PP. (...) La frase de Arias Cañete hizo imposible el replanteamiento de Rajoy en los días siguientes: el tema desapareció”. Pero no para el PSOE que lo utilizó para denunciar la xenofobia que propalaban sus rivales, para caricaturizar hasta el extremo el derechismo del PP.

Consecuencia o no de cómo se desarrolló la campaña y del análisis que de ella pudo hacer la dirección socialista, lo cierto es que el nuevo Gobierno que salió de las elecciones de 2008 rediseñó el discurso que sobre la inmigración había mantenido el gabinete anterior. El presidente Rodríguez Zapatero optó por un cambio de caras y colocó como ministro de Trabajo e Inmigración a Celestino Corbacho, con un currículum de gestor más riguroso con la inmigración como alcalde de L’Hospitalet de Llobregat. Tras su llegada, la posición del Ejecutivo viró y se apostó por un progresivo endurecimiento de las políticas y de los mensajes.

Capítulo 6. **El ministro Corbacho y el giro del PSOE**

Una nueva legislatura arrancaba en 2008 y ya en sus primeros compases empezaba a quedar claro que la inmigración iba a tener un papel relevante (y diferente al de hasta entonces) en la política del nuevo Gobierno socialista. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunciaba la composición del nuevo gabinete y revelaba un mayor protagonismo para las políticas de extranjería: el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales cambiaba de membrete y se convertía en el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Había que demostrar que en inmigración no se miraba para otro lado, pero también que se podía ser tan duro en esta materia como predicaba el Partido Popular. El PSOE quería quitarse de encima la etiqueta de ser el partido del *papeles para todos*, y el elegido para comandar el nuevo departamento fue Celestino Corbacho. Curtido en la política municipal después de once años de concejal y catorce como alcalde de L'Hospitalet de Llobregat, un municipio barcelonés en el que más una cuarta parte de la población era de origen extranjero, Corbacho llegaba a Madrid con la vitola de duro con la inmigración ganada a pulso como primer edil y como presidente de la Diputación de Barcelona.

Habían pasado apenas 72 horas desde que tomara posesión del cargo, y el ministro de Trabajo e Inmigración concedía sus primeras entrevistas. Y lo hacía con una condición: no se hablaría en ellas de temas de empleo, porque aún tenía que ponerse al día; sólo respondería preguntas sobre inmigración, que era la materia que dominaba. Quedaba claro con qué objetivos había designado Rodríguez Zapatero a su nuevo ministro. (Pero la crisis económica le tenía reservados otros quehaceres al frente del Ministerio de Trabajo: Corbacho quería ser el ministro de la nueva política de

inmigración, pero se convirtió a la fuerza en el ministro que tuvo que lidiar con el problema de rebasar la cota de los cuatro millones de parados.)

Nuevo Gobierno, nueva política, nuevo discurso. Corbacho se convirtió en el portavoz casi exclusivo de todo lo que tuviera que ver con inmigración. Y en el nuevo Ejecutivo, todo o casi todo lo que tenía que ver con inmigración se había tornado un problema que resolver. Frente al discurso que siempre subrayaba los efectos positivos de la inmigración que había dominado el mandato de Jesús Caldera al frente del Ministerio de Trabajo en la anterior legislatura, Corbacho en sólo unos meses ‘abrió reflexiones’ (como le gusta decir) acerca de la necesidad de fomentar el retorno a sus países de los inmigrantes en paro, de “aproximar a cero” la contratación en origen, de endurecer los requisitos del reagrupamiento familiar de extranjeros porque “el Estado del Bienestar es finito”, de velar por los derechos de los españoles porque “las normas no las pone el último que se empadrona”... En paralelo, el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, abogaba por ampliar el plazo máximo de internamiento de los irregulares desde los 40 a los 60 días, y el Gobierno y el PSOE en su conjunto respaldaron firmemente la Directiva de Retorno de la Unión Europea (la *directiva de la vergüenza*, según la bautizaron sus detractores), que daba vía libre a los Estados miembro para elevar hasta los 18 meses el plazo de retención de *sin papeles*.

Algo había cambiado en las formas y en el fondo del discurso del Gobierno socialista en torno a la inmigración. Y todas estas *reflexiones* sobre cómo afrontar el fenómeno acabaron plasmándose en diferentes decretos y también en una nueva Ley de Extranjería, la sexta de la democracia, aprobada a finales de 2009. El nuevo Ejecutivo y el PSOE parecían decididos a no ceder al Partido Popular la posibilidad de explotar en solitario el discurso de dureza con la inmigración. Las elecciones se habían saldado con un PP que, con su mensaje de crispación y su retórica reactiva con la inmigración, se había hecho fuerte entre los votantes de centro y había conseguido alejar a los

socialistas del electorado moderado. El PSOE, con el (repentino) endurecimiento de su discurso sobre el fenómeno inmigratorio, personificado en el ministro Corbacho, trataba de pulsar la tecla de la mano dura en esta materia que podría encontrar simpatías, como hemos visto, en todo el espectro ideológico del electorado. El objetivo fundamental, e ineludible, de los socialistas era remontar la debilidad estratégica con que iniciaban la legislatura y recuperar su base electoral entre el centro y el centro izquierda.

El Ejecutivo expresaba su nuevo mensaje endurecido casi exclusivamente por boca de Celestino Corbacho, mientras el resto del gabinete –y muy singularmente el presidente Rodríguez Zapatero- no se *manchaba* con un discurso que podría llegar a disgustar a parte del electorado más izquierdista. Así, en caso de que el Partido Popular recuperara la versión más extrema de su discurso antiinmigración (como posteriormente sucedió con motivo de las elecciones autonómicas catalanas en 2010) el resto del Gobierno socialista podría mantener sus tradicionales ataques contra los populares por situarse en posiciones cercanas a la extrema derecha y defender postulados próximos al racismo y la xenofobia.

Oficialmente, no había cambio de política sobre inmigración con el nuevo Gobierno. Lo decía Corbacho: “El primer día ya le expresé a Zapatero mi voluntad de continuar la excelente labor llevada a cabo hasta el momento” (El País, 20 de julio de 2008). Y lo decía incluso Caldera: “La fórmula sigue siendo la misma: máxima firmeza en la defensa de la legalidad y máxima firmeza en la integración” (El País, 20 de julio de 2008).

Pero incluso en el marco de esta negación de que hubiera una política rectificadora, se introducía un matiz significativo. Consuelo Rumí, entonces secretaria de Estado de Inmigración y eslabón entre las dos administraciones (la de antes y la de después de

las elecciones), aseguraba: “No hay una nueva política. Estamos desarrollando una política flexible, capaz de adaptarse a las circunstancias, que éstas sí son nuevas” (El País, 20 de julio de 2008). Y esas nuevas circunstancias se llamaban crisis económica. La crisis aún estaba en una fase muy incipiente, pero se adivinaba un empeoramiento de la coyuntura económica y, sobre todo, de los datos de empleo. El Ejecutivo admitía que su política de inmigración vendría condicionada por las *nuevas circunstancias*. Pero lo preocupante es que parte del nuevo discurso y algunas de las medidas que se adoptarían podían llegar a transmitir el mensaje peligroso y falaz de que existía una relación de causalidad entre la inmigración y los problemas económicos y, en concreto, con el desempleo (Page, 2009).

En cualquier caso, la realidad de la nueva política, y la personalidad del nuevo ministro, admitían pocas formalidades. Y Corbacho pretendió ser claro desde un primer momento. “La política de Jesús Caldera fue magnífica, pero ya está amortizada. Yo vengo del mundo de la realidad [en referencia a su anterior cargo de alcalde] y hay dos discursos que no sirven para nada: los discursos de salón teóricos y los de ‘yo en 48 horas lo resuelvo todo’” (Celestino Corbacho, El País, 6 de septiembre de 2008). “Yo siempre he sido realista y he hablado con mucha claridad. Cuando identificas problemas o medidas para resolverlos, puede entenderse como sinónimo de dureza. Pero no haré políticas duras o blandas. A mí me pesa mucho todavía la cultura del alcalde –nosotros gobernamos pegados a la realidad- y quizá mi primera puesta en escena tiene más que ver con la personalidad de un alcalde que con la de un ministro” (Celestino Corbacho, El Mundo, 28 de abril de 2008).

Y es que, aunque en ocasiones dijera que no, Corbacho trataba de marcar distancias con su antecesor. “Yo no creo que haya habido un endurecimiento del discurso. Lo que posiblemente he puesto de manifiesto es mayor claridad. En lugar de explicar la letra pequeña, la he puesto en mayúsculas. El ministro Caldera ha hecho una buena

política en materia de inmigración. Pero se ha visto poco. Nunca hay dos ministros que hagan la misma política. Yo no haré una ruptura, haré una continuidad de las políticas de Jesús Caldera, pero les pondré mi acento. Y les pondré mi personalidad y, por qué no decirlo, les pondré también mi opinión” (Celestino Corbacho, El País, 20 de abril de 2008). Y lo hizo.

6.1 Crisis e inmigración: más retorno y menos contratación en origen

En su discurso de investidura como presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo inalterada su posición en torno a los efectos positivos que para la economía tenía la inmigración, insistió en sus críticas contra los que veían en la llegada de extranjeros un problema, y subrayó su intención de continuar con su empeño de endurecer el control de las fronteras y de combatir la inmigración ilegal. Pero introdujo un nuevo matiz. Con los datos de desempleo ya creciendo, su Gobierno pondría en marcha fórmulas para facilitar el regreso a sus países de origen de los inmigrantes que quedaran en paro.

“Tendremos, en fin, que promover fórmulas nuevas que incentiven a los inmigrantes que puedan perder su trabajo en los próximos meses a volver a su país para desarrollar allí definitivamente su vida. La capitalización de la prestación de desempleo que hayan generado o la concesión de microcréditos son vías a explorar por el Gobierno con carácter inmediato”, dijo Rodríguez Zapatero en el debate de investidura.

En el contrato de integración que propuso el Partido Popular en la campaña electoral se recogía el regreso a su país del extranjero en paro como un compromiso obligatorio para el inmigrante. El nuevo Gobierno hablaba de incentivar ese retorno, de facilitarlo, y de que fuera con carácter voluntario. Pero los mensajes con que el Ejecutivo fue articulando este nuevo programa de retorno, singularmente por boca del ministro

Corbacho, permitían establecer una relación entre crisis e inmigración, entre el paro y la necesidad de que los extranjeros se marcharan. “No hemos cambiado, como se ha dicho, la política de inmigración, sino que hemos ajustado algunos parámetros en función de la situación de desaceleración económica que vive España” (Consuelo Rumí, *El Mundo*, 25 de junio de 2008). Durante la anterior legislatura, el Gobierno ya incentivaba el regreso de inmigrantes en paro, pero no se consideró una política a incluir como una de las partes del discurso socialista en torno a la inmigración. Caldera no quiso *vender* esta política, el nuevo ministro sí lo hizo.

El Consejo de Ministros aprobó en septiembre de 2008 el decreto ley que ponía en marcha el nuevo programa de retorno voluntario. Los inmigrantes que quedasen en paro podrían reclamar la capitalización del seguro de desempleo en dos pagos si regresaban a su país, renunciaban a sus permisos de trabajo y residencia, y se comprometían a no regresar a España en el plazo de tres años. A pesar de las múltiples *reflexiones* (en la práctica, anuncios) de Corbacho desde su toma de posesión ésta fue la primera iniciativa legislativa en materia de inmigración del nuevo Gobierno.

Desde el Ejecutivo se trasladaba, en cualquier caso, que su nueva y publicitada política de retorno tenía muy fundamentalmente un carácter humanitario, de ofrecimiento de ayuda al extranjero que perdía su empleo. “Si el tema del empleo se quiebra se debe facilitar que el [inmigrante] que quiera retornar a su país pueda hacerlo” (Celestino Corbacho, *El País*, 14 de abril de 2008). “No tratamos de coger a una persona en paro y mandarla a su país sin más. Queremos preservar sus derechos y darle dos oportunidades: la de establecerse en su tierra y la de volver a España en el futuro” (Celestino Corbacho, *El País*, 15 de junio de 2008). “Vamos a hacer que toda aquella persona que pueda capitalizar el paro, que pueda recibir una ayuda, antes de ir al desespero porque no tiene una situación económica boyante, tenga la oportunidad

de volver a su país. Y a aquel que no lo haga o no lo pueda hacer, pues deberemos darle el mismo tratamiento que a cualquier trabajador que se queda en paro, que es ayudarle y facilitar las cosas para que pueda recolocarse en otro sector” (Celestino Corbacho, El País, 20 de abril de 2008). “El objetivo es favorecer el desarrollo de los países de origen, exportadores de inmigrantes, mediante el retorno de personas cualificadas, con experiencia profesional y también con ciertos recursos para continuar trabajando allí”, (María Teresa Fernández de la Vega, El Mundo 19 de julio de 2008).

El Gobierno socialista reservaba su discurso más crudo para su pretensión de recortar la entrada de nuevos inmigrantes al país. Corbacho se sumaba a las voces que apuntaban que “En España tenemos hoy un número de inmigrantes importante” (El Mundo, 27 de octubre de 2008), y abogaba por cerrar el grifo de la llegada por vías legales de más extranjeros. Para ello, volvía de nuevo a fijar una relación entre inmigración y crisis económica.

“Si tienes inmigrantes parados en tu país y sus perfiles se corresponden con las necesidades de empleo, parece razonable que des empleo a los que están parados aquí. Me parecería una contradicción tener parados en el país, que sus perfiles profesionales pudieran ser susceptibles de contratación, y que te fueras a promover una política de contratación en el extranjero” (Celestino Corbacho, El País, 20 de abril de 2008). “Las necesidades [de empleo] deben ser cubiertas primero por la gente que ya está en el país. Siempre será mejor que un parado de la construcción puede reubicarse en una demanda interior que no ir a contratar en origen”, explicaba Corbacho apenas unas semanas después de ponerse al frente del Ministerio de Trabajo (El Mundo, 28 de abril de 2008). Meses después, fue mucho más explícito. “El año que viene se revisará el catálogo de contrataciones en origen, más de 88.000 en lo que va de año. No habrá un catálogo tan generoso y amplio. Este ministro propondrá en su momento al Consejo de Ministros que ese catálogo se aproxime al

punto cero, salvo las excepciones que requieran determinadas ocupaciones por su especialización técnica y el respeto a los convenios firmados con otros países” (El Mundo, 4 de septiembre de 2008). “La contratación en origen debe aproximarse a cero (...) No parece razonable que con 2,5 millones de parados sigamos recurriendo a la contratación en origen” (El País, 4 de septiembre de 2008).

Desde Moncloa se reconvino a Corbacho por sus palabras, que habían sonado demasiado duras. El ministro matizó sus declaraciones, pero apenas fue un intento de suavizarlas. “Algo debí decir mal, uno nunca es perfecto a la hora de explicarse, pero yo no he dicho que se vaya a suprimir la contratación en origen, porque soy defensor de ella y dije que se respetarán todos los convenios internacionales firmados”, indicó Corbacho (El País, 6 de septiembre de 2008).

Pero la política anunciada era la que era: “[La contratación en origen] siempre que haga falta y siempre que las personas que están en paro en España hayan tenido la oportunidad, sin distinción de origen, de acceder a las pocas o muchas ofertas de trabajo” (Celestino Corbacho, El País, 6 de septiembre de 2008). “Hay dos millones y medio de parados en España, esto nos tiene que llevar a una reflexión: veamos qué cualificación tienen las personas que están en paro y encontremos alternativas (...) parece razonable que aquellos puestos que podamos cubrir con personas que están aquí” (Celestino Corbacho, El País, 5 de septiembre de 2008). “Hay que conseguir que todo lo que se pueda contratar con los recursos disponibles de trabajo en España se contrate. Ésa es la preferencia y sólo lo que se necesite traer de fuera se traería” (Miguel Sebastián, El País, 7 de septiembre de 2008).

En la práctica, desde que el impacto de la crisis en el empleo se hizo patente, el Gobierno fue reduciendo año tras año el contingente de extranjeros contratados en origen y también el catálogo de profesiones de difícil cobertura que permite la

contratación directa de extranjeros. “Nuestro mercado laboral no aguanta más inmigración, salvo que se necesite de manera especializada. Entre otras cosas, porque tenemos 500.000 parados inmigrantes (...). Las contrataciones en origen se han suprimido en un 96%” (Celestino Corbacho, El Mundo, 18 de mayo de 2009). “La contratación en origen tiene que ir en relación con el mercado laboral, y en momentos en que crece el desempleo en las proporciones que lo hace, parece razonable que tengamos menos necesidad de contratar en origen (...) Ahora el objetivo es que toda la contratación que el mercado necesite hay que buscarla primero en el mercado español. (...) Yo, de todas formas, no creo en ese tipo de políticas demagógicas según las cuales hay que tener un espíritu abierto, solidario, y que venga todo el mundo para que pueda tener una oportunidad. La inmigración tiene que ser siempre en relación con el mercado de trabajo, y deben venir quienes caben en el mercado de trabajo” (Celestino Corbacho, El Mundo, 27 de octubre de 2008).

6.2 La reagrupación y el Estado del Bienestar

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero armó su nueva política sobre inmigración en torno a una nueva reforma de la Ley de Extranjería, la cuarta en menos de una década. El Consejo de Ministros aprobó la nueva norma en junio de 2009, el Congreso dio su visto bueno (con los votos de PSOE, CiU y Coalición Canaria) al texto en noviembre, y la ley entró en vigor en diciembre. La nueva Ley de Extranjería incluía varios aspectos que implicaban una ampliación de derechos (los hijos de inmigrantes obtenían el permiso de trabajo automáticamente a los 16 años, las extranjeras en situación irregular obtendrían un permiso de residencia provisional en caso de ser víctimas de violencia de género...), pero endurecía dos ámbitos para favorecer la expulsión de irregulares y contener la llegada de más inmigrantes a través de reagrupación.

Por un lado, el Ministerio del Interior consiguió incluir en el articulado una ampliación del periodo de internamiento de los inmigrantes sin papeles de 40 a 60 días para facilitar su expulsión (por lo general, el plazo de 40 días no era suficiente para realizar los trámites de devolución a su país de origen y había de ser liberado). (*) Por otro, una de las propuestas sobre las que más insistió Celestino Corbacho desde su llegada a Trabajo también fue recogida en el texto: la nueva Ley de Extranjería restringía la reagrupación familiar para los ascendentes, que ya sólo podrían promoverla extranjeros residentes durante cinco años en España (hasta entonces con un año era suficiente) y sólo podrían acogerse los padres mayores de 65 años.

Se buscaba evitar así las reagrupaciones en cadena –cada reagrupado podría asimismo reagrupar un año después de su llegada- y evitar una saturación de un mercado de trabajo que mostraba claros síntomas de agotamiento –de ahí que los padres que vinieran tuvieran que estar ya en edad de jubilación- (Aja, 2010). Sin embargo, el discurso oficial del Gobierno vinculaba las restricciones al reagrupamiento familiar no tanto con los problemas del mercado laboral como con la necesidad de salvaguardar el Estado del Bienestar. Se daba alas a las percepciones negativas que vinculan al inmigrante con un mayor acceso a los servicios públicos, en detrimento de los nacionales. Si se restringe la reagrupación porque, según el discurso del ministro Corbacho, la capacidad de los servicios públicos no es ilimitada, se da a entender al ciudadano que los problemas del Estado del Bienestar pueden tener su origen en el gran número de inmigrantes. “Un país en el que existe un contingente importante de inmigrantes no puede subsistir con un Estado del Bienestar diseñado a la medida de cuando no los había”, (Celestino Corbacho, El País, 20 de abril de 2008). “El Estado del Bienestar no se puede estirar hasta el infinito” (Celestino Corbacho, El País, 20 de julio de 2008).

(*) El Ministerio del Interior también se vio implicado durante la legislatura, en concreto entre febrero y marzo de 2009, en otro asunto relacionado con el endurecimiento de la política de inmigración. En varias comisarias se establecieron cupos mínimos de detenciones de inmigrantes irregulares. Desde Interior se achacó la instrucción a un error operativo y, alternativamente, se negó la existencia de tales órdenes por parte de altos cargos de la Policía o del Ministerio.

“Si de aquí a cuatro o cinco años se incrementa la población por el proceso de reagrupación en más de un millón de personas, cosa que pasaría sin ningún género de dudas, podría entrar en riesgo del Estado del Bienestar” (Celestino Corbacho, El Mundo, 18 de junio de 2008). “En estos momentos, los conceptos socioeconómicos y laborales que se le piden a la persona que reagrupa a otras son muy débiles (...) La reagrupación familiar tiene una idea básica, que es potenciar el núcleo familiar y consolidar la estructura de la familia, pero para eso hay una condición *sine qua non*: que quien reagrupa tenga las condiciones mínimamente adecuadas para garantizar que esa familia no se va a desestructurar, sino todo lo contrario” (Celestino Corbacho, El País, 1 de julio de 2008).

6.3 Corbacho y el último en empadronarse

Durante la anterior legislatura y, sobre todo, durante la campaña electoral de las generales de 2008, una de las consignas que rigieron en el discurso del Gobierno y del PSOE sobre la inmigración era la defensa de la igualdad de derechos y de acceso a los servicios públicos, así como de una especie de igualitarismo cultural. Desde las filas socialistas en campaña se atacaba con dureza los intentos del Partido Popular de establecer una relación entre inmigración y saturación de los servicios, y entre inmigrante y conflicto cultural por falta de interés en la integración. El nuevo Ejecutivo socialista se deslizó, en ocasiones, hacia el discurso hasta entonces exclusivo de los populares. Con menos alharacas, sí, pero contenido similar.

El ministro Corbacho repitió con insistencia durante todo el tiempo que estuvo al frente del departamento de Trabajo una frase que pretendía, así lo decía él, estar cargada de realismo y sentido común. “El fenómeno de la inmigración no puede funcionar nunca con las normas del último en empadronarse” (Celestino Corbacho, El País, 14 de abril de 2008). Lo dijo recién aterrizado en el Ministerio y llegó a convertirse, a base de

insistencia, en un auténtico mantra de su política migratoria. “Ni la escalera, ni la ciudad, ni el barrio pueden funcionar nunca con la norma del último que se empadrona” (Celestino Corbacho, El País, 13 de abril de 2008).

Todos, inmigrantes y nacionales, con los mismos derechos, decía Corbacho, pero sobre todo, subrayaba, con las mismas obligaciones. “Diversidad no quiere decir que se tenga que perder calidad de vida ni que se tenga que retroceder en aquellas normas de las que democráticamente nos hemos dotado todos (...) La inmigración cuando llega a España tiene y debe de llegar con todos los derechos y las obligaciones, como cualquier ciudadano” (Celestino Corbacho, El País, 3 de marzo de 2010). “Somos ciudadanos y debemos compartir los mismos derechos. Y las mismas obligaciones, ¿eh? Las dos cosas. Derechos y obligaciones” (Celestino Corbacho, El País, 20 de abril 2008). “Hay que conseguir que las normas de funcionamiento del barrio no sean impuestas por el último que se ha empadronado. Si el barrio se cierra y el funcionamiento se basa en el colectivo mayoritario que ha llegado, se crean guetos. Eso hay que combatirlo con normativa: usted viene a este país y los derechos son los mismos de cualquier ciudadano, pero las obligaciones también” (Celestino Corbacho, El Mundo, 28 de abril de 2008).

Y si, como hemos visto, restringiendo el reagrupamiento familiar se buscaba evitar problemas en el Estado del Bienestar, para Corbacho estaba claro que *el último que se empadrona* no podía ser beneficiario de mayores ayudas. “Si antes había diez personas con derecho a una beca de comedor y ahora son veinte, no podemos llevar la política de dársela a los últimos diez que han llegado” (Celestino Corbacho, El País, 14 de abril de 2008). “El Estado del Bienestar se debilita, a no ser que el Estado le inyecte más economía. Si no lo hace, puede correr el riesgo de que el que llega se lleve la parte del Estado del Bienestar y el que está aquí, cuya situación económica no ha cambiado, pero el que ha venido la tiene peor, deje de recibir aquello que el Estado

del Bienestar le ha estado dando. Y de ahí al conflicto hay dos pasos” (Celestino Corbacho, El País, 20 de abril de 2008).

6.4. Un PP confundido con el giro

El Partido Popular se encontró desde el inicio de la nueva legislatura con un PSOE que buscaba ocupar un terreno político que hasta las elecciones los socialistas le habían dejado expedito. El Gobierno en parte dejaba sin discurso a los populares en materia de inmigración con su renovado endurecimiento de las políticas y de los mensajes personificado en el ministro Corbacho.

La primera reacción del PP fue la crítica. ¿Pero la crítica a qué? En realidad, a todo. Los populares trataban de sacar los colores al Ejecutivo socialista tanto por el endurecimiento de su política como, al mismo tiempo, por su laxitud; y en otros momentos se alababa el discurso de Celestino Corbacho para afejar los de otros dirigentes socialistas. El Partido Popular lo mismo criticaba al PSOE por no reconocer su cambio de política como por quedarse corto en muchas materias. Pero eso sólo fue al principio de la legislatura. En la segunda parte del periodo, como veremos más adelante, el PP consiguió arrogarse de nuevo el papel de duro con la inmigración retomando su discurso más radical sobre extranjería en la precampaña y en la campaña de las elecciones autonómicas catalanas de noviembre de 2010.

Hasta entonces, se criticaba todo. Se criticaba las maneras endurecidas del nuevo Ejecutivo. “Han hecho un cambio radical y me parece absurdo que no lo reconozcan (...) Han pasado del papeles para todos de Caldera al maletas para todos de Corbacho”, ironizó Rafael Hernando, portavoz del PP de Inmigración en el Congreso (El País, 20 de julio de 2008). “Corbacho intenta responsabilizar a los inmigrantes de la situación económica de España”, afeó el mismo parlamentario (Rafael Hernando, El

Mundo, 5 de septiembre de 2008). “El Gobierno se inventó aquello de papeles para todos. Ahora están de moda las cacerías [de inmigrantes por parte de la Policía], las cacerías se han realizado en las calles de Madrid” (Mariano Rajoy, El País, 17 de febrero de 2009).

Y en otras ocasiones desde el PP se celebraban los mensajes rigurosos de Corbacho si con ello se conseguía afejar a otros miembros del Gobierno. El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, llegó ofrecer a Corbacho “apoyo firme, incluso parlamentario, frente a la vicepresidenta del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega”. Las palabras de Corbacho eran, para González Pons, el único intento de “poner sentido común a la política de inmigración del Gobierno”. “Nos gustan las políticas de inmigración sensatas que había empezado a apuntar el ministro Corbacho” (El País, 7 de septiembre de 2008). Del mismo modo, el consejero de Interior y Justicia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, agradecía a Corbacho su “giro de 180 grados en las políticas de inmigración (...) Ha expuesto la situación de una forma que no habíamos oído nunca a lo largo de la anterior legislatura” (El Mundo, 10 de julio de 2008).

En paralelo, y muy sustancialmente, el Partido Popular seguía criticando a un PSOE que se quedaba corto con su política de inmigración, y más en un contexto de crisis como el que ya se empezaba a hacer evidente. El PP no quería dejar de ser la formación política con un discurso más claramente duro con la inmigración. “Hay que reformar ya la política de inmigración (...) Ya empezamos a ver algunas cosas que no son buenas en algunos lugares de España: hay 180.000 extranjeros cobrando el seguro de desempleo. Y volvemos a tiempos pasados: ya hay 20.000 andaluces que han pedido trabajo en la vendimia francesa”, llegó a decir Mariano Rajoy (El Mundo, 16 de septiembre de 2008), aunque un día después trató de matizar sus palabras explicando que simplemente pretendía resaltar que la política económica del Ejecutivo

generaba paro entre los extranjeros y los nacionales. El Gobierno, para el PP, no resolvía los problemas, “como la entrada masiva de inmigrantes (...) [Al Gobierno] se le va la fuerza por la boca y mientras sigue con los brazos cruzados, el desempleo sigue creciendo” (Rafael Hernando, El País, 2 de octubre de 2008).

La tramitación de la nueva Ley de Extranjería, pese a que endurecía sus términos en determinadas materias, fue aprovechada por el PP para centrar sus críticas sobre la laxitud del Ejecutivo con la inmigración. Durante el debate en las Cortes para la aprobación de la nueva Ley de Extranjería, el Partido Popular trató de introducir enmiendas que implicaban mayores restricciones que las ya incluidas por el PSOE en el articulado. Según los populares, la nueva norma persistía en todos los errores cometidos para controlar el fenómeno.

“Estamos ante una ley meramente cosmética que perpetúa los principales defectos de la regulación que hizo el anterior ministro, Jesús Caldera (...) El proyecto sigue sin prohibir las regularizaciones masivas y desprecian el sistema de regularización caso a caso (...) Nada impide la llegada masiva de cientos de miles de inmigrantes cada año sin control, lo que dificulta su integración” (Rafael Hernando, El País, 18 de septiembre de 2009). “España no puede seguir soportando la llegada de cientos de miles de inmigrantes cada año (...) Hace tiempo que nuestro país ha rebasado su capacidad de acogida (...) El Gobierno consagra el sistema de inmigración masiva” (Rafael Hernando, El País, 21 de julio de 2009).

Para el Partido Popular, que denunció el efecto llamada que provocaba la política de papeles para todos que supuestamente abanderaba el anterior Gobierno socialista, ahora alertaba de que el endurecimiento en el discurso del Ejecutivo era igualmente origen de ese efecto llamada. Tanto daba. “Cuando estás en una política de anuncio, al final provocas un efecto llamada (...) Si dices que no vas a dejar entrar a los padres

de los inmigrantes, lo lógico es que lleguen más. No hay Plan Retorno que valga” (Rafael Hernando, El Mundo, 10 de octubre de 2008).

El giro en el discurso del Gobierno en torno a la inmigración quedó consagrado con la aprobación de la nueva Ley de Extranjería. La normativa no era regresiva en materia de derechos ni endurecía especialmente los términos de la estancia y permanencia en el país de los inmigrantes. Pero el Ejecutivo trató de que se vieran lo más posible los aspectos más restrictivos del articulado, singularmente los requisitos más estrictos impuestos para la reagrupación familiar. La nueva ley exigía al extranjero que quería traer consigo a sus padres una estancia previa de cinco años en España (hasta entonces con un año era suficiente) y los progenitores debían ser mayores de 65 años.

El Gobierno, que por boca de Celestino Corbacho aseguró que se intentaba frenar la llegada de otro millón de inmigrantes por la vía de la reagrupación, hacía un guiño así a los ciudadanos preocupados por la entrada de más extranjeros en el país y por los efectos que para el mercado laboral podría llegar a tener la reagrupación de ascendientes en edad de trabajar (de ahí que tengan que ser mayores de 65 años). En muchos aspectos, el PSOE se dedicó a combatir por igualación el discurso del PP contra la inmigración. Trataba de emular la dureza en el mensaje de los populares y dejar de ser el partido del *papeles para todos*, lo que en la práctica conllevaba que los votantes (también los votantes socialistas) percibieran que en el debate sobre la inmigración el PP tenía razón.

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero regaló, en 2008, a todos sus ministros un ejemplar de *No pienses en un elefante*, de George Lakoff (2007). Escrito a modo de pequeño manual para miembros y simpatizantes del Partido Demócrata

estadounidense, este libro busca ser un llamamiento a la izquierda a no utilizar los marcos ideológicos de la derecha para evitar que la visión conservadora se perciba como natural e incluso neutral. El Gobierno socialista no ha seguido los consejos de Lakoff en materia de inmigración. Al menos no en la primera mitad de la legislatura que arrancó en 2008.

Aunque desde el PSOE se siga atacando (según la terminología socialista) el discurso xenófobo, de extrema derecha y demagógico de los populares, el endurecimiento de políticas y mensajes en que el Gobierno se embarcó desde 2008 da a entender al ciudadano que la mano dura es la única vía para controlar el fenómeno migratorio. Que el Ejecutivo socialista opte por construir un nuevo discurso restrictivo con el que vincula inmigración y crisis económica, que conecta inmigración y los problemas de los servicios públicos, tiene como consecuencia que se dé mayor verosimilitud a las advertencias lanzadas machaconamente desde las filas del PP y que parezca que se avalan las políticas propuestas por los populares. El giro en inmigración del PSOE impulsa las posibilidades del PP en este terreno. El barómetro del CIS reflejaba ya en octubre de 2010 [ver tabla 2.3] que la política de inmigración se había convertido en una de las tres únicas materias en que una mayoría de españoles percibe al Partido Popular como mejor preparado para gestionarlas.

Capítulo 7. El padrón de Vic y las elecciones autonómicas catalanas de 2010

España es el único país del mundo en que los inmigrantes en situación irregular pueden y deben empadronarse. Su inscripción en el padrón, para su cuantificación por el Instituto Nacional de Estadística (INE), permite tener una imagen más certera de la población real de los municipios. Mientras que el resto de países sólo tienen un conocimiento cierto de su población con autorización de residencia legal, España consigue (aunque con fallos difíciles de solventar) una radiografía más fidedigna del volumen poblacional al incluir a todos los residentes con independencia de que se encuentren en situación irregular.

Incluir a los inmigrantes sin papeles en el padrón municipal es uno de los factores que hace que España aparezca en las estadísticas de la Unión Europea como uno de los países que tiene mayor proporción de población extranjera, en comparación con otros estados miembro con una mayor tradición en recepción de inmigrantes, pero que no incluyen en sus datos a los irregulares o que otorgan la nacionalidad más fácilmente (Page y García Mayo, 2010b). Conocer con mayor exactitud la cifra de residentes en cada municipio debería permitir, en principio, una asignación de recursos más correcta para la prestación de servicios públicos. Que estos servicios públicos presenten deficiencias y carencias no es tanto por el empadronamiento de irregulares como por los problemas que presenta la financiación autonómica y local, y por la mayor o menor voluntad política y compromiso de las autoridades con estos servicios (García Mayo y Page, 2010a).

En cualquier caso, la aparente incongruencia existente por la obligación de expulsar del país a los inmigrantes irregulares, al tiempo que se ordena a los ayuntamientos su

inscripción en el padrón, ha abierto otra veta en el debate político en torno a la inmigración. Desde 1997 es obligatorio el empadronamiento de irregulares y desde 2000 el padrón da acceso, entre otros servicios, a la sanidad y la educación. Ambas medidas fueron aprobadas con gobiernos del Partido Popular y, sin embargo, han sido los populares los que más han dado la batalla desde el año 2010 sobre la necesidad de reformarlas. El debate no lo abrió el PP, pero es la formación que más lo ha aprovechado.

La polémica sobre el empadronamiento de los inmigrantes sin papeles la abrió el Ayuntamiento de Vic, gobernado en coalición por CiU, PSC y ERC y en el que tiene presencia la formación ultraderechista y abiertamente xenófoba Plataforma per Catalunya (PxC). El consistorio de la localidad barcelonesa, con 38.000 habitantes de los que un 24% son inmigrantes, aprobó el 8 de enero de 2010 una modificación de los requisitos de empadronamiento en el municipio para impedir la inscripción de los inmigrantes en situación irregular. El 21 de enero la Abogacía del Estado emitía un dictamen en que recordaba que todos los ayuntamientos están obligados a inscribir a todos los residentes, irregulares o no. Un dictamen que el Ayuntamiento de Vic acató.

El conflicto de Vic duró de facto dos semanas. Sólo dos semanas transcurrieron desde que el equipo de gobierno tripartito decidió cerrar el padrón a los sin papeles y volvió a abrirlo. La medida fue rápidamente abortada, pero la polémica que suscitó sirvió para llamar la atención de los problemas de algunos ayuntamientos para hacer frente a los servicios públicos en plena crisis. Pero en lugar de iniciarse un debate sobre la financiación de las entidades locales y en torno a qué servicios públicos se aspira, el debate se centró en la relación de la inmigración con ambos asuntos.

Fueron dos semanas, sí, pero el aluvión de declaraciones y posicionamientos por parte de todos los partidos fue tal que se hacía difícil finiquitar la polémica. Sobre todo

porque se engarzó con un muy temprano comienzo de la precampaña de las elecciones autonómicas en Cataluña. El Partido Popular de Cataluña presentó las líneas maestras de su campaña electoral (entre las que figuraba muy singularmente un endurecimiento de la política de inmigración) en plena polémica del padrón de Vic, nada menos que diez meses antes de los comicios, fijados para el 28 de noviembre.

El Partido Popular, que en Cataluña no encuentra ni mucho menos el respaldo electoral que consigue en el resto de España, hizo de la mano dura con la inmigración una de las banderas de su campaña para los comicios autonómicos. Sin poder competir en catalanismo con el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) ni mucho menos con la nacionalista Convergència i Unió (CiU), los populares optaron por dar un papel primordial en su estrategia electoral al control de la inmigración y a dar solución a los eventuales problemas de convivencia entre extranjeros y autóctonos.

El PPC se disputaba ese espacio electoral (además de con pequeñas formaciones ultraderechistas, como la emergente PxC) con CiU, que también ha articulado durante los últimos años un discurso de máximo rigor con la inmigración. De hecho, los barómetros del CIS revelan que son los votantes de CiU los que proporcionalmente más identifican la inmigración como un problema [ver tablas A.2.2 y A.2.3 en el Anexo], lo que convertía los mensajes sobre el tema en un verdadero desafío en las elecciones del 28N. Desafío para la coalición nacionalista, que tenía que mantener la fidelidad de esos votantes reacios a la inmigración. Y desafío para el PPC, que aunque tenía difícil arrebatar apoyos a CiU (dada la vinculación de los populares con el centralismo español) sí podía evitar que la desbandada de electores que se preveía que iba a sufrir el PSC se tradujera en un gran trasvase de votos hacia los nacionalistas. Explotando el tema de la inmigración, el Partido Popular podía captar parte de esos votantes desencantados con un PSC agotado por los dos gobiernos tripartitos y la crisis económica; y, sobre todo, podía azuzar la abstención en las filas socialistas.

La negativa del Ayuntamiento de Vic a empadronar irregulares dio el pistoletazo de salida a una larguísima precampaña en Cataluña. Una precampaña en la que la confrontación partidista en torno a la inmigración no se circunscribió al ámbito autonómico, sino que tuvo amplia presencia en la política nacional. Mientras el PP mantenía inalterado su discurso reactivo sobre la inmigración (con mucha dureza en algunos aspectos), el PSOE y el Gobierno fundamentalmente reorientaban su discurso de la primera parte de la legislatura para volver a afear el comportamiento de los populares y achacarles actitudes próximas a la extrema derecha xenófoba.

En cualquier caso, 2010 dio para mucho, tanto para populares como para socialistas. Las ejecutivas nacionales de uno y otro partido, y cargos públicos (singularmente alcaldes) de las dos formaciones, dieron cal y arena en materia de inmigración. Las reacciones ante la polémica sobre el empadronamiento de irregulares, la multitud de mociones en ayuntamientos y también en el Senado contra el uso del burka en lugares públicos, el aluvión de propuestas y contrapropuestas (nuevas o ya conocidas) sobre cómo abordar la integración de los nuevos ciudadanos... Todo político parecía que tenía algo que decir al respecto, y no siempre acorde con los posicionamientos oficiales de sus partidos. Lo mismo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, ambos del PP, se desmarcaban de la posición oficial de su partido y construían un discurso propio de empatía con el inmigrante, que la alcaldesa socialista de Cunit (Tarragona) y también la senadora, Judit Alberich, amagaba con llevar una moción *antiburka* al Senado. Cada uno en función de sus necesidades electorales en un nuevo contexto: en las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011 (que coinciden con comicios autonómicos en trece comunidades) estaban convocados a las urnas también centenares de miles ciudadanos de los países de la Unión Europea y también de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú

y República de Cabo Verde. Y mientras algunos candidatos necesitan sumar a parte de esos nuevos electores inmigrantes (o al menos no enfrentarse abiertamente a ellos), otros juegan a lo seguro y tratan de amarrar su electorado tradicional, aunque sea a costa de exaltar los problemas de integración en lugar de abordarlos sin alharacas, no necesariamente en negativo, y trabajar por su resolución.

7.1 Vic y el largo viaje de precampaña

7.1.1 El PP, a río revuelto

Hasta principios de 2010, Vic era conocido fundamentalmente por sus embutidos y por su precioso centro urbano, dominado por su magnífica Plaza Mayor. Desde entonces, el nombre del pueblo barcelonés, capital de la comarca de Osona, ha quedado vinculado al intento de algunos políticos de solventar por la *vía rápida* los retos del fenómeno de la inmigración. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vic, integrado por CiU, PSC y ERC, acordó dejar de inscribir en su padrón a los inmigrantes en situación irregular, contraviniendo la legislación en vigor, en un intento de llamar la atención sobre los problemas para afrontar la financiación y la gestión de determinados servicios municipales.

El consistorio solicitó a la Abogacía del Estado una aclaración sobre si, en efecto, podría negar el empadronamiento a los extranjeros sin papeles. El informe jurídico dictaminó que ningún ayuntamiento podía negar la inscripción a los inmigrantes irregulares. ¿Fin del asunto? No, la polémica duró meses gracias a los intentos, especialmente del Partido Popular, de que no se apagara. Sólo CiU respaldó a sus concejales en Vic en su intento de cerrar el padrón a los irregulares. Las ejecutivas de PSC y ERC abroncaron a sus ediles y les ordenaron, sin éxito, que no respaldaran el

acuerdo municipal. Pero fue el PP, sin representación en el pleno del ayuntamiento, el que mejor supo explotar el debate en beneficio propio.

La toma de posición de los populares inicialmente fue confusa. La primera respuesta fue criticar a PSOE y CiU porque sus ediles pretendían incumplir la ley. Cristóbal Montoro, responsable del área económica del partido, tildó de “xenófoba” la actitud socialistas y nacionalistas de Vic, subrayó los “efectos enormemente positivos” que ha tenido la inmigración en la economía el país y emplazó a todos los responsables políticos a “reconocer sus derechos” a los inmigrantes (El País, 20 de enero 2010). Montoro y también el alcalde madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón, fueron las únicas voces autorizadas dentro del PP que se posicionaron sin fisuras ni dobles filos a favor del empadronamiento y del reconocimiento de los derechos de todos los extranjeros.

Sin embargo, la estrategia del Partido Popular pasó por aprovechar la polémica suscitada a raíz de Vic en beneficio propio; sobre todo, una vez que se supo que el Ayuntamiento del municipio madrileño de Torrejón de Ardoz, gobernado por el PP, llevaba tiempo impidiendo el empadronamiento de los extranjeros cuyo visado de entrada el país fuera de turista y de aquellos que no acreditaran disponer al menos de 20 metros cuadrados por persona en un piso compartido. En los meses siguientes, los dirigentes del PP vincularon la polémica de Vic y Torrejón con los problemas de saturación de los servicios públicos, con la merma en las prestaciones que perciben los españoles, con la laxitud de la política de inmigración del Gobierno... Esto es, el Partido Popular recuperaba su discurso más duro sobre inmigración, el mismo que ya había utilizado en la campaña para las elecciones generales de 2008.

Los populares focalizaron su discurso en el intento de contraponer la capacidad económica de las Administraciones en medio de la crisis con la obligación de empadronar y de ofrecer servicios a todos los residentes, irregulares o no. “El sistema

de protección social español no es un pozo sin fondo, tiene unos límites que en estos momentos son las condiciones económicas” (Rafael Hernando, portavoz de Inmigración del PP en el Congreso; El País, 22 de enero de 2010). “Pensamos que es necesario un debate sobre inmigración en España, y de financiación de los servicios municipales (...) La capacidad de acogida de España no es la misma que hace unos años. Los inmigrantes ayudaron mucho al crecimiento, ahora es diferente” (Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del PP en el Congreso; El País, 18 de enero de 2010).

“No se puede seguir dando servicios a todos (...) Hay que cambiar la ley porque no se puede permitir que los ayuntamientos tengan que seguir pagando servicios y prestaciones sociales a todos los ciudadanos” (Alicia Sánchez Camacho, presidenta del PPC; El País, 19 de enero de 2010). “Los ayuntamientos están en crisis y algunos en quiebra, por lo que es difícil ofrecer los servicios sociales” (Alicia Sánchez Camacho, El País, 22 de enero de 2010).

“Nuestro sistema de protección social tiene unos límites. La llegada de inmigrantes tiene que estar vinculada a que tengan empleo y a que los ayuntamientos y las comunidades autónomas tengan la capacidad para atender las prestaciones sociales que ellos y sus familias demandan” (Rafael Hernando, El País, 24 de enero de 2010).

“El Gobierno no puede derivar a los Ayuntamientos el problema de la crisis, la falta de fondos y su propio fracaso en el control de fronteras” (Gonzalo Robles, secretario de Inmigración del PP; El Mundo, 21 de enero de enero). “Hay que cambiar la ley para no generar más problemas a los ciudadanos” (Mariano Rajoy, El País, 17 de enero 2010).

“La capacidad de acogida de España no es ilimitada y dependerá de los puestos de trabajo que haya y de los servicios públicos que se puedan prestar. Por eso el PP estuvo en contra de los *papeles para todos* y de las regularizaciones masivas” (Mariano Rajoy, El Mundo, 25 de enero de 2010).

Con estos mensajes, los populares buscaban sumar apoyos (o simplemente restárselos, vía abstención, a sus rivales) entre los ciudadanos que compiten directamente con los inmigrantes por unos mismos servicios y ayudas públicos. Por lo que, lógicamente, los responsables de éstos y otros males sólo podían encontrarse en el Ejecutivo y en el PSOE. Daba igual que el discurso gubernamental y sus políticas se hubiesen endurecido en los dos años anteriores, el de José Luis Rodríguez Zapatero seguía siendo el Gobierno del *papeles para todos*. Y de aquellos polvos, estos lodos. “Cuando las cosas se hacen mal, acaba notándose (...) ¿Os acordáis de los papeles para todos, de las regularizaciones masivas y de una política suicida, de una modificación en la ley que no sirvió para nada...? (...) La ley hay que modificarla y espero que en este momento, vistos los efectos de la demagogia que llevan haciendo durante años, modifiquen la ley, se avengan a razones y cambien su política para no generar más problemas al conjunto de los ciudadanos” (Mariano Rajoy, El Mundo, 17 de enero de 2010). “Hay que cambiar la política de inmigración para ordenar y controlar la llegada de personas extranjeras a España” (Mariano Rajoy, El País, 22 de enero de 2010). “Estamos pagando la demagogia de los papeles para todos. La regularización masiva fue un disparate” (Mariano Rajoy, El País, 23 de enero de 2010).

“Los culpables son los mismos que anduvieron por toda España diciendo ‘papeles para todos’ (José María Aznar, ex presidente del Gobierno; El País, 23 de enero de 2010). “El PSOE no ha caído en lo que significaba papeles para todos, pues ahora tiene usted Vic y papeles para todos” (Javier Arenas, presidente del PP de Andalucía, El Mundo, 20 de enero de 2010). “Los padrones no pueden ser la puerta de entrada para la inmigración ilegal” (Alicia Sánchez-Camacho, El Mundo, 17 de enero de 2010). “Es mil veces más fácil entrar ilegalmente en España que hacerlo legalmente (...) El grave problema es que somos el único país de la Unión Europea que mantiene una legislación que incentiva la inmigración irregular y que premia la estancia ilegal, en condiciones precarias y de economía sumergida” (Rafael Hernando, El Mundo, 17 de

enero de 2010). “El problema no es el empadronamiento, sino un sistema que favorece la ilegalidad. Un sistema que hace más fácil entrar ilegalmente que hacerlo legalmente; un sistema endiablado según el cual, si uno viene ilegal y consigue estar tres años en la clandestinidad, se le dan los papeles” (Rafael Hermando, El País, 22 de enero 2010).

El debate sobre la inmigración, según el PP, había que reabrirlo “sin complejos”, “con valor, coraje y valentía” (Alicia Sánchez Camacho, El País, 23 de enero 2010), “sin hipocresía, sin cinismo” (Javier Arenas, El País, 23 de enero 2010). Y el PP, a su manera, quiso hacerlo. Los dirigentes populares fueron aportando propuestas poco precisas sobre cómo abordar el problema que se había avivado. Algunas fueron nuevas: Mariano Rajoy llegó a proponer, aunque nunca precisó su plan para hacerlo, que se garantizara el acceso de todos los inmigrantes irregulares a los servicios públicos, pero sin inscripción en el padrón (¿cómo saber entonces dónde residen esos inmigrantes para reorganizar los recursos? ¿Qué solución daba esta iniciativa a los problemas de financiación de los ayuntamientos?). “Con que simplemente los derechos de sanidad y educación no los garantizara el padrón, sino que se garantizaran por el mero hecho de ser seres humanos, sin ningún documento, ya nos podríamos ahorrar muchos problemas” (Mariano Rajoy, El País, 22 de enero de 2010).

Otra de las medidas recomendadas por los dirigentes del PP en plena polémica de Vic ya era conocida: el contrato de integración. Pese a que no hubiera una relación concreta con la negación del empadronamiento a los irregulares, los populares volvieron a exaltar los problemas de integración y el choque cultural entre extranjeros y españoles. “Bienvenido el que venga a España a buscar oportunidades, pero esa persona tiene que compartir nuestros derechos, nuestras obligaciones y los valores que establece la Constitución española” (Javier Arenas, El País, 23 de enero de 2010). “Tenemos una historia, una cultura, una tradición plasmada en la Constitución que

tenemos que cumplirla nosotros y los que vengan de fuera” (Mariano Rajoy, El País, 23 de enero de 2010).

Y si el Partido Popular recuperaba el tono en su discurso sobre inmigración, el Partido Socialista hacía lo propio. Gobierno y PSOE se centraron en 2010 en volver a achacar a los populares posiciones cercanas a la extrema derecha y en rescatar la faceta más proactiva de su discurso sobre extranjería. Había que marcar distancias..., o casi.

7.1.2. El PSOE y la vuelta al discurso proactivo

La primera reacción del Gobierno al desafío que representaba la negativa de un ayuntamiento a inscribir en su padrón a inmigrantes sin papeles fue estrictamente institucional. El Ejecutivo se ponía en su papel y recordaba que la iniciativa del consistorio simplemente era ilegal y por tanto debía reconducirse inmediatamente. “Con la ley en la mano, un ayuntamiento no puede impedir el empadronamiento de las personas que cumplen los requisitos. El Ayuntamiento de Vic no ha cogido el camino correcto. Si quiere cambiar la ley de empadronamiento debe dirigirse a los organismos competentes” (Celestino Corbacho, ministro de Trabajo e Inmigración; El País, 11 de enero de 2010). Fue la postura gubernamental en la que se insistió durante los primeros días: se rechazaba la medida que traba de impulsar el ayuntamiento de Vic porque no se ajustaba a la normativa en vigor. Pura defensa del Estado de Derecho.

El Ejecutivo amagó, sin mucho convencimiento ni demasiado predicamento, con mostrarse comprensivo con el punto de rebeldía que representaba el toque de atención de Vic. El ministro Celestino Corbacho abogó por abrir un “debate sereno y tranquilo” sobre la inmigración (El Mundo, 22 de enero de 2010), cuando apenas habían transcurrido dos meses desde la aprobación de la última reforma de la Ley de Extranjería. Y desde el PSC, que se encontraba tan en precampaña como el PPC, se

daba una de cal y otra de arena. El *Govern* catalán rechazaba la decisión del consistorio de Vic, pero también el “buenismo” que practicaban algunos, sin precisar quiénes (José Montilla, presidente de la Generalitat catalana; *El País*, 19 de enero de 2010). “El PSC rechaza el buenismo, pero también la xenofobia. Creemos en una inmigración regulada, pero también en el sentido común y humanismo” (Miquel Iceta, viceprimer secretario del PSC; *El Mundo*, 19 de enero de 2010).

No obstante, desde el momento en que el Partido Popular parecía estar dispuesto a ser el principal beneficiado de la polémica en Vic, la estrategia por la que optó el PSOE de forma decidida pasó por recuperar sus críticas a la actitud irresponsable y radical de los populares. Tras dos años en que el discurso del Gobierno y del PSOE se había aproximado claramente al discurso de ‘ley y orden’ del que venía haciendo bandera el PP durante años, los socialistas parecían recuperar sus antiguas señas de identidad en esta materia. Durante los primeros dos años de legislatura, el Ejecutivo había optado por endurecer sus políticas y sus palabras sobre la inmigración, planteando más o menos implícitamente la relación entre inmigración y crisis económica. Pero en el momento en que el PP volvió a poner en primera línea de su argumentario diario el fenómeno inmigratorio y los supuestos problemas que la presencia de extranjeros (singularmente la de los irregulares) ocasionaba en diferentes ámbitos, los dirigentes socialistas no dudaron en volver por sus fueros.

Y es que, según los socialistas, el discurso que empezaba a esgrimir el PP era “oportunista” (Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración; *El País*, 22 de enero de 2010), “electoralista” (José Antonio Alonso, portavoz del PSOE en el Congreso; *El País*, 20 de enero de 2010), y también “oportunista, ocurrente y contradictorio (...) Oportunista porque se apunta a todo para desgastar al Gobierno y por un puñado de votos. Ocurrente porque no tiene lo más mínimo de análisis. Y contradictorio porque Rajoy hoy dice una cosa y mañana otra” (María Teresa

Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Gobierno; El País, 23 de enero de 2010). En este empeño, los socialistas apostaron por recordar insistentemente como muestra del “oportunismo político” del PP que la directriz que obligaba a los ayuntamientos a empadronar a todos sus residentes, tuvieran regularizada su estancia en España o no, fue firmada y remitida a todos los consistorios en 1997 por el propio Mariano Rajoy, cuando era ministro de Administraciones Públicas. (Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior; El País, 18 de enero de 2010).

El objetivo principal de los socialistas pasaba por afear el comportamiento de los populares, recuperando el discurso que trataba de colocar al PP en el lado de la demagogia y el electoralismo. “El PP se ha apuntado a este debate para no quedarse atrás en el discurso de mano dura contra los inmigrantes, que algún calado tiene” (Antonio Hernando, secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE; El País, 19 de enero de 2010). “El PP no es un partido serio. Sólo se acuerda de los inmigrantes cuando pasa algo. Usa la inmigración para confrontar, lo que es una irresponsabilidad ante un tema que requiere una gran sensibilidad” (Consuelo Rumí, El Mundo, 20 de enero de 2010).

Asimismo, desde el PSOE se recuperó explícitamente el intento de vincular el discurso sobre inmigración que esgrimía el Partido Popular con posiciones próximas a la extrema derecha; un mensaje que, como ya hemos visto, encaja a la perfección con el escenario más favorable para los socialistas en materia de posicionamiento ideológico. “Mariano Rajoy y el PP se sitúan en la derecha más dura de la UE” (José Antonio Alonso, El Mundo, 19 de enero de 2010). “No cabemos todos es el nuevo grito de guerra con el que se busca poner en pie un discurso abiertamente xenófobo y convertirlo en material inflamable para su aprovechamiento en la lucha política” (José Blanco, ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE; El Mundo, 21 de enero de 2010).

Pero el aspecto más interesante de la redirección del discurso sobre inmigración del Gobierno y del PSOE fue la recuperación que se hizo de las posiciones más proactivas antaño tan firmemente defendidas. Frente a la crudeza de los mensajes que desde el Ministerio de Trabajo e Inmigración se habían transmitido desde el inicio de legislatura, ahora se retomaba la visión más humana del fenómeno. Toda la firmeza que en los dos años anteriores se había demostrado en poner coto a la llegada de más inmigrantes, se dirigía ahora en su defensa frente a los ataques del Partido Popular. De la imitación de los marcos conceptuales e ideológicos de los conservadores a la recuperación de las claves progresistas (Lakoff, 2007).

“Estamos hablando de personas y de derechos inalienables. El país que presido no va a consentir que por un truco de un ayuntamiento haya familias que se queden sin atención sanitaria o escuelas (...) Que un presidente diga que hay que defender los derechos de los inmigrantes no debería llamar la atención. Si llama la atención hay motivos para preocuparse” (José Luis Rodríguez Zapatero, El País, 20 de enero de 2010. “No permitiremos que se menoscaben los derechos de las personas (...) Es rotundamente falso que yo sea partidario de una inmigración masiva. Lo que soy es masivamente partidario de respetar los derechos humanos de todas las personas, vengan de donde vengan” (José Luis Rodríguez Zapatero, El Mundo, 21 de enero de 2010). “Las personas que vienen de fuera tienen derechos humanos, son seres humanos” (José Luis Rodríguez Zapatero, El País, 15 de enero de 2010).

“La dignidad de los seres humanos existe tengan o no tengan papeles; el empadronamiento no puede ser nunca un obstáculo a la dignidad y a los derechos de todo ser humano” (Francisco Caamaño, ministro de Justicia; El País, 18 de enero de 2010). “Se respetan los derechos de las personas sean ilegales o no (...) Pues claro que tienen derechos. ¿O es que hay algún español que piense que el hijo de un

inmigrante ilegal no tiene derecho a asistir a la escuela en España? ¿Verdad que no hay ninguno?” (Alfredo Pérez Rubalcaba, El Mundo, 13 de abril de 2010). “Los inmigrantes deben ser empadronados para tener derecho a los servicios esenciales, porque hay que tratarlos como seres humanos” (José Antonio Alonso, El Mundo, 19 de enero de 2010).

7.2 Elecciones catalanas de 2010: regreso del discurso más duro

A las elecciones autonómicas de Cataluña, celebradas el 28 de noviembre, se llegó tras una agotadora precampaña que prácticamente duró todo un año. La polémica de Vic inauguró el periodo preelectoral. Diez meses de intentos por parte de todos los partidos de ubicarse en una posición favorable de cara a los comicios, y con la inmigración como uno de los grandes temas acerca del que todos querían salir bien parados. Y eso implicaba para PP y CiU dar su versión más dura del discurso sobre inmigración, y para el PSC zozobrar entre la imagen de firmeza y los mensajes en clave progresista, atacando a sus rivales por su radicalidad. El guión se cumplió.

Durante esa larguísima precampaña de las autonómicas varios asuntos sirvieron a los partidos para tomar posiciones (algunos con la vista puesta no tanto en los comicios catalanes como en las elecciones municipales de mayo de 2011). Ayuntamientos de todo signo político, pero casi todos de municipios catalanes, promovieron mociones de condena del *burka* y el *niqab* (velos integrales que las versiones más rigoristas del islam imponen a las mujeres) y en otros casos se prohibía su uso en instalaciones públicas. E incluso el Partido Popular arrancó del Senado el apoyo a una moción, presentada por la candidata catalana Alicia Sánchez Camacho, que pedía prohibir el *burka* (un apoyo que fructificó por el cambio de voto in extremis de CiU y por la ausencia de varios senadores socialistas, sin la cual la iniciativa de los populares habría sido puramente de cara a la galería).

Durante varias semanas del mes de junio, el del *burka* fue uno de los grandes temas de los que se ocuparon los medios de comunicación. Todos los partidos pretendían posicionarse y, en la práctica, sacar tajada electoral. Alcaldes de todas las formaciones impulsaban estas mociones *antiburka* y todos los partidos con representación las respaldaban al unísono. CiU y PP protagonizaron durante apenas unas semanas una verdadera cruzada contra el *burka*. Los ediles socialistas que impulsaron mociones de este tipo trataban de subrayar que era un asunto que las administraciones ineludiblemente debían abordar y era mejor impulsar el debate desde posiciones progresistas para evitar que lo aprovechara la extrema derecha. Desde el Gobierno central, en cambio, se intentaba desinflar las iniciativas ironizando sobre el mínimo número de mujeres con *burka* en España (“Puede acabar habiendo más mociones que *burkas*”, llegó a decir el ministro Corbacho) y alertando de que podían generar más problemas que los que habrían de solucionar.

Puede que la polémica en torno al *burka* sea un mero brindis al sol, dado el carácter muy minoritario de su uso (es difícil de cuantificar, pero incluso se ha llegado poner en duda que exista siquiera caso alguno en muchos de los municipios que aprobaron mociones contrarias). Pero desde el punto de vista electoral, probablemente el que más pesaba en el ánimo de sus impulsores, aprobar estas mociones y posicionarse en contra de una *costumbre* tan evidentemente contraria a los derechos de las mujeres, tan vejatoria y tan inhumana, a los políticos o les salía gratis o, en el mejor de los escenarios para ellos, se podría traducir en votos (García, 2010). Éste y otros asuntos vinculados con la inmigración, con la integración, la convivencia, los servicios públicos... fueron salpicando las agendas política y mediática, e inevitablemente también la agenda pública, hasta llegar a la cita con las urnas el 28N. Casi siempre a iniciativa del Partido Popular, aunque no sólo.

7.2.1 El PP retoma el ‘no cabemos todos’

El Partido Popular fue el primero en dar el pistoletazo de salida a su precampaña para las elecciones catalanas. Diez meses antes de la cita con las urnas, y en plena polémica sobre el padrón de Vic, la presidenta del PPC y candidata a la Generalitat, Alicia Sánchez Camacho, dejó claro que la inmigración iba a ser tema central de su campaña electoral. En la presentación de esa temprana precampaña la dirigente popular pronunció una de esas frases que en política lo marcan todo, que agotan los matices y que condicionan cualquier pronunciamiento posterior: “En Cataluña y España no cabemos todos” (El País, 20 de enero de 2010). La candidata catalana retomaba el lema que Mariano Rajoy ya se atrevió a utilizar en la campaña de las generales de 2008. E intentaba así colocarse bien a las claras en cabeza en la carrera que mantenía con CiU por arrogarse la etiqueta de ser el partido más duro con la inmigración en tiempos de crisis.

“El debate está en la calle y los políticos deben llamar a las cosas por su nombre”, dijo Sánchez-Camacho para justificar su polémico ‘no cabemos todos’ (El País, 22 de enero de 2010). Los dirigentes populares catalanes y nacionales intentaron (y consiguieron) que la inmigración, ‘atendiendo a los debates que están en la calle’ y ‘llamando a las cosas por su nombre’, se mantuviera como uno de los temas de las agendas mediática y pública. Ya hemos visto anteriormente que, pese a no estar entre los partidos promotores por no tener representación en el Ayuntamiento de Vic, el PPC fue la formación que más alentó en enero y febrero la polémica sobre el empadronamiento de inmigrantes irregulares. Y más tarde, participó en mayo y junio en las numerosas mociones en consistorios y en el Senado contra el uso del *burka*, vinculando esta práctica con el choque de culturas entre inmigrantes y autóctonos. No fueron los únicos momentos álgidos de la estrategia del PPC de vincular su imagen con la mano dura con la inmigración.

En marzo, Mariano Rajoy recuperó explícitamente el contrato de inmigración que deberían firmar los inmigrantes como una de sus grandes medidas. Lo hizo, de forma premeditada, en una visita a Castelldefels y L'Hospitalet, municipios del área metropolitana barcelonesa de tradición obrera y en los que el Partido Socialista tiene amplio apoyo. Allí retomó las ideas fuerza de su discurso de la campaña de 2008: "Hace falta control y orden (...) Sólo pido algo tan razonable como el respeto a la ley" (El País, 3 de marzo de 2010). Allí renovó su promesa de hacer que los inmigrantes, vía contrato, se comprometieran a "cumplir las leyes, a respetar las costumbres de los españoles, a aprender la lengua, a pagar sus impuestos, a trabajar activamente para integrarse en la sociedad y a regresar a su país si durante un tiempo no encuentran empleo".

En el mes de abril, Alicia Sánchez Camacho y el líder del PP en Badalona, Xavier García Albiol, repartieron folletos a los vecinos del municipio barcelonés en el que se vinculaba abiertamente inseguridad ciudadana e inmigración. En los panfletos se incluía una fotografía de una pancarta colgada en un balcón en que podía leerse "No queremos rumanos". Desde el Partido Popular se pidieron disculpas por la fotografía. Pero el mensaje que pretendía transmitirse estaba claro. "Yo no me escondo (...) Muchas calles de Badalona son guetos por culpa de la inmigración ilegal (...) Poner al mismo nivel de acceso a los servicios sociales a un inmigrante ilegal y a un vecino de Badalona es una tremenda injusticia social (...) Hay colectivos que han venido a este país única y exclusivamente a robar y a delinquir" (Xavier García Albiol, El Mundo, 27 de abril de 2010).

En agosto y septiembre, el Gobierno francés puso en marcha una campaña de expulsión de gitanos rumanos del país entre críticas procedentes de todos los frentes. En realidad, no de todos. La Comisión Europea, organizaciones no gubernamentales,

varios gobiernos europeos, partidos de izquierda... arremetieron contra el populismo del presidente galo, Nicolas Sarkozy, e incluso hubo quien vinculó tan polémica medida con las deportaciones de judíos emprendidas por los nazis. También el PSOE criticó con dureza durante días las expulsiones selectivas. Pero los dirigentes socialistas quedaron en fuera de juego cuando el presidente José Luis Rodríguez Zapatero defendió a su homólogo francés y, si bien no respaldó abiertamente las repatriaciones de gitanos, se colocó en una postura claramente acrítica. Sin embargo, una vez más, el partido que trató de sacar más provecho del río revuelto al otro lado de la frontera fue el PP.

En plena polémica, Sánchez Camacho y García Albiol hicieron de cicerones de una eurodiputada gala de la UMP, el partido de Nicolas Sarkozy, por los barrios de Badalona con mayor proporción de población inmigrante. "Aquí no tenemos campamentos de gitanos como en Francia, aquí la situación es aún peor", dijo Xavier Garclía Albiol. "Están repartidos por varios barrios de la ciudad haciendo la vida imposible a los vecinos y, encima, cuando nos quejamos nos atacan y nos tachan de racistas" (El País, 20 de septiembre de 2010). Durante la visita, Sánchez Camacho, por su parte, dio por hecho que los inmigrantes reciben más ayudas sociales que los autóctonos y prometió cambiar las cosas para que "ningún inmigrante tenga más derechos que un español" (El País, 20 de septiembre de 2010).

La dureza del discurso del PPC fue *in crescendo* durante todo 2010 hasta llegar a las elecciones del 28 de noviembre. Los populares creyeron encontrar en la retórica populista y la retórica de la tradición (Zapata-Barrero, 2008) en torno a la inmigración la clave para mejorar sus resultados electorales en Cataluña. Una región en que sus apoyos quedaban lejos de la media obtenida en el resto de España debido, singularmente, a su escorada posición centralista, a su defensa del nacionalismo español como oposición del nacionalismo periférico catalanista predominante.

Después de toda una legislatura de ataques directos al nuevo Estatuto de Autonomía como uno de los grandes temas de su estrategia de crispación, el PP vio cómo en las elecciones generales de 2008 el PSOE obtenía en Cataluña 17 diputados más que los populares, cuando la ventaja socialista sobre el PP en el conjunto del país fue de 16 escaños.

El PSC liderado por José Montilla llegaba al 28-N con el objetivo de frenar en la medida de lo posible la sangría de votos que se adivinaba sufriría por la crisis económica y por el agotamiento del partido tras dos legislaturas de gobierno tripartito junto a ERC e ICV. Con el uso de la inmigración como uno de los grandes temas de su campaña, el PPC buscaba captar parte de esos votantes socialistas en desbandada (los que más directamente entraran en competencia con los inmigrantes por las mismas prestaciones sociales o los que padecieran eventuales problemas de convivencia) o, en su defecto, alentar aún más la ya evidente tendencia a la abstención del electorado más hastiado del PSC.

Con el discurso de mano dura con el inmigrante, los populares trataban además de evitar que la descomposición de los apoyos electorales socialistas se tradujeran en un trasvase de votos hacia CiU que pudiera darle a la coalición nacionalista la mayoría absoluta. PPC y CiU se disputaban entre sí el espacio de dureza con la inmigración, y se lo disputaban también a las pequeñas formaciones de extrema derecha cuyo programa electoral se limitaba a consignas muy próximas a la xenofobia, si no abiertamente volcadas en ella. Los populares querían captar el voto de todos los catalanes preocupados por los problemas que supuestamente genera la llegada de extranjeros a la región y que, además, temieran la presunta deriva independentista en que se había instalado CiU y sobre la que los dirigentes del PPC no dejaron de alertar.

El Partido Popular no dudó en utilizar toda su artillería para hacer de la inmigración una de las claves de la campaña. En uno de sus spots electorales, el PPC deslizó la idea de que socialistas y convergentes habrían pactado una nueva regularización extraordinaria de extranjeros sin papeles. “Mas y Zapatero regularizarán a un millón de inmigrantes. Sólo nos falta eso, papeles para todos y problemas para todos”, decía un supuesto parado en el vídeo electoral. “Sólo el PP garantiza una inmigración legal y ordenada, con derechos y obligaciones”, subrayaba en el spot Alicia Sánchez Camacho.

Asimismo, en plena campaña electoral, las Nuevas Generaciones del PPC lanzaron un videojuego en que la candidata popular, convertida en una heroína llamada *Alicia Croft*, disparaba bombillas (supuestamente ideas) contra independentistas y también contra inmigrantes ilegales. El alboroto fue mayúsculo y las acusaciones de que el PP alentaba la violencia racista se repitieron durante días. El PPC acabó retirando el videojuego, pidiendo otra vez disculpas..., y responsabilizando a la empresa encargada de desarrollar el programa del error de no haber incluido los últimos cambios solicitados por el partido, entre los que se encontrarían que las bombillas no serían disparadas contra inmigrantes sino contra las mafias que trafican con personas.

En su programa electoral, los populares catalanes hicieron suya la propuesta del PP nacional de exigir a los inmigrantes un contrato de integración para permanecer en el país. Con él, el programa se llenaba de exigencias para los extranjeros que vinieran al país y de propuestas que buscaban abortar la multitud de problemas que generaba la inmigración: "Integrarles en nuestro sistema de valores"; "No aceptar a los que se niegan a aprender catalán o castellano. Reformar la ley de acogida para incluir el castellano"; "Venir con contrato de trabajo y comprometiéndose a integrarse en nuestra sociedad"; "No aumentar el número de inmigrantes cuando se reducen oportunidades y empleo"; "Establecer la residencia de larga duración como requisito

para acceder a determinadas ayudas sociales"; "Prohibir el *burka*, *niqab* o cualquier velo integral en las calles y espacios públicos"; "Apoyar a los Ayuntamientos para que atiendan denuncias de los vecinos por molestias por los hacinamientos en pisos"; "Crear una unidad policial especializada para controlar a la inmigración desordenada"; "Exigir el pasaporte o el permiso de residencia para empadronarse"; "Cumplir con el deber de dar desde los Ayuntamientos los datos del padrón a la policía".

La integración por asimilación de las costumbres autóctonas era una de los puntos principales de la política de inmigración que proponía el PP. La candidata popular a la Generalitat hizo suya sin matices la propuesta del contrato de integración del PP nacional y (re)anunció el contenido de tal documento en Santa Coloma de Gramanet, población de alta concentración de inmigrantes e histórico feudo socialista del cinturón barcelonés. "Quien quiera trabajar en Cataluña deberá comprometerse a cumplir las leyes de nuestro país" y respetar "los valores y costumbres" (Alicia Sánchez Camacho, El País, 10 de noviembre de 2010). La dirigente popular, asimismo, como parte de ese contrato, animó al inmigrante "a volver a su país si por un espacio de tiempo se ha quedado sin trabajo y oportunidades de ganarse la vida" (El País, 11 de noviembre de 2010). "Tendríamos que consensuar entre todos los partidos cuánto tiempo tendríamos que dar a los inmigrantes para el retorno voluntario a su país".

"Es un contrato de integración similar al que funciona en Francia, Bélgica u Holanda y por el cual los inmigrantes se comprometen a respetar nuestros principios y valores democráticos, cumplir sus obligaciones y pagar impuestos. Y que la sociedad facilite su integración y proporcione formación. El PP también ha incorporado la posibilidad del retorno voluntario, incluido en la actual legislación, manteniendo el permiso de trabajo y residencia para que puedan regresar cuando haya oportunidades de trabajo. Son medidas positivas que facilitarán la integración. Es el mismo que presentó Mariano Rajoy en 2008" (Alicia Sánchez Camacho, El País, 24 de noviembre de 2010).

"Aquí estamos todos para cumplir las leyes, los de aquí y los que vienen de fuera (...)
Es irresponsable que desde otros partidos no se quieran poner soluciones también en
esta materia y nuestro empeño provoca las críticas sin fundamento (...) [La devolución
a su país de los inmigrantes en paro] se refiere a las personas que llegan y se quedan
sin trabajo y sin ningún tipo de prestación y no cumplen los requisitos de reagrupación
familiar" (Alicia Sánchez Camacho, El País, 19 de noviembre de 2010).

En paralelo, el Partido Popular de Catalunya retomó las denuncias que vinculaban la
llegada de inmigrantes con el deterioro de los servicios públicos y alertó de la
competencia entre extranjeros y españoles por unas mismas prestaciones sociales,
sobre todo con una coyuntura de crisis económica. "Con cerca del 20% de parados,
no se puede mantener la misma política de inmigración que cuando teníamos el 8% de
trabajadores sin trabajo (...) El PP garantizará que una mayor inmigración no vaya en
perjuicio de las becas, ayudas y servicios que nuestros ciudadanos reciben (...) La
residencia de larga duración [debe imponerse] como requisito para acceder a
determinadas ayudas sociales" (Alicia Sánchez Camacho, El Mundo, 11 de noviembre).
"Es cada vez más frecuente que importantes sectores de la población inmigrada
conviertan en un verdadero abuso el acceso y derecho al uso de la sanidad" (Alberto
Fernández, presidente del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona;
El País, 12 de octubre 2010).

Los populares también utilizaron el tema de la inmigración para atacar a sus rivales,
fundamentalmente a los socialistas, aunque también a los convergentes. El discurso
de extrema firmeza que articulaba el PPC le permitía arremeter contra sus
contrincantes por su supuesta laxitud ante el fenómeno. Y es que para los populares,
"los problemas no se resuelven pasando de ellos o agrediendo a quienes hablan de
ellos. Yo estoy a favor de la inmigración, especialmente como gallego, pero esto
requiere de un orden y un control, y no se puede acudir a la descalificación y a la

demagogia. Estoy a favor de la igualdad de derechos y obligaciones del contrato de integración, como cualquier persona razonable y normal” (Mariano Rajoy, El Mundo, 12 de noviembre de 2010). “¿Qué diría alguien si en su casa se le empadronan 10 inmigrantes irregulares? ¿O si supiese que alguien ha traído a España a 80 supuestos hijos? (Mariano Rajoy, El Mundo, 12 de noviembre de 2010).

“Montilla acusa y Mas calla porque CiU y PSOE han votado todas las regulaciones de extranjería de Zapatero que nos han llevado a la actual situación (...) Montilla insulta, calificando de miserables, a los catalanes que queremos una inmigración ordenada y legal. La mayoría de los catalanes saben que las actuales políticas de inmigración no funcionan (...) El Partido Popular llevará al Parlamento la voz de esta mayoría que Montilla quiere silenciar. La mayoría silenciosa tendrá una voz clara y potente en el próximo Parlamento, la voz de un Partido Popular que no se arruga. No habrá ni pactos de silencio, ni denuncias, ni insultos que nos callen” (argumentario público del PPC del 11 de noviembre de 2010). Y, en efecto, los dirigentes populares no callaron.

7.2.2 PSC, otra vez la misma estrategia electoral (o casi)

Desde que arrancó la legislatura en 2008, el PSOE y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero habían retorcido el discurso sobre inmigración que hasta entonces habían mantenido para acercarse en tono y contenido a las posiciones que venía defendiendo el Partido Popular. Analizando al detalle los resultados de las elecciones generales, parecía que los mensajes duros sobre inmigración habían servido para que los populares alcanzaran, si bien no la victoria, sí algunos de sus objetivos estratégicos: singularmente, alejar al PSOE de los votantes de centro. Y ante esta perspectiva, los socialistas optaron por endurecer sus posiciones. Durante dos años, el mensaje predominante del Gobierno fue el de la mano dura. Pero ante la cercanía de las elecciones catalanas el escenario cambiaba.

Ya hemos visto que la polémica sobre el empadronamiento de inmigrantes irregulares que suscitó el Ayuntamiento de Vic permitió a PSOE y a PSC retomar su discurso tradicional. Y en la precampaña de las autonómicas catalanas, aún más. Los socialistas volvieron a arremeter con fuerza contra los mensajes radicales del PP. Una vez más, los populares eran representados como la encarnación castiza e hispana de los movimientos europeos de extrema derecha. Las propuestas del PP eran “puro populismo y demagogia”, simplemente un “mensaje miserable” que puede “propiciar xenofobia y racismo” (José Montilla, presidente de la Generalitat y candidato del PSC; El Mundo, 11 de noviembre de 2010).

Y es que parecía que “a [Jean-Marie] Le Pen y a la Liga Norte les ha salido un alumno aventajado, al alinearse [el PP] con la política racista y xenófoba de la ultraderecha europea” (José Blanco, ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE; El País, 18 de noviembre de 2010). “[Alicia Sánchez Camacho] está aprovechando el momento y la ola que recorre Europa para apuntarse al carro y sacar tajada de cara a las elecciones” (Esperanza Esteve, portavoz de Inmigración del PSOE; El País, 12 de octubre de 2010). Desde el PSOE se aprovechó para criticar a “los que copian al Tea Party, a la derecha más extrema de Europa (...) No sé si da o quita votos, nosotros tratamos bien a los inmigrantes” (José Luis Rodríguez Zapatero, 22 de noviembre de 2010).

A cada propuesta del PPC sobre inmigración (contrato de integración, expulsión de los inmigrantes en paro, denuncia de los irregulares que pretendieran empadronarse...) desde el PSC y el PSOE se respondía retando a Mariano Rajoy a que exigiera su aplicación en las comunidades autónomas gobernadas por los populares, especialmente Madrid y Comunidad Valenciana, los grandes caladeros de votos del PP. Y si los populares presentaban sus medidas más populistas sobre inmigración en

barrios y municipios de extracción obrera y tradicionalmente próximos de forma mayoritaria al Partido Socialista, el PSC respondía con propuestas expresamente orientadas a esos barrios (plan extraordinario de inversión de 200 millones de euros para las zonas más degradadas) y destinadas a sus vecinos (una beca-salario para los jóvenes que ni estudian ni trabajan).

Había que dejar claro en qué consistían las políticas en clave progresista. Pero sin pasarse. Los socialistas afearon hasta la extenuación el discurso xenófobo y radical del PPC, pero también hicieron claras concesiones a la retórica reactiva en torno a la inmigración para no perder comba ante sus grandes rivales en los comicios, tanto el PP como CiU. Y en esta tarea tuvo de nuevo un papel fundamental (aunque ni mucho menos en solitario) Celestino Corbacho.

El ministro de Trabajo dejó el cargo en Madrid para figurar como número tres de las listas del PSC en las elecciones regionales. Corbacho volvía a la política catalana a la que había dedicado gran parte de su vida. Había aterrizado en el Ministerio poco más de dos años antes para ser el ministro que recondujera el discurso sobre inmigración del nuevo Gobierno de Rodríguez Zapatero, pero se encontró siendo el ministro que tuvo que lidiar con la mayor crisis de desempleo de la historia reciente de España. Ahora volvía a Cataluña y su presencia en las listas electorales buscaba recuperar parte del electorado tradicional del PSC más alejado de posiciones nacionalistas; permitía alzar una figura que podría mediar tras las elecciones con una CiU más que probable vencedora en los comicios (como finalmente sucedió); y al tiempo hacía posible que los socialistas catalanes también jugaran sus bazas en la batalla de PPC y CiU por quién era más duro con la inmigración.

“No podemos dejar que los últimos empadronados sean los que pongan las normas”, dijo Corbacho, recuperando en campaña el que había sido uno de sus grandes lemas

mientras estuvo en posesión de la cartera ministerial (El País, 17 de octubre de 2010), y también aprovechó para alertar de que la inmigración mete “presión” a los servicios públicos, claudicando ante las retóricas explotadas por sus rivales. Los dirigentes socialistas insistieron en que su posición sobre el fenómeno pretendía situarse en un punto medio entre el buenismo de algunos y la xenofobia de otros.

Los socialistas catalanes secundaron la estrategia que el PSOE explotó a nivel nacional hasta 2008. Aunque el mensaje principal fue el de acusar tanto a PPC como a CiU de escorarse a la derecha en materia de inmigración, presentándose como los adalides del progresismo, el PSC hacía algunas concesiones, quizá menores, pero suficientes para no espantar a votantes antaño fieles y que ahora podían abstenerse u apoyar otras opciones. Una estrategia que parece haber adquirido carácter de permanencia en la manera en que el PSOE afronta el fenómeno de la inmigración en el campo de la comunicación política.

Esas elecciones las ganó CiU. En realidad, las ganó igual que había ganado todos los comicios autonómicos catalanes desde la recuperación de la democracia. Pero en esta ocasión con una mayoría suficiente para volver a gobernar tras dos legislaturas en que se quedó en la oposición pese a contar con la lista más votada. Artur Mas recuperaba el Palacio de la Generalitat para la coalición nacionalista y lo hacía a lo grande: con 14 diputados más que en las anteriores elecciones, hasta un total de 62 (quedándose a seis escaños de la mayoría absoluta), sumando 26.000 votos más, elevando en siete puntos porcentuales su apoyo electoral... [Ver Tabla 7.1].

No hubo sorpresas. Se cumplía el guión que ya apuntaban la mayoría de las encuestas. Victoria holgada de CiU, debacle electoral del PSC (nueve diputados menos y 220.000 votos menos), hundimiento de ERC... Y fuerte ascenso del Partido Popular, que se convertía en la tercera fuerza del *Parlament* catalán, tras sumar 18 diputados (cuatro más que en 2006) y elevar su techo electoral en casi 70.000 votos.

TABLA 7.1

Resultados de las elecciones autonómicas de Cataluña en 2006 y 2010.

RESULTADOS 2010			
Partido	Escaños	Votos	
CiU	62	1198010	38.47%
PSC-PSOE	28	570361	18.32%
PP	18	384019	12.33%
ICV-EUiA	10	229985	7.39%
ERC	10	218046	7%
SI	4	102197	3.28%
C's	3	105827	3.40%
PxC	0	75321	2.42%

RESULTADOS 2006			
Partido	Escaños	Votos	
CiU	48	935756	31.52%
PSC-CpC	37	796173	26.82%
ERC	21	416355	14.03%
PP	14	316222	10.65%
ICV-EUiA	12	282693	9.52%
C's	3	89840	3.03%

Fuente: Generalitat de Cataluña.

Lo que no son cuentas son cuentos, dice un lema muy popular entre los empresarios españoles. Los datos del escrutinio parecen dejar patente que CiU y PP se plantaron en el día después de las elecciones pudiendo presumir de ser los grandes vencedores en las urnas. La estadística les avala. Ambos partidos fueron los que más explotaron el discurso duro con la inmigración durante la campaña, pero determinar en qué medida pudo favorecer estos mensajes reactivos con la multiculturalidad su suerte electoral queda, de momento, en el campo de las meras intuiciones.

Puede existir una correlación entre el discurso reactivo que practicaron tanto CiU como PP y su clara mejora de los resultados. Pero no contamos con datos que avalen tal hipótesis. El Centro de Investigaciones Sociológicas no publicó su estudio

postelectoral correspondiente a los comicios catalanes, como hace tras cada cita electoral [quizá debido a que el estudio preelectoral presentó graves desviaciones en relación a los resultados que obtuvieron los diferentes partidos el 28-N], lo que hace difícil detectar algunas de las motivaciones que explican el resultado final que dejan los comicios.

Resulta más que probable que tanto CiU como PP se aprovecharan de cierto trasvase de votos de entre los que apoyaron al PSC en las elecciones de 2006 (en el caso de CiU también de entre antiguos votantes de ERC). Puede parecer razonable que la mano dura con el inmigrante propuesta por convergentes y populares fuera uno de los recursos electorales que sirvieran para captar nuevos votantes por parte de ambos partidos.

La relevancia del tema de la inmigración entre las preocupaciones del electorado catalán es evidente. El estudio preelectoral del CIS revela que para el 7,9% de los catalanes la inmigración era el principal problema de Cataluña y para un 18,6% de los encuestados era el segundo mayor problema de la región. Sólo se situaban por delante en ambos casos problemas recurrentes en plena crisis: el paro y los asuntos económicos en general. Pero no es suficiente para constatar que la inmigración y los discursos políticos en torno a ella hayan sido un catalizador determinante en los buenos resultados de PP y CiU en los comicios catalanes.

Sí puede entenderse como una señal de hasta qué punto puede estar calando el discurso antiinmigración entre la ciudadanía española el hecho de que Plataforma per Catalunya (PxC), partido abiertamente xenófobo como ya hemos señalado anteriormente, consiguiera captar en esas elecciones más de 75.000 votos. No consiguió representación parlamentaria, pero se quedó a apenas medio punto porcentual de superar la cota mínima preceptiva del 3% de los votos [Ver Tabla 7.1].

La existencia de pequeñas formaciones de extrema derecha que articulan discursos antiinmigración no supone, al menos de momento, un motivo de preocupación por su carácter residual en España. No sucede lo mismo en otros países europeos, en los que la derecha radical ha ido tomando relevancia y peso en las instituciones en los últimos años. Ahora bien, aunque es cierto que estas formaciones siguen teniendo en España un papel realmente minoritario en el espacio político, sí debe preocuparnos que su discurso claramente reactivo y xenófobo pueda *forzar* a los partidos tradicionales y con verdadero peso en el legislativo a posicionarse y a secundar sus posturas en busca de réditos electorales.

CONCLUSIONES

DISCURSO, ELECTORALISMO Y CRISIS DE CONVIVENCIA

España fue durante más de un siglo tierra de emigrantes. Exilio económico y exilio político, según los casos y según el momento histórico, llevaban a los españoles a hacer las Américas, primero; a Alemania, a Suiza..., después. El infradesarrollo endémico de España y sus avatares políticos (totalitarios durante largos periodos) enseñaban la puerta de salida a muchos españoles en busca de una nueva vida, nueva y mejor.

Todo cambió entre finales del agitado siglo XX hispano y principios del que parecía un esplendoroso XXI. Las salidas se frenaron, y empezaron las llegadas. En apenas quince años España pasó de la casi total inexperiencia en materia de inmigración a convertirse por la vía rápida en uno de los países con mayor proporción de población extranjera. De menos de medio millón de extranjeros a mediados de los noventa a superar los 5,7 millones a finales de la primera década del nuevo siglo.

Desde la mitad de los noventa hasta 2007, la economía crecía de forma sostenida por encima de la media europea. Durante una década larga se aceleraba cada año con incrementos del PIB en el entorno del 3% y el mercado de trabajo parecía inagotable. Es lo que se vino a llamar el *milagro español*. Con una economía sin freno, con un mercado laboral muy intensivo en mano de obra, con un déficit demográfico evidente en población activa, y dadas nuestras particularidades geográficas como frontera europea con África y nuestras vinculaciones histórico-culturales que nos colocan como puente continental con Latinoamérica, España se convirtió en destino prioritario de la inmigración mundial.

La llegada de estos más de cinco millones de *nuevos ciudadanos* de decenas de nacionalidades representa un reto histórico para el país. Sus implicaciones demográficas, culturales, sociales, económicas... obligan a la clase política a posicionarse para afrontar un desafío que ha cambiado, y cambiará aún más, las bases de la sociedad española. Las repercusiones del nuevo fenómeno son tales que los partidos políticos están obligados a dar público testimonio de sus propuestas para gestionar la integración de esos *nuevos españoles*. Y en esa tarea, a pesar de lo que hemos visto en la vida política española en los últimos años, no todo vale.

Los ciudadanos y los partidos que les representan pueden afrontar el proceso de multiculturalidad que se abre en las sociedades de acogida de dos maneras contrapuestas: o se rechaza la nueva realidad y se apuesta por el pasado monocultural o se asume el fenómeno como irreversible y se busca la mejor manera de gestionar el presente y futuro multiculturales. Dos visiones antagónicas que se articulan, respectivamente, con dos tipos de discursos sobre la inmigración: discurso reactivo y discurso proactivo (Zapata-Barrero, 2008; Zapata-Barrero, González y Sánchez Montijano, 2008).

Los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revelan que una parte sustancial de los ciudadanos (a momentos mayoritaria) percibe la inmigración como un problema. Un porcentaje apreciable de los españoles se muestra reacio a la llegada de extranjeros al país y rechaza sus consecuencias. Ante este escenario, los partidos políticos se encuentran en la disyuntiva de elegir entre dos opciones de actuación: o se utilizan estos datos demoscópicos para arremeter contra la inmigración y para justificar políticas más restrictivas en un intento de sacar réditos electorales; o, por el contrario, se apuesta por intentar revertir estas actitudes negativas ante el extranjero y se pone en marcha una función pedagógica del discurso (Zapata-Barrero, 2008). Interpretación reactiva o interpretación proactiva. En principio, hay que elegir.

Los partidos mayoritarios españoles lo han hecho..., o casi. El PP ha optado abiertamente por los mensajes de mano dura en un intento de socavar la base electoral de su rival. El Partido Socialista ha alternado y combinado ambas visiones (la pedagógica y la populista) en función de las necesidades coyunturales, electorales y partidistas de cada momento para combatir el discurso de los populares.

Ya somos europeos... Las razones del PP

En la mayoría de los países europeos la inmigración es desde hace tiempo una temática que se aborda de forma recurrente en sus campañas electorales. En Francia, Reino Unido, Holanda..., países con una historia como metrópoli colonial y con amplia experiencia en la acogida de población extranjera, sus políticos hacen uso electoral de la política de inmigración de forma permanente. Pequeñas formaciones de extrema derecha, por lo general de nuevo cuño, han empujado a lo largo de la última década a los grandes partidos tradicionales a posicionarse ante el fenómeno de la inmigración con discursos duros y con políticas efectistas. Una estrategia con la que las grandes formaciones han conseguido, en muchos casos, desactivar a los pequeños partidos de extrema derecha, pero que al tiempo ha servido para legitimar a través de las instituciones las actitudes contrarias a la inmigración de parte de la ciudadanía.

España ha acabado por no ser una excepción en la tendencia continental de incluir la inmigración en la agenda política a la búsqueda de rédito electoral. El Partido Popular introdujo en 2005, en los albores de su estrategia de crispación, la inmigración como uno de los temas en los que se dirime la confrontación partidista. Y desde entonces no ha abandonado el listado de materias de la lucha partidaria. Ya somos europeos. Para satisfacción de algunos (viendo las encuestas, quizá de muchos), ya somos europeos. También en esto. Y es que hasta 2005 en España la inmigración parecía excluida de la cruda confrontación partidista. Había habido ruido mediático y político, había habido

agitadas tramitaciones parlamentarias de varias leyes de Extranjería..., pero los partidos políticos, también los mayoritarios PSOE y PP, respetaban en sustancia el tradicional convencimiento de que la inmigración debía quedar al margen de la lucha partidaria (Fundación Alternativas, 2007).

En 2005 esta regla no escrita quedó superada por los vaivenes de la azorada vida política española. La regularización extraordinaria de extranjeros emprendida por el Gobierno socialista fue el detonante (o la excusa) que llevó al Partido Popular a convertir sin tapujos la política la inmigración en material de ataque contra el Ejecutivo. Los populares fueron los primeros en olvidar el tabú de utilizar la inmigración en la batalla política y electoral. Pero los socialistas no han rehuido el embate en este tiempo.

El Partido Popular ha puesto en práctica una estrategia de crispación permanente y deliberada contra los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (véase Fundación Alternativas, 2007 y 2008). Los populares entendieron en la primera legislatura de su regreso a la oposición que el desacuerdo permanente y el ataque con todo al nuevo Gobierno le ofrecía mayores posibilidades de recuperar el poder. Y en esa estrategia la utilización del tema de inmigración ha venido encajando a la perfección.

Ante cada cita electoral, el Partido Popular parte en clara desventaja en relación al PSOE por su ubicación ideológica. En España, tradicionalmente y aún hoy, una mayoría de votantes se declara de izquierdas. El PSOE es el partido ideológicamente más próximo a la media en que se autoubican los españoles (en el centro-izquierda), mientras que los electores ven al PP muy escorado a la derecha. Atendiendo a esta distribución ideológica, el PP sólo podría obtener la victoria si un porcentaje suficiente de los electores de izquierda y centro-izquierda opta por votar al Partido Popular o, en su defecto, por la abstención. Y como es mucho más fácil conseguir que los electores

se queden en casa que lograr que cambien radicalmente el sentido de su voto, el PP busca activamente la abstención de parte de los votantes volátiles próximos al PSOE.

Con el objetivo de desanimar la participación de electores cercanos al PSOE, el Partido Popular intenta imponer una agenda de temas que no tengan componente ideológico evidente. Los populares buscan debilitar el voto ideológico, desplazar de la agenda mediática y de la agenda pública los temas que pudieran hacer más visible su desventaja ideológica en relación con el PSOE. El proceso de paz con ETA, los atentados del 11-M, la política territorial con el *Estatut* catalán como estandarte, la crisis económica... y también la inmigración han sido temas transversales que sirven al PP para atacar al Gobierno socialista. El Partido Popular pues trata de desactivar el voto ideológico con el objetivo primordial de promover la abstención entre los votantes del PSOE más moderados. La inmigración se ajusta a este objetivo.

Según los barómetros del CIS, un porcentaje significativo de españoles considera que la legislación de extranjería debería endurecerse; que hay demasiados inmigrantes en España; que los autóctonos deberían tener preferencia en el acceso a determinados servicios públicos; que existe una relación directa entre inmigración y delincuencia; y que el extranjero debería renunciar a los aspectos de su cultura que *molesten* a los españoles. Según hemos comprobado a lo largo de este libro con la recopilación de mensajes desde 2005, el Partido Popular ha aprovechado todas estas percepciones negativas para construir su discurso sobre el fenómeno. Los dirigentes del Partido Popular han abogado por una política de orden y control en la gestión de la inmigración, frente a la presunta indolencia del Gobierno socialista; han utilizado el mensaje de *aquí no cabemos todos* para denunciar la llegada de extranjeros; han vinculado abiertamente la presencia de inmigrantes con el deterioro de los servicios públicos y con la merma de los derechos de los españoles; han propuesto que los

inmigrantes firmen un contrato de integración con el que se comprometerían a asumir las costumbres españolas...

El Partido Popular se encuentra con un escenario perfecto para aprovechar el uso de la inmigración en beneficio electoral propio. Dos de las variables que más influyen en la aparición de actitudes de rechazo hacia la inmigración son el nivel de ingresos y la cualificación profesional. Cuanto menor es la renta y más humilde el empleo, más proclive se será a tener una percepción negativa del extranjero (Cea D'Ancona y Valles, 2009). Esto es, entre los destinatarios que mejor pueden acoger el discurso duro del PP se encuentran trabajadores poco cualificados de clase baja o media baja y que residen en barrios o municipios humildes, que son integrantes tradicionales caladeros de votos del PSOE.

En paralelo, un análisis detallado de los barómetros mensuales del CIS permite comprobar que la imagen de la inmigración como un problema no es exclusiva de los ciudadanos de derechas, y que una parte amplia de la izquierda y el centro se convierte en destinatarios potenciales de un discurso duro sobre inmigración. Entre los electores que se declaran de izquierda o centro-izquierda se aprecia una importante proporción de reacios a la inmigración. Y del mismo modo, el porcentaje de votantes del PSOE que ve la inmigración como un problema para España es muy ligeramente inferior al que presentan los votantes del PP. Los discursos políticos se verán así condicionados de forma crucial por el porcentaje de electores progresistas que ven la inmigración como un problema; dado que, aunque el contingente de reacios sea proporcionalmente menor que entre los conservadores, puede ser mayor en términos absolutos (y a la postre en número de votos) ya que los españoles se declaran muy mayoritariamente de centro izquierda o izquierda.

El de la inmigración es un tema que ofrece al PP oportunidades manifiestas de alcanzar sus objetivos estratégicos: un tema transversal que despierta actitudes de rechazo tanto en la izquierda como en la derecha; que preocupa tanto a sus votantes como a los votantes socialistas; y que, por todo ello, encaja en su intento de reducir la participación en el electorado de izquierda y de centro para compensar su desventaja ideológica en relación al PSOE. Los estrategas del PP no han querido dejar la inmigración como uno de los grandes temas en torno a los que hacer girar su labor de oposición.

La(s) respuesta(s) del PSOE

La apuesta del Partido Popular por el discurso de mano dura contra la inmigración para tratar de sacar rédito electoral es clara. La respuesta del PSOE, en cambio, es ambivalente. Por un lado, asume una función pedagógica en torno al fenómeno en defensa de los derechos de los extranjeros y ataca al PP equiparando su discurso con el de la extrema derecha europea. Por otro, los socialistas combaten los mensajes del PP simplemente imitándolo y ofrecen su propia versión del discurso de mano dura para no perder el respaldo de sus caladeros tradicionales de voto más afectados por la competencia de la población extranjera por unos mismos servicios y prestaciones sociales.

Como hemos visto a lo largo del libro, el discurso socialista es doble. Para los votantes que no encuentran motivos para rechazar la inmigración, el discurso se articula en positivo, para contraponerlo a la denuncia apocalíptica del PP. Y para los electores más reacios a la inmigración y que pueden aproximarse a las tesis del PP, el discurso socialista se torna negativo. El Gobierno socialista necesita este doble lenguaje en su estrategia de atender a objetivos aparentemente contrapuestos. Critica ferozmente los mensajes del PP equiparándolos a los de la extrema derecha para reforzar su imagen

de formación radical. Intenta así restar apoyos al PP entre su electorado más moderado y, al tiempo, mantener movilizados a los votantes socialistas que se colocan más a la izquierda. Pero el Ejecutivo socialista también se ha prestado a promover un discurso de mano dura, de control y seguridad, para no perder el respaldo de sus votantes, tanto de centro como de izquierda, que más reacios se muestran a la inmigración y que podrían verse tentados por el discurso de los populares.

El PP se decanta sin tapujos por la interpretación reactiva del fenómeno de la inmigración. El PSOE, en cambio, combina –alternativa o simultáneamente, según el momento- el discurso reactivo y el proactivo sobre la presencia de extranjeros para atender las *necesidades* de ambos públicos potenciales. Las causas de este doble discurso socialista se encuentran en los éxitos (relativos, pero contundentes) de la estrategia de oposición del PP.

Durante la legislatura 2004-2008, la respuesta del PSOE a los ataques del PP con la inmigración como excusa fue la de un discurso claramente proactivo, de defensa de la multiculturalidad, de reconocimiento de los derechos de los extranjeros, de un pragmatismo en la gestión del fenómeno pero con humanitarismo... Pero las elecciones generales de 2008 suponen un antes y un después en el discurso del Gobierno socialista en torno a la inmigración. El Partido Socialista volvió a ganar en esas elecciones. Aparentemente, la estrategia de crispación ejecutada por el PP durante los cuatro años anteriores había sido un fracaso: no le había devuelto al poder y no había conseguido promover la abstención (la participación alcanzó el 75,32%, sólo 34 centésimas menos que en los anteriores comicios). Pero los efectos de la dura oposición de los populares sí que se dejaron notar en la distribución del voto.

El Partido Popular sí alcanzó parte de los objetivos que buscaba con su estrategia de crispación durante la legislatura y con las medidas destinadas a los votantes

tradicionales del PSOE (entre ellas las propuestas sobre inmigración). El PP consiguió desplazar al PSOE del centro político. Los resultados de las elecciones generales reflejan que el apoyo al PSOE de los votantes de centro (centro izquierda y centro derecha) se desinfló, mientras que se incrementó en el caso del PP. El Partido Popular, lejos de repeler al votante moderado con su dura oposición, aventajó a los socialistas en más de 10 puntos en voto captado entre el electorado de centro. El socialista José Luis Rodríguez Zapatero consiguió repetir victoria, pese a perder el apoyo del centro, gracias a aumentar el respaldo entre los votantes situados más a la izquierda, movilizados por la radicalizada actitud del PP (González y Bouza, 2009).

El PSOE, aun de nuevo en el Gobierno, iniciaba la legislatura en una situación de mayor debilidad estratégica al perder una parte sustancial de sus votantes de centro. El objetivo que se marcaron los socialistas fue el de recuperar a esos electores moderados que se habían quedado en casa o incluso habían optado por el PP en la cita con las urnas. Y entre otras medidas para conseguirlo, el nuevo Ejecutivo rediseñó el discurso que sobre la inmigración había mantenido el gabinete anterior. Con Celestino Corbacho como nuevo ministro de Trabajo e Inmigración, las posiciones socialistas viraron y se apostó por un progresivo endurecimiento de las políticas y de los mensajes.

Durante la legislatura 2008-2012 el PSOE ha optado por combatir el discurso duro del Partido Popular por igualación, emulando el tono, las retóricas y los *marcos conceptuales* (Lakoff, 2007 y 2008) utilizados por los populares. Como ya se ha apuntado, las actitudes negativas hacia la inmigración ni son exclusivas de la derecha ni de los votantes tradicionales del Partido Popular. Son muchos los que desde la izquierda y desde las filas del PSOE identifican la inmigración como un problema. Por ello, los socialistas encuentran con que abordar la inmigración con un mensaje abiertamente positivo pone en peligro una porción sustancial de su electorado. Pero

que el PSOE, en su intento de no perder terreno en este tema respecto del PP, no renuncie a la baza del discurso de mano dura tiene un gran coste. Que los dos partidos con opciones de gobernar repitan mensajes similares en este sentido hace que se asiente entre los ciudadanos la percepción de la inmigración como problema. La búsqueda de réditos electorales fomenta una suerte de xenofobia institucional (De Lucas, 2008).

La decisión del PSOE de imitar el discurso del PP contra la inmigración, de emular la dureza en el mensaje de los populares para dejar de ser el partido del *papeles para todos*, lleva a los votantes (también a los votantes socialistas) a asumir que en el debate sobre la inmigración el PP fundamentalmente tenía razón. Si se utilizan los marcos conceptuales y la terminología del rival, es probable que la visión que éste ofrece pase a ser percibida, también por los electores propios, como la correcta, como la natural e incluso neutral (Lakoff, 2007).

Aunque desde el PSOE se siga atacando el discurso xenófobo, de extrema derecha y demagógico de los populares, el endurecimiento de políticas y mensajes en que el Gobierno se embarcó desde 2008 da a entender al ciudadano que la mano dura es la única vía para controlar el fenómeno inmigratorio. Que el Ejecutivo socialista optara por construir un nuevo discurso restrictivo con el que vincula inmigración y crisis económica, que conecta inmigración y los problemas de los servicios públicos, tiene como consecuencia que se dé mayor verosimilitud a las advertencias lanzadas machaconamente desde las filas del PP y que parezca que se avalan las políticas propuestas por los populares. Si los dos partidos mayoritarios ofrecen discursos similares, buena parte de los ciudadanos darán por buena la interpretación (negativa) que del fenómeno de la inmigración articulan esos mensajes cada vez más duros.

¿Dos modelos? ¿Dos discursos?

El debate político puede serlo..., o ser simplemente barullo. Puede haber intercambio de proyectos de diferentes sensibilidades políticas, o tan sólo ruido. Durante la legislatura 2004-2008, como hemos visto, el Partido Popular convirtió la inmigración por vez primera en un tema central de la confrontación partidista. Sin embargo, durante esos años no hubo en verdad debate político, no existió un intercambio de ideas sobre cómo afrontar un fenómeno de calado intergeneracional e implicaciones históricas. Hubo simplemente un cruce de acusaciones entre los dos grandes partidos, ataques y reproches de ida y vuelta. Nada que se pareciera a una contraposición de propuestas para gestionar un proceso tan complejo.

Puede considerarse que las elecciones generales de 2008 representan un salto cualitativo en este sentido. Y es que las propuestas que presentó el Partido Popular en esa campaña (singularmente todas las que giran en torno al famoso contrato de integración para extranjeros) podrían llegar a constituir el embrión de un modelo alternativo de gestión de la inmigración en España (Fundación Alternativas, 2008).

Hasta esas elecciones, parecía que existía un consenso mínimo sobre el modelo de políticas de inmigración que los sucesivos Gobiernos, de distinto signo, habían mantenido. Aunque el PP había introducido durante toda la legislatura la inmigración como materia con la que atacar al Ejecutivo socialista, la ausencia de propuestas alternativas por parte de los populares hacía pensar que las grandes líneas del *modelo español* no se trastocarían. Un modelo que pasa por aceptar tantos inmigrantes como requiere el mercado de trabajo; reconocer los derechos a todos los inmigrantes, incluso a los irregulares; trabajar para la mejora constante del control de los flujos; promover la integración tratando de solventar los obstáculos, y no creando otros nuevos que podrían ser origen de conflictos de convivencia; cooperar tanto con los

países de origen como los de tránsito de la inmigración que llega a España (Fundación Alternativas, 2008).

El discurso que el PP ha articulado en los últimos años supone una falla en algunas de las líneas maestras de este modelo español. La polémica en torno al empadronamiento de los inmigrantes irregulares y su acceso a los servicios públicos instrumentada por el Partido Popular, y los eventuales problemas de integración que los populares pretenden resolver a través del contrato que obligarían a firmar a los extranjeros residentes, entre otros factores, podrían llegar a suponer un revés para la continuidad de unos rasgos que parecían permanentes en la política de inmigración de los diferentes gobiernos españoles.

Existe pues el riesgo de que se consoliden dos posturas contrapuestas en materia de inmigración que podrían traducirse en dos modelos distintos de gestión del fenómeno. Por las características propias del proceso de multiculturalidad, inherentemente de largo plazo e intergeneracional, no resulta recomendable que el modelo de políticas de inmigración esté sometido a cambios constantes al albur de la alternancia de los dos grandes partidos en el poder. El PSOE, incluso con el endurecimiento de posicionamientos y mensajes durante su segunda legislatura en el Gobierno, ha mantenido las posiciones básicas de lo que parecía constituir un consenso mínimo en torno a esta materia. El PP, en cambio, parece dispuesto a revisar parte del modelo cuando regrese a Moncloa.

El discurso no es sólo palabras

El discurso político, si realmente lo es, no es sólo palabras. Identifica problemas y propone soluciones. Constituye una interpretación particular de la realidad y es un paso (el primero o no) para transformarla. No es sólo palabras, es política en sí mismo.

Y sus implicaciones y sus consecuencias, por ello, van más allá de la esfera de la comunicación.

La importancia de los discursos políticos reside en su capacidad para legitimar tanto percepciones como acciones de los ciudadanos. Las palabras pronunciadas desde el Gobierno o desde los partidos de oposición pueden llegar a justificar las actitudes negativas hacia el extranjero de parte de la ciudadanía y pueden servir de acicate para comportamientos de rechazo. Entre la mera percepción y la acción hay una pequeña frontera que cualquiera puede llegar a traspasar si se siente respaldado por el discurso de determinadas formaciones políticas. La elección pues de un tipo de discurso y unas políticas concretas en torno a la inmigración (las políticas también constituyen una realidad discursiva) no es inocua. Condiciona y puede llegar a determinar la percepción social general sobre el fenómeno.

Los políticos tienen una responsabilidad con la convivencia. Deben promoverla, o al menos no alterarla. Sus discursos contribuyen a conformar la imagen que de la inmigración tiene el conjunto de los ciudadanos, y sirven a muchos para justificar y legitimar actitudes y acciones (no siempre en positivo) con respecto a la población extranjera. Y más teniendo en cuenta que las opiniones de los ciudadanos se perfilan en torno a percepciones y no a realidades (Zapata-Barrero, 2008). Los barómetros del CIS y otros estudios revelan que los españoles perciben que en el país residen muchos más extranjeros que los que realmente hay (*); que los inmigrantes utilizan los servicios públicos más que los españoles, aunque hacen un uso muy inferior al que proporcionalmente le correspondería por su peso demográfico (García Mayo y Page, 2008b; García Mayo y Page, 2010a); que los extranjeros aportan a las arcas públicas

(*) El barómetro de noviembre de 2005, hasta la fecha el último dedicado específicamente a la inmigración, revelaba que sólo el 16% de los españoles sabía que los extranjeros representaban menos del 10% del total de la población (entonces su peso se encontraba, según diferentes fuentes estadísticas entre el 6 y el 8% del total de residentes). El resto, o no sabía cuántos inmigrantes había (un 31% de los encuestados) o tenía la percepción de que eran muchos más que la cantidad real. Hasta un 6,6% de los encuestados pensaba que más de la mitad de los residentes en España eran de origen extranjeros. ¡Más de la mitad!

menos de lo que reciben a través de prestaciones y servicios sociales, cuando los datos disponibles apuntan en sentido contrario (García Mayo y Page, 2008a)... ¿Qué responsabilidad tienen los políticos y los medios de comunicación en esta percepción distorsionada? Los políticos que se mueven a golpe de eslogan y los medios que optan por el titular fácil quizá hayan contribuido a las impresiones hiperbólicas y a la desinformación.

El proceso de multiculturalidad que lleva emparejada la inmigración es global y es irreversible. No hay marcha atrás. Defender el regreso a un pasado monocultural es simplemente una entelequia. Las nuevas sociedades, las presentes y las futuras, serán las del mestizaje, en las que muy diferentes culturas comparten un mismo espacio público. En este nuevo escenario el discurso de nuestros políticos, como los de cualquier otro país del mundo, debe recuperar la función pedagógica que permita afrontar sin sobresaltos la coexistencia de autóctonos y extranjeros. Una función pedagógica que pasa por fomentar la empatía recíproca entre unos y otros, potenciar los parecidos y no las diferencias, promover los valores democráticos... (Zapata-Barrero, 2008).

La decisión del PP y, a momentos, también del PSOE de plantear el fenómeno inmigratorio como un conflicto entre españoles y extranjeros puede convertirse en el caldo de cultivo perfecto para hacer aflorar sentimientos xenófobos y comportamientos racistas. Que algunos dirigentes políticos planteen que existe una competencia entre autóctonos e inmigrantes por unos mismos servicios públicos y se alerte de un supuesto favoritismo para con los inmigrantes, puede llegar a generar percepciones en términos de agravio comparativo que deriven en actitudes de rechazo generalizado, y más en tiempos de crisis. Que los partidos hagan advertencias apocalípticas sobre las consecuencias de toda índole de tener un creciente contingente de inmigrantes puede

generar problemas de convivencia, hasta el momento puntuales en el caso de la sociedad española.

Los partidos políticos ven condicionadas hasta el extremo todas sus actuaciones por el sistema electoral que da y quita el poder. Cada formación elige temas y articula sus mensajes en búsqueda del mayor rédito electoral posible. Es comprensible. El convencimiento, que en el caso español parece generalizado entre nuestra clase política, de que un discurso abiertamente proactivo y de defensa de las bondades de la inmigración resta votos, lleva a los partidos a rehuir este tipo de mensajes.

El discurso elegido es el más aceptado entre los *clientes*: una más o menos imprecisa política de orden y control que pretende poner fin a todos los problemas económicos, sociales, culturales, de convivencia, administrativos... que supuestamente provoca la presencia de extranjeros. Un discurso que tiene un destinatario claro, el único posible. El destinatario es el votante, y el votante no es inmigrante, es español (**). El reconocimiento del derecho de voto a los extranjeros integrados en el país (por ejemplo, a los que tienen residencia permanente) en todas las elecciones, no sólo las municipales, pondría en jaque este discurso unívoco. Si los inmigrantes no fueran sólo objeto de los discursos políticos, sino también destinatarios, resulta previsible que los grandes partidos revisarían algunos de sus postulados para defender sus posiciones electorales. Quizá un día pueda comprobarse con las reformas legislativas oportunas. Los políticos españoles han demostrado que condicionan su actuación y su discurso en torno a la inmigración a las necesidades del guión convencional y generalizado, y los ajustan a las rigideces del corsé del cortoplacismo electoral. Pero la gestión de la inmigración requiere una visión histórica más allá de las próximas elecciones. Resulta exigible a nuestros políticos mayor altura de miras. Al menos en esto.

(**) La legislación española reconoce el voto a los extranjeros exclusivamente en las elecciones municipales. El derecho a voto para foráneos está reservado para ciudadanos de países de la Unión Europea, así como para los nacionales de estados con los que se ha firmado acuerdos de reciprocidad (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y Cabo Verde).

BIBLIOGRAFÍA

Libros

- ABAD MÁRQUEZ, Luis. *Inmigración, pluralismo y tolerancia*. Editorial Popular, Madrid, 1993.
- AJA, Eliseo, ARANGO, Joaquín y OLIVER, Josep (eds.). *Anuario de la Inmigración en España 2009. Inmigración en tiempos de crisis*. Ediciones Bellaterra, Barcelona, 2010.
- AJA, Eliseo, ARANGO, Joaquín y OLIVER, Josep (dir.). *Anuario de la Inmigración en España 2010. Inmigración y crisis económica. Impactos actuales y perspectivas de futuro*. Ediciones Bellaterra, Barcelona, 2011.
- ÁLVAREZ GÁLVEZ, Javier. *La representación mediática de la inmigración. Entre el encuadre y el estigma*. Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Migraciones Internacionales, nº 80, 2009, pp. 61-80.
- ANSOLABEHRE, Stephen e INYEGAR, Shanto. *Going negative. How attack ads shrink and polarize de electorate*. Free Press, Nueva York, 1995.
- BARREIRO, Belén. *La progresiva desmovilización de la izquierda en España: un análisis de la abstención en las elecciones generales de 1986 a 2000*. Revista Española de Ciencia Política, 6, 2002. pp 183-205.
- BLUMENTHAL, Sidney. *The permanent campaign: Inside the world of elite political operatives*. Beacon Press, Boston, 1980.
- BOLDRIN, Michele (coord.). *Efectos económicos de la inmigración en España*. Fedea y Marcial Pons, Madrid, 2009.
- BURNS, Meter y GIMPEL, James. *Economic insecurity, prejudicial stereotypes and public opinion on immigration policy*. Political Science Quarterly, nº 115, 2000, pp.201-205.
- CAMPO, Salustiano Del y TEZANOS, José Félix (eds.). *España siglo XXI. La sociedad*. Biblioteca Nueva, Madrid, 2008.
- CANEL, María José. *Comunicación política. Una guía para su estudio y práctica*. Tecnos, Madrid, 1999.
- CATTANI, Adelino. *Expresarse con acierto*. Alianza Editorial, Madrid, 2010.
- CEA D'ANCONA María Ángeles. *Inmigración, racismo y xenofobia en la España del nuevo contexto europeo*. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2007.
- CEA D'ANCONA, María Ángeles y VALLES, Miguel S. *Evolución del racismo y la xenofobia en España. Informe 2008*. Ministerio de Trabajo e Inmigración, Madrid, 2008.
- CEA D'ANCONA, María Ángeles y VALLES, Miguel. *Evolución del racismo y la xenofobia en España. Informe 2009*. Ministerio de Trabajo e Inmigración, Madrid, 2009.
- CEA D'ANCONA, María Ángeles. *Estabilidad y cambios de las actitudes ante la inmigración: un análisis cuantitativo*, en AJA, Eliseo, ARANGO, Joaquín y OLIVER, Josep (dir.). *Anuario de la Inmigración en España 2010. Inmigración y crisis económica. Impactos actuales y perspectivas de futuro*. Ediciones Bellaterra, Barcelona, 2011.
- CHECA Y OLMOS, Francisco (ed.). *La inmigración sale a la calle. Comunicación y discursos políticos sobre el fenómeno migratorio*. Icaria, Barcelona, 2008.
- CITRIN, J., GREEN, D. P., MUSTE, C., y WONG, C. *Public opinion towards immigration reform: the role of economic motivations*. The Journal of Politics, nº 59, 1997, pp.858-881.
- CITRIN, J., SEARS, D. O., MUSTE, C. y WONG, C. *Multiculturalism in American public opinion*. British Journal of Political Science, nº 31, 2001, pp. 247-275.

- COENDERS, Marcel, LUBBERS, Marcel, y SCHEEPERS, Peer. *Majority populations' attitudes towards migrants and minorities*. European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, Bruselas, Ref nº 2003/04/01. 2004.
- DALTON, Russell y WATTENBERG, Martin (comps.). *Parties without partisans: political change in advance industrial democracies*. Oxford University Press, Oxford, 2000.
- DEHESA, Guillermo De la. *Comprender la inmigración*. Alianza Editorial, Madrid, 2008.
- DÍEZ NICOLÁS, Juan. *Opinión pública y políticas de inmigración*, en ZAPATA-BARRERO, Ricard (coord.). *Políticas y gobernabilidad de la inmigración en España*. Ariel, Barcelona, 2009.
- DOWNS, Anthony. *Teoría económica de la democracia*. Aguilar, Madrid, 1973.
- FUNDACIÓN ALTERNATIVAS. *Informe sobre la democracia en España / 2007. La estrategia de la crispación*. Fundación Alternativas, Madrid, 2007.
- FUNDACIÓN ALTERNATIVAS. *Informe sobre la democracia en España / 2008. La estrategia de la crispación. Derrota, pero no fracaso*. Fundación Alternativas, Madrid, 2008.
- FUNDACIÓN IDEAS. *La contribución de la inmigración a la economía. Evidencias y perspectivas de futuro*. Fundación Ideas, Madrid, 2011.
- GARCÍA BEAUDOUX, Virginia, D'ADAMO, Orlando y SLAVINSKY, Gabriel. *Comunicación política y campañas electorales. Estrategias en elecciones presidenciales*. Gedisa, Barcelona, 2005.
- GIL CALVO, Enrique. *La lucha política a la española. Tragicomedia de la crispación*. Taurus, Madrid, 2007.
- GIMENO, L. *Actitudes ante la inmigración*. Centro de Investigaciones Sociológicas (nº 34), Madrid, 2001.
- GONZÁLEZ, Juan Jesús y BOUZA, Fermín. *Las razones del voto en la España democrática. 1977-2008*. Los Libros de la Catarata, Madrid, 2009.
- HIRSCHMAN, Alberto O. *Retóricas de la intransigencia*. Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1991.
- IGUARTÚA, J.J., HUMANES, M.L., MUÑIZ, C., CHENG, L. MELLADO, C., MEDINA, E., Y ERAZO, M. A. *Tratamiento informativo de la inmigración en la prensa española y la opinión pública*. Ponencia del VII Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación. La Plata (Argentina), 11-16 de octubre de 2004.
- IGARTÚA, Juan José y MUÑIZ, Carlos. *Medios de comunicación, inmigración y sociedad*. Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2007.
- IGUARTÚA, J.J., MUÑIZ, C., CALVO, P., OTERO, J.A. y MERCHÁN, J. *La imagen de la inmigración en la prensa y en la televisión. Aproximaciones empíricas desde la teoría del framing*, en SABUCEDOS, J. M., ROMAY, J. y LÓPEZ-CORDÓN, A. (comps.). *Psicología política, cultura, inmigración y comunicación social*. Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 2005.
- LAKOFF, George. *No pienses en un elefante*. Editorial Complutense, Madrid, 2007.
- LAKOFF, George. *Puntos de reflexión. Manual del progresista*. Ediciones Península, Barcelona, 2008.
- LUCAS, Javier De. *¿Ciudadanía para los inmigrantes después del Tratado Constitucional de la UE?*, en CHECA Y OLMOS, Francisco. *La inmigración sale a la calle. Comunicación y discursos políticos sobre el fenómeno migratorio*. Icaria, Barcelona, 2008.
- MANIN, Bernard. *Los principios del Gobierno representativo*. Alianza Editorial, Madrid, 1998.
- McCOMBS, Maxwell. *Estableciendo la agenda. El impacto de los medios en la opinión pública y en el conocimiento*. Ediciones Paidós, Barcelona, 2006.
- MARAVALL, José María. *La confrontación política*. Taurus, Madrid, 2008.

- MILLER, William y NIEMI, Richard. *Voting: choice, conditioning and constraint*, en LEDUC, L., NIEMI, R. y NORRIS, P. (comps.). *Comparing democracies 2. New challenges in the study of elections and voting*. Sage, Londres, 2002.
- MORENO, Francisco Javier y BRUQUETAS, María. *Inmigración y Estado del Bienestar en España*. Obra Social La Caixa, Barcelona, 2011.
- PAJARES, Miguel. *Inmigración y mercado de trabajo. Informe 2009*. Ministerio de Trabajo e Inmigración, Madrid, 2009.
- PAJARES, Miguel. *Inmigración y mercado de trabajo. Informe 2010*. Ministerio de Trabajo e Inmigración, Madrid, 2010.
- PAPELL, Antonio. *Zapatero 2004-2008. La legislatura de la crispación*. Foca, Madrid, 2008.
- PETROCIK, John. *Issue ownership in presidential elections*, en *American Journal of Political Science*, nº 58, 1996, pp. 825-850.
- REY MORATÓ, Javier Del. *Comunicación política, Internet y campañas electorales. De la teledemocracia a la ciberdemocracia*. Editorial Tecnos, Madrid, 2007.
- RIKER, William. *Liberalism against populism*. Waveland Press, Prospect Heights, 1982.
- RINKEN, Sebastián. *La evolución de las actitudes ante la inmigración en tiempos de crisis económica*, en AJA, Eliseo, ARANGO, Joaquín y OLIVER, Josep (dir.). *Anuario de la Inmigración en España 2010. Inmigración y crisis económica. Impactos actuales y perspectivas de futuro*. Ediciones Bellaterra, Barcelona, 2011.
- RIUS SANT, Xavier. *El libro de la inmigración en España*. Almuzara, Córdoba, 2007.
- RODRÍGUEZ BORGES, Rodrigo Fidel. *El discurso del miedo. Inmigración y prensa en la frontera sur de la Unión Europea*. Plaza y Valdés, Madrid, 2010.
- SEQUÉN-MÓNCHÉZ, Alexander. *El cálculo egoísta. Inmigración y racismo en la España del siglo XXI*. Editorial Trotta, Madrid, 2010.
- TORREGROSA CARMONA, Juan Francisco. *Ética y representación mediática de la inmigración*, en CHECA Y OLMOS, Francisco. *La inmigración sale a la calle. Comunicación y discursos políticos sobre el fenómeno migratorio*. Icaria, Barcelona, 2008.
- VAN DIJK, Teun A. *Racismo y discursos de la élites*. Gedisa, Barcelona, 2003.
- VAN DIJK, Teun A. *Reproducir el racismo: el rol de la prensa*, en CHECA Y OLMOS, Francisco. *La inmigración sale a la calle. Comunicación y discursos políticos sobre el fenómeno migratorio*. Icaria, Barcelona, 2008.
- ZAPATA-BARRERO, Ricard. *Multiculturalismo e inmigración*. Síntesis, Madrid, 2004.
- ZAPATA-BARRERO, Ricard. *El análisis del discurso como indicador del proceso de multiculturalidad: programa de investigación*, en CHECA Y OLMOS, Francisco. *La inmigración sale a la calle. Comunicación y discursos políticos sobre el fenómeno migratorio*. Icaria, Barcelona, 2008.
- ZAPATA-BARRERO, Ricard. *Fundamentos de los discursos políticos en torno a la inmigración*. Editorial Trotta, Madrid, 2009.
- ZAPATA-BARRERO, Ricard (coord.). *Políticas y gobernabilidad de la inmigración en España*. Ariel, Barcelona, 2009.
- ZAPATA-BARRERO, Ricard; GONZÁLEZ, Elisabet y SÁNCHEZ MONTIJANO, Elena. *El discurso político en torno a la inmigración en España y en la Unión Europea*. Ministerio de Trabajo e Inmigración, Madrid, 2008.
- ZAPATA-BARRERO, Ricard y VAN DIJK, Teun A. *Discursos sobre la inmigración en España*. Fundación Cidob, Barcelona, 2007.

Artículos y reportajes

- GARCÍA, Jesús. *Contra el burka (que da votos)*, en El País. Prisa. Madrid. 3 de junio de 2010.
- GARCÍA MAYO, María y PAGE, David. *Inmigrantes, ¿para qué?*, en Actualidad Económica, nº 2.602. Unidad Editorial. Madrid. 25 de abril de 2008 (a).
- GARCÍA MAYO, María y PAGE, David. *Mitos rotos sobre la inmigración*, en Actualidad Económica, nº 2.630. Unidad Editorial. Madrid. 7 de noviembre de 2008 (b).
- GARCÍA MAYO, María y PAGE, David. *Mitos sobre inmigración (I): Ni son el problema de las cuentas municipales ni usan más los servicios públicos*, en Expansión.com. Unidad Editorial. Madrid. 2 de febrero de 2010 (a).
- GARCÍA MAYO, María y PAGE, David. *Mitos sobre inmigración (II): Con crisis o sin ella harán falta más inmigrantes*, en Expansión.com. Unidad Editorial. Madrid. 19 de febrero de 2010 (b).
- PAGE, David. *Atrapados por la crisis*, en Actualidad Económica, nº 2.651-2.652. Unidad Editorial. Madrid. 3 de abril de 2009.
- PAGE, David. *Mitos sobre inmigración (VIII): Los españoles que hoy emigran... ¿ya estaban allí?*, en Expansión.com. Unidad Editorial. Madrid. 5 de septiembre de 2011.
- PAGE, David. *Mitos sobre inmigración (IX): España 'importa' empresarios: el inmigrante es más emprendedor durante la crisis*, en Expansión.com. Unidad Editorial. Madrid. 2 de noviembre de 2011.
- PAGE, David y GARCÍA MAYO, María. *Mitos sobre inmigración (III): El efecto llamada se llamaba empleo*, en Expansión.com. Unidad Editorial. Madrid. 6 de julio 2010 (a).
- PAGE, David y GARCÍA MAYO, María. *Mitos sobre inmigración (IV): Lo que nadie le cuenta de las estadísticas sobre inmigración*, en Expansión.com. Unidad Editorial. Madrid. 16 de septiembre de 2010 (b).
- PAGE, David y GARCÍA MAYO, María. *Mitos sobre inmigración (V): ¿Por qué tantos políticos hablan tan mal del inmigrante?*, en Expansión.com. Unidad Editorial. Madrid. 26 de noviembre de 2010 (c).
- PAGE, David y GARCÍA MAYO, María. *Mitos sobre inmigración (VI): Los inmigrantes aportan al Estado más de lo que reciben... también en plena crisis*, en Expansión.com. Unidad Editorial. Madrid. 5 de mayo de 2011.
- PAGE, David y GARCÍA MAYO, María. *Mitos sobre inmigración (VII): Los inmigrantes más cualificadazos ganan peso en la España de la crisis*, en Expansión.com. Unidad Editorial. Madrid. 14 de julio de 2011.
- PINYOL, Gemma. *Cuando la xenofobia dirige la acción política*. Opinión CIDOB nº 57. Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona. Barcelona. Febrero de 2010.
- XIMÉNEZ SANDOVAL, Pablo. *Los inmigrantes salvan el Estado del bienestar*, en El País. Prisa. Madrid. 16 de junio de 2008.
- ZAPATA-BARRERO, Ricard. *Discurso político sobre la inmigración*, en El País. Prisa. Madrid, 23 de octubre de 2004.

APÉNDICE

Medios de comunicación consultados:

El País. El Mundo. Agencia Efe. Europa Press. Expansión.com. La Vanguardia.
El Periódico de Catalunya. ABC.

Sitios de Internet consultados:

- Centro de Investigaciones Sociológicas www.cis.es
- Instituto Nacional de Estadística www.ine.es
- Instituto de Estadística de Cataluña www.idescat.cat
- Ministerio del Interior de España www.mir.es
- Ministerio de Trabajo e Inmigración www.mtin.es
- Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia www.oberaxe.es
- Observatorio Permanente de la Inmigración
<http://extranjeros.mtas.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion/>
- Partido Popular www.pp.es
- Partido Socialista Obrero Español www.psoe.es
- Convergència i Unió www.ciu.cat
- Youtube www.youtube.es
- Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona
www.cidob.org
- Fundación Alternativas www.falternativas.org
- Fundación Ideas para el Progreso www.fundacionideas.es
- Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales
www.fundacionfaes.org

ANEXO DOCUMENTAL

TABLA A.1.1**Evolución de la inmigración como problema para los españoles.**

Respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son, a su juicio, los tres problemas principales que existen actualmente en España?

año/mes	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	sep	oct	nov	dic	PROMEDIO
2000	0	0	0	0	0	0	0	6.3	6.5	5.4	9.9	7.0
2001	16.5	29.4	15.9	15.9	13.1	14.7	14.4	12.9	x	9.3	9.3	13.7
2002	14.0	16.8	14.9	13.3	22.0	26.3	24.1	20.3	15.8	14.4	12.0	17.6
2003	13.4	9.8	8.5	8.7	13.8	14.5	14.8	16.3	15.2	14.5	13.9	13.0
2004	14.8	12.9	9.2	11.8	14.9	17.1	15.8	20.4	19.2	19.3	17.8	15.7
2005	20.2	21.8	17.2	27.8	26.2	21.8	21.7	31.2	35.8	38.1	28.0	26.3
2006	32.5	26.7	32.7	29.8	43.7	38.0	35.9	59.2	49.0	40.0	38.3	38.7
2007	34.5	32.9	30.3	31.9	34.5	29.5	31.5	29.2	32.5	28.6	26.9	31.1
2008	23.7	27.3	26.0	26.1	28.5	26.9	27.9	28.4	24.5	20.3	19.5	25.4
2009	19.3	16.6	14.4	16.1	16.3	16.6	18.3	14.3	15.1	13.7	12.4	15.7
2010	16.6	16.5	13.5	13.3	14.1	12.5	12.4	15.4	14.0	14.7	13.8	14.3

Fuente: Elaboración propia con datos de los barómetros del CIS.

TABLA A.1.2**Evolución de la inmigración como problema personal para los españoles**

Respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son los tres problemas que a usted, personalmente, le afectan más?

año/mes	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	sep	oct	nov	dic	PROMEDIO
2000	0	0	0	0	0	0	0	2	1.5	1.7	3.4	2.2
2001	4.1	7.8	5.3	4.7	3.9	4.6	5.3	4.4	x	4.1	3.6	4.3
2002	5.3	6.3	5.8	4.3	9.3	9.3	9.5	10.4	6.3	5.4	4.9	7.0
2003	5.6	3.7	3.4	4.2	4.6	5.6	6.9	6.3	6	5.5	5.1	5.2
2004	5.7	5.6	4.5	4.9	6.3	7	7.3	7.5	7.7	7	7.8	6.5
2005	8	5.2	6.8	10	4.3	4.4	7.4	6.8	9.8	11.1	8.1	7.4
2006	11.4	6.9	9.5	9.7	14.9	12.1	11.8	18.1	15.4	11.6	12.3	12.2
2007	11.5	13.1	9.2	10	9.7	8.8	10.8	9.4	9.9	9.3	8.7	10.0
2008	7.9	9.6	8.4	8.1	9.7	8.5	7.9	7.9	6.9	5.3	6.1	7.8
2009	6.4	4.2	3.7	5	0	4.8	6.4	5.2	5.3	4.5	3.5	4.5
2010	4	5.6	4.6	4.3	4.9	3.9	4	4.4	3.7	4.5	4.6	4.5

TABLA A.2.1

**Evolución de la inmigración como problema para los españoles.
Por recuerdo de voto**

Respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son, a su juicio, los tres problemas principales que existen actualmente en España? En porcentaje.

AÑO 2005	(1-2)	(3-4)	(5-6)	(7-8)	(9-10)	N.S.	N.C.	TOTAL
oct-05	38.3	40.3	39.9	38.5	22.6	22.9	25.3	35.8
nov-05	32.2	41.9	38.2	43.9	35.1	28.8	38.3	38.1
dic-05	27.2	30.2	32.7	26	28.3	20.9	21.7	28
PROMEDIO	32.6	37.5	36.9	36.1	28.7	24.2	28.4	34.0

AÑO 2006	(1-2)	(3-4)	(5-6)	(7-8)	(9-10)	N.S.	N.C.	TOTAL
ene-06	33.5	32.2	33.3	39.1	39	20	32.9	32.4
feb-06	29.9	26.5	29.9	31.1	36.1	16.8	22.9	26.7
mar-06	33.5	31.1	35.5	37.8	44.7	24.5	30.5	32.6
abr-06	29.6	29.5	30.9	33.2	31.4	26.7	24.3	29.8
may-06	38.2	45.9	48.1	44.9	51.2	32.3	40.8	43.6
jun-06	28.4	38.6	40.5	47.2	43.1	28.2	37.7	38
jul-06	35.4	35.1	38.9	38.5	52.5	29	31.8	35.9
sep-06	58.4	60	65.9	64.1	57.5	48	51.9	59.2
oct-06	41.2	48.8	54	56.4	64.9	35.6	43.9	49
nov-06	39.5	39.2	41	47.3	54.7	30.4	39.6	40
dic-06	35.3	37.5	42.6	41.7	52.4	29.2	36.4	38.3
PROMEDIO	36.6	38.6	41.9	43.8	48.0	29.2	35.7	38.7

AÑO 2007	(1-2)	(3-4)	(5-6)	(7-8)	(9-10)	N.S.	N.C.	TOTAL
ene-07	28	33	39.1	46.9	32.4	20.8	34.9	34.5
feb-07	32.9	32.9	33.6	36.8	43.1	26.7	31.9	32.9
mar-07	24.4	26.5	34.7	43.2	30.4	22.5	28.4	30.3
abr-07	30.7	30.5	35	38.4	43.1	21.7	26.9	31.9
may-07	29.5	33.3	39.9	37.7	37.2	23.7	33.9	34.5
jun-07	32	27.3	32.4	31.1	33.3	23.8	28.9	29.5
jul-07	23.8	29.9	36.4	36.4	38.2	23.2	27.1	31.5
sep-07	26	27.3	34.2	33.3	34.8	22.7	25.5	29.2
oct-07	24.4	30.4	38.4	41.3	20	23	26.3	32.5
nov-07	24.5	31.5	30.5	29.9	38.9	20.6	24.7	28.6
dic-07	28.4	26.5	28.9	32.2	33.9	21.5	23.1	26.9
PROMEDIO	27.7	29.9	34.8	37.0	35.0	22.7	28.3	31.1

AÑO 2008	(1-2)	(3-4)	(5-6)	(7-8)	(9-10)	N.S.	N.C.	TOTAL
ene-08	17	24.1	24.7	29.8	30	16.6	25.1	23.7
feb-08	25.4	26.2	30.2	33.6	37	16.8	27.2	27.3
mar-08	21.6	27.1	26.8	35.7	25	19	22.5	26
abr-08	20.3	24.9	26.9	36.2	37.9	20.5	24.7	26.1
may-08	23.8	28.9	31	33.1	37.1	20.9	23.5	28.5
jun-08	22.1	26.8	29.7	41.7	28.1	17.2	21.5	26.9
jul-08	24.2	27.7	29.4	30	32.7	25.5	25	27.9
sep-08	25.2	30.9	30.5	32.9	31	20.8	22.9	28.4

oct-08	19.3	25.6	26.7	28.3	25	15.6	24.5	24.5
nov-08	16.2	21.1	21.4	22.7	27.3	9	24.1	20.3
dic-08	15.9	20.5	20.3	24.5	16.9	13.7	19.6	19.5
PROMEDIO	21.0	25.8	27.1	31.7	29.8	17.8	23.7	25.4

AÑO 2009	(1-2)	(3-4)	(5-6)	(7-8)	(9-10)	N.S.	N.C.	TOTAL
ene-09	15.4	17.8	22.6	23	25.5	15.2	13.8	19.3
feb-09	16.4	18.6	17.2	15.3	31.4	10.2	15.8	16.6
mar-09	13.1	14.7	14.3	17.6	14.5	9.5	16.8	14.4
abr-09	11.9	15.2	17.2	19.4	18.4	14.5	15.5	16.1
may-09	17.4	15	17.8	20.1	19.4	13.2	14.4	16.3
jun-09	14.9	15.4	18.6	23.2	16.4	12.2	12.9	16.6
jul-09	13.5	20.6	19.3	21.8	16.7	12.7	14.2	18.3
sep-09	10.7	13.5	16	17.3	19	10	13.8	14.3
oct-09	12.4	14.8	17.3	14.5	17.9	10.6	15.7	15.1
nov-09	14.5	14.1	12.6	19.5	19.5	10.3	12.9	13.7
dic-09	13.8	13	11.9	15.3	11.5	8.9	12.7	12.4
PROMEDIO	14.0	15.7	16.8	18.8	19.1	11.6	14.4	15.7

AÑO 2010	(1-2)	(3-4)	(5-6)	(7-8)	(9-10)	N.S.	N.C.	TOTAL
ene-10	14.5	17.3	17.3	16.7	24	12.9	15.1	16.6
feb-10	13.3	14.4	17.9	17.3	23	18.8	15.1	16.5
mar-10	11.2	13	15.4	13.3	27.5	8.6	13.6	13.5
abr-10	15.7	12.9	12.8	18	14	9.2	11	13.3
may-10	13	14.8	16.6	12.3	20	12.3	10.6	14.1
jun-10	12.6	12.4	12.8	11.9	25.4	8.9	13.1	12.5
jul-10	12.3	12.2	13.7	15.1	10.8	6.8	11.9	12.4
sep-10	9.4	13.3	17.6	16.2	41.9	11.6	15.2	15.4
oct-10	12.9	14.1	14.1	16.5	21.1	10.1	13.7	14.0
nov-10	16.5	15.7	15.0	16.2	18.8	11.4	10.4	14.7
dic-10	10.4	14.6	14.2	16.2	18.9	11.6	11.4	13.8
PROMEDIO	12.9	14.1	15.2	15.4	22.3	11.1	12.8	14.3

*Autoubicación ideológica de los encuestados de 1 a 10. 1 es extrema izquierda y 10 extrema derecha.
Fuente: Elaboración propia con datos de los barómetros del CIS.

TABLA A.2.2

Evolución de la inmigración como problema para los españoles. Por recuerdo de voto

Respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son, a su juicio, los tres problemas principales que existen actualmente en España? En porcentaje.

AÑO	ene-05	feb-05	mar-05	abr-05	may-05	jun-05	jul-05	sep-05	oct-05	nov-05	dic-05	Promedio
PSOE	0	0	0	0	0	0	0	0	37.3	39.2	29.7	35.4
PP	0	0	0	0	0	0	0	0	38.6	42.6	32.0	37.7
IU	0	0	0	0	0	0	0	0	32.1	34.8	21.8	29.6
CiU	0	0	0	0	0	0	0	0	60.4	49.2	30.0	46.5

AÑO 2006	ene-06	feb-06	mar-06	abr-06	may-06	jun-06	jul-06	sep-06	oct-06	nov-06	dic-06	Promedio
PSOE	33.6	24.5	33.1	29.5	45.3	37.5	35.6	63.1	49.8	38.0	39.8	39.1
PP	37.2	32.0	34.4	31.0	47.7	44.0	44.4	68.6	60.0	47.2	45.3	44.7
IU	22.6	27.2	31.6	25.3	42.9	25.6	31.3	53.0	43.2	35.4	27.5	33.2
CiU	33.3	43.9	38.1	40.9	60.4	40.0	40.7	78.3	66.0	46.7	45.2	48.5

AÑO 2007	ene-07	feb-07	mar-07	abr-07	may-07	jun-07	jul-07	sep-07	oct-07	nov-07	dic-07	Promedio
PSOE	31.1	31.8	28.9	33.0	34.0	27.6	30.3	29.2	32.4	31.2	27.8	30.7
PP	42.2	36.0	39.9	36.7	38.5	33.6	34.3	35.2	40.0	30.3	32.4	36.3
IU	35.8	26.1	29.9	25.3	34.7	29.8	21.3	23.1	25.8	27.8	21.0	27.3
CiU	54.5	32.4	32.6	64.3	60.6	43.6	46.9	36.8	47.2	48.7	40.0	46.1

AÑO 2008	ene-08	feb-08	mar-08	abr-08	may-08	jun-08	jul-08	sep-08	oct-08	nov-08	dic-08	Promedio
PSOE	23.7	27.3	24.5	24.5	27.9	25.7	27.2	30.8	24.9	19.5	20.2	25.1
PP	27.8	30.8	30.2	31.4	33.0	32.3	29.9	30.1	26.1	21.2	20.4	28.5
IU	22.1	25.4	27.3	20.9	24.3	23.2	20.2	21.3	9.9	25.3	18.2	21.6
CiU	29.3	44.1	43.6	38.3	44.0	38.2	44.2	40.0	27.3	26.3	35.9	37.4

AÑO 2009	ene-09	feb-09	mar-09	abr-09	may-09	jun-09	jul-09	sep-09	oct-09	nov-09	dic-09	Promedio
PSOE	17.8	18.7	14.4	14.7	14.2	15.9	17.4	12.7	15.5	14.0	13.1	15.3
PP	21.0	17.4	15.2	16.6	21.8	20.0	20.3	14.5	13.7	15.4	12.8	17.2
IU	17.0	14.3	11.0	15.5	15.0	12.1	19.7	10.5	10.3	7.3	10.7	13.0
CiU	25.0	35.9	21.6	35.9	17.5	17.8	39.5	8.1	12.5	16.1	22.0	22.9

AÑO 2010	ene-10	feb-10	mar-10	abr-10	may-10	jun-10	jul-10	sep-10	oct-10	nov-10	dic-10	Promedio
PSOE	16.8	17.2	11.9	13.9	16.2	12.7	11.8	15.7	14.1	15.4	12.5	14.4
PP	17.3	17.9	14.5	13.6	13.5	12.8	13.1	16.6	14.7	13.2	15.3	14.8
IU	13.1	8.7	7.6	8.9	11.0	9.2	6.3	12.5	12.5	19	11.8	11.0
CiU	37.0	22.2	31.4	22.2	43.2	21.7	21.8	28.9	22.4	30	30	28.3

Fuente: Elaboración propia con datos de los barómetros del CIS.

TABLA A.2.3

**Evolución de la inmigración como problema personal para los españoles.
Por recuerdo de voto**

Respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son los tres problemas que a usted, personalmente, le afectan más?

AÑO 2006	ene-06	feb-06	mar-06	abr-06	may-06	jun-06	jul-06	sep-06	oct-06	nov-06	dic-06	Promedio
PSOE	0	0	8.1	9.0	14.9	10.1	10.1	18.5	15.6	8.9	12.9	12.0
PP	0	0	11.2	12.2	17.1	15.7	15.8	21.5	20.9	17.4	16.0	16.4
IU	0	0	10.2	8.0	13.1	9.3	7.2	12.0	8.4	15.2	7.3	10.1
CiU	0	0	14.3	4.5	20.8	15.6	11.9	28.3	17.0	8.9	11.9	14.8

AÑO 2007	ene-07	feb-07	mar-07	abr-07	may-07	jun-07	jul-07	sep-07	oct-07	nov-07	dic-07	Promedio
PSOE	9.7	12.3	7.7	9.6	9.1	7.7	10.7	9.7	9.9	10.9	8.1	9.6
PP	18.1	16.1	13.7	13.4	12.7	12.0	13.5	11.4	12.1	10.5	10.0	13.0
IU	7.5	12.5	5.2	3.6	10.7	9.6	4.6	6.5	3.2	7.2	9.7	7.3
CiU	11.4	17.6	4.7	14.3	12.1	9.1	15.6	13.2	17.0	17.9	20.0	13.9

AÑO 2008	ene-08	feb-08	mar-08	abr-08	may-08	jun-08	jul-08	sep-08	oct-08	nov-08	dic-08	Promedio
PSOE	6.7	8.3	7.0	6.0	8.0	7.0	6.3	7.1	5.9	4.0	5.8	6.6
PP	10.7	13.4	9.7	11.1	15.0	10.7	10.7	9.7	6.8	6.7	7.2	10.2
IU	5.8	13.4	11.4	7.7	8.1	9.8	6.4	3.8	0.0	7.2	7.3	7.4
CiU	4.9	11.8	16.4	8.5	4.0	11.8	15.4	8.6	4.5	5.3	12.8	9.5

AÑO 2009	ene-09	feb-09	mar-09	abr-09	may-09	jun-09	jul-09	sep-09	oct-09	nov-09	dic-09	Promedio
PSOE	4.3	4.4	3.2	4.8	4.4	4.3	5.1	4.5	5.1	4.8	2.9	4.3
PP	7.3	4.9	4.4	5.2	8.1	5.2	8.3	5.8	6.8	4.7	4.6	5.9
IU	6.8	4.8	2.7	7.0	8.3	3.0	6.6	5.3	2.6	1.2	1.3	4.5
CiU	20.5	7.7	2.7	10.3	17.5	4.4	9.3	0.0	5.4	6.5	2.4	7.9

AÑO 2010	ene-10	feb-10	mar-10	abr-10	may-10	jun-10	jul-10	sep-10	oct-10	nov-10	dic-10	Promedio
PSOE	3.6	4.9	4.7	4.4	5.4	3.0	2.5	3.7	3.5	4.3	4.4	4.0
PP	4.1	7.7	5.9	3.7	5.8	3.8	1.4	6.1	4.1	5.3	6	4.9
IU	4.9	4.3	5.1	3.6	5.5	2.6	0	1	0	1.6	5.9	3.1
CiU	14.8	5.6	8.6	4.4	0.0	8.7	3.6	5.3	4.1	7.5	1.7	5.8

Fuente: Elaboración propia con datos de los barómetros del CIS.

¿Por qué los políticos españoles han convertido la inmigración en uno de los grandes temas en su disputa permanente por el poder? ¿Por qué el PP ha optado abiertamente por un discurso de mano dura con el inmigrante? ¿Por qué el PSOE alterna la pedagogía y la dureza en sus mensajes sobre la inmigración? El autor estudia detalladamente la evolución de los discursos de Partido Popular y Partido Socialista en torno a la inmigración desde que ésta se convirtió, en 2005, en uno de los temas centrales de su pugna por el poder. Los populares fueron los primeros en olvidar el tabú de utilizarla en la batalla política y electoral. Y los socialistas no han rehuido el embate. En este libro se analizan ampliamente las distintas motivaciones que llevan a uno y otro partido a hacer uso del tema y que determinan de qué forma articulan el mensaje. Ambos pretenden alcanzar sus objetivos estratégicos antagónicos. Y la inmigración, paradójicamente, encaja aun así en las estrategias de ambos partidos.

SOBRE AL AUTOR: David Page Polo (Madrid, 1977) es periodista, máster en Comunicación Política y diploma en Diseño y Organización de Campañas Electorales. Trabaja como redactor en la edición online del diario Expansión y con anterioridad formó parte de las redacciones del semanario Actualidad Económica y de la agencia de noticias Europa Press. Por sus trabajos periodísticos en torno al fenómeno de la inmigración ha sido galardonado con el Premio Internacional de Periodismo Manuel Alcántara 2009 y con el Premio de Periodismo de la UE Juntos contra la Discriminación 2010.